RECOMENDACIONES

- A. RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL CHICANA SOBRE INMIGRACION DEL DIA 24 DE MAYO,1980
- B. CARTA DE DERECHOS PARA TRABAJADORES INDOCUMENTADOS
- C. OPOSICION DEL COMITE PRO DERECHOS (CCR) CHICANOS A LAS RECOMENDACIONES DE LA COMICION SELECTA
- D. ANALISIS DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMICION SELECTA POR EL CENTRO NACIONAL PARA DERECHOS MIGRATORIOS

- A. RECHAZO DE SERVICIOS MEDICOS PARA CIUDADANOS AMERICANOS, PERSONAS CON RESIDENCIA PERMANENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS Y PERSONAS SIN DOCUMENTACION.
 - Afidavit y/o Declaraciones
 - Demandas Formales
 - Documentos Oficiosos
 - Traslados
 - Datos
 - Noticias y Articulos de Prensa

B. USO DE FUERZA MORTAL POR AGENTES POLICIACOS.

- Afidavit y/o Declaraciones
- Demandas Formales
- Documentos Oficiosos
- Traslados
- Datos
- Noticias y Articulos de Prensa

C. ABUSO DE NINOS

- Afidavit y/o Declaraciones
- Demandas Formales
- Documentos Oficiosos
- Traslados
- Datos
- Noticias y Articulos de Prensa

- D. INFLIGIENTO VIOLENCIA FISICA Y INNECESARIA O ABUSO SOBRE SOSPECHOSOS SIN DOCUMENTACION, CIUDADANOS AMERICANOS O CON RESIDENCIA PERMANENTE Y LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS.
 - Afidavit y/o Declaraciones
 - Demandas Formales
 - Documentos Oficiosos
 - Traslados
 - Datos
 - Noticias y Articulos de Prensa

- E. VIOLACIONES SITEMATICAS DE DERECHOS, HUMANOS, CIVILES Y CONSTITUCIONALES.
 - Afidavit y/o Declaraciones
 - Demandas Formales
 - Documentos Oficiosos
 - Traslados
 - Datos
 - Noticias y Articulos de Prensa

- F. ALLANAMIENTO INESPERADO DE COMUNIDADES Y EN LUGARES DE EMPLEO POR AGENTES DE LA PATRULLA FRONTERIZA Y AGENTES POLICIACOS.
 - Afidavit y/o Declaraciones
 - Demandas Formales
 - Documentos Oficiosos
 - Traslados
 - Datos
 - Noticias y Articulos de Prensa

- G. EJECUCION LLEGAL DE LAS LEYES DE IMMIGRACION POR AGENCIAS POLICIAÇAS.
 - Afidavit y/o Declaraciones
 - Demandas Formales
 - Documentos Oficiosos
 - Traslados
 - Datos
 - Noticias y Articulos de Prensa

H. OTROS CASOS.

- Afidavit y/o Declaraciones
- Demandas Formales
- Documentos Oficiosos
- Traslados
- Datos
- Noticias y Articulos de Prensa

GLOSSARY

alien-looking principle-practica de aparienda personal
allegation - alegación
appeal - (v) apelar
appeals - apelación
appellate - corte de apelaciones
assault - asalto personal
statem

Border Patrol - Patrulla Fronteriza

cause of action - alegación legal reclamo legal civilaction - acción civil complaint - demarda, queja constitutional nights-derechos constitucionales counsel - abogado count - corte cruminal action-acción cruminal customs - advana defendant - defendiente (acusado, demandado) detention - detención arresto district judge - juez del distrito federal detained detends demand-exigir federal magistrate - magistrado federal house-residencia, dominilio INS Hold Orden - orden de detención migratoria jurisdiction - jurisdiccion Intimidated - intimidado legal parties - partidorios del litigio lawsuit - litigio

moterial witness - testigo substancial

plaunitiff - demandante

statement of claumealegaciones legales
statutory rights - derechos
estatuales

SDPD-Departamento de Pohicia
de San Diego
testify - manifestan
warrant - orden judiciol
witness - testigo
declarante
unit of hobers corpus ámparo de li bertad porsonal

Hreatening manner-Forma

amenazante

redadas

deportation hearing - audiencia de deportacion due process - procedimiento legal equal protection- protección igual harassment-maltrato involuntary departure forms - formulario de salida involuntaria interrogate - interrogan interrogation - interrogatorio mental distress > sometido a angustia mental humiliation humitlación em barassment vergienya raids - redadas search of seizure - alla nación (del hogar only if of home) seize - secuestrar aprehender



APRIL 11, 1981 SAN DIEGO, CA.

RESUMEN

DEL

TRIBUNAL NACIONAL CHICANO SOBRE INMIGRACION

PRESENTADO A

RONALD REAGAN, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL NORTE

Y

JOSE LOPEZ PORTILLO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA

POR

HERMAN BACA, DIRIGENTE DEL COMITE DE DERECHOS CHICANOS

EN NOMBRE DE



PANELISTS

RUDY ACUNA

PROFESSOR CAL STATE NORTHRIDGE CALIFORNIA

JUAN SOLIS

LEGAL CENTER FOR IMMIGRANTS ILLINOIS

HERMAN BACA

CCR

CALIFORNIA

CRUSADE FOR JUSTICE

RODOLFO GONZALEZ

COLORADO

GILBERTO JASSO NATIONAL OFFICE OF CIVIL RIGHTS G.I. FORUM

LUPE SANCHEZ

ARIZONA FARMWORKERS ARIZONA

JOSE "PEPE" MEDINA

VICTORIA CASTRO

STATE PRESIDENT AMAE

CALIFORNIA

INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE FULL RIGHTS OF UNDOCUMENTED WORKERS U.S./MEXICO

RUBEN SANDOVAL

CIVIL RIGHTS LITIGATION CENTER

MANUEL LOPEZ

MEXICAN AMERICAN NATIONAL ORGANIZATION CALIFORNIA

THE CHICANO NATIONAL IMMIGRATION TRIBUNAL WAS MANDATED IN A RESOLUTION PASSED AT THE MAY 24,1980 CHICANO NATIONAL IMMIGRATION CONFERENCE HELD IN SAN DIEGO CALIFORNIA BY THE FOLLOWING ORGANIZATIONS.

CONTENIDO

- I. Declaracion de Proposito
- II. Carta para el Presidente de la Republica Mexicana Jose Lopez Portillo y Presidente de los Estados Unidos de Norte America Ronald Reagan
- III. Resumen de casos
- IV. Categoria de casos
 - A. Rechazo de servicios medicos para ciudadanos americanos, personas con residencia permanente en los Estados Unidos, y personas sin documentacion.
 - B. Uso de fuerza mortal por agentes policiacos.
 - C. Abuso de ninos
 - D. Infligiento violencia fisica y innecesaria o abuso sobre sospechosos sin documentacion, ciudadanos americanos o con residencia permanente y legal en los Estados Unidos.
 - E. Violaciones sistematicas de derechos, humanos, civiles y constitucionales.
 - F. Allanamiento Inesperado de comunidades y en lugares de empleo por agentes de la patrulla fronteriza y agentes policiacos.
 - G. Ejecucion Llegal de las leyes de Immigracion por agencias policiacas.
 - H. Otros casos.
- V. Recomendaciones



DECLARACION DE PREPOSITO

NOS HEMOS REUNIDO AQUI EN SAN DIEGO, CALIFORNIA HOY, DIA. 11
DE ABRIL DE 1981, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL
TRIBUNAL NACIONAL CHICANO SOBRE INMIGRACION Y DECLARAR A TODA
PERSONA QUE RECONOCE LA DIGNIDAD INHERENTE Y LOS DERECHOS
INNEGABLES DE LIBERTAD, JUSTICIA, E IGUALDAD DE LA RAZA HUMANA,
QUE EN DEFENSA DE NUESTRA GENTE CONDENAMOS LAS VIOLACIONES DE
DERECHOS HUMANOS, CIVILES Y CONSTITUCIONALES, POR EL SERVICIO
DE INMIGRACION Y NATURALIZACION (SIN), LA PATRULLA FRONTERIZA,
Y OTRAS AGENCIAS DE EJECUCION POLICIACA ACTUANDO EN DEFENSA DE
LAS POLITICAS IRRACIONALES, DEGRADENTES, E INHUMANAS DEL
GOBIERNO ESTADOUNIDENSE.

EL TRIBUNAL, ASIGNADO POR MANDATO EN LA CONFERENCIA NACIONAL
CHICANA SOBRE INMIGRACION QUE TOMO LUGAR EL ANO ANTERIOR Y
DONDE PARTICIPARON 1000 PERSONAS. REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE
200 ORGANIZACIONES, HA SIDO ORGANIZADO CON EL PROPOSITO DE:

- (1) PROVEER A TODA PERSONA QUE HA SIDO VICTIMADO POR EL SIN/PARULLA FRONTERIZA UN FORO PARA PRESENTAR TESTIMONIO Y CASOS A UN JURADO COMPUESTO POR LIDERES DISTINGUIDOS NACIONALES.
- (2) DOCUMENTAR NACIONALMENTE LAS NUMEROSAS MASIVAS VIOLACIONES

 DE DERECHOS HUMANOS CONTRA PERSONAS INDOCUMENTADOS EN LA

 1837 Highland Avenue, National City, CA 92050 (714) 474-8195

FRONTERA E.E.U.U./MEXICANA Y TAMBIEN LAS VIOLACIONES DE DERECHOS CIVILES Y CONSTITUCIONALES DE MAS DE 20 MILLONES DE CHICANOS/LATINOS EN LOS E.E.U.U. POR LA SIN/PATRULLA FRONTERIZA, DEBIDO A LA POLITICA DE INMIGRACION.

- (3) DESAROLLAR UNA DECLARACION CHICANA BASADA EN LOS CASOS

 DOCUMENTADOS Y EN LAS DECLARACIONES TOMADAS POR LA COMUNIDAD

 SOBRE LA POLITICA DE LA INMIGRACION Y LA SIN/PATRULLA

 FRONTERIZA PARA SER PRESENTADA A LOS PRESIDENTES LOPEZ
 PORTILLO Y REAGAN.
- (4) PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL TRIBUNAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y WASHINGTON, D.D., Y OTROS GRUPOS INTERNACIONALES.

ENCLUSION QUEREMOS DECIR QUE ES PROPIO RECORDAR LAS PALABRAS DE OTRO INDIVIDUO QUE FUE OPRIMIDO POR UNA POLITICA SIMILAR A LA POLITICA PRESENTE DE INMIGRACION, UN HOMBRE QUE NACIO BAJO LA ESCLAVITUD Y QUE SE DESHIZO DE SUS CADENAS Y DECLARO LO QUE SE TENIA QUE HACER PARA DESHACERNOS DE LA OPRESION. ESE INDIVIDUO FUE FREDERICK DOUGLASS Y SUS PALABRAS SON LAS SIGUIENTES:

"AQUELLOS QUE PRESUMEN ESTAR EN FAVOR DE LA LIBERTAD, Y SIN EMBARGO DESAPROBAN AGITACION, SON HOMBRES QUE QUIEREN EL SEMBRADO SIN CULTIVAR LA TIERRA: ELLOS QUIEREN LLUVIA SIN TRUENO Y RELAMPAGO: ELLOS QUIEREN EL OCEANO SIN EL TEMOR DEL RUIDO DE SUS MARES.

EL PODER CONCEDE NADA SIN LUCHAR - NUNCA LO HA HECHO Y NUNCA LO HARA. ENCUENTRA LO QUE UN PUEBLO SE DEJA SOMETER Y ENCONTRARAS LA INJUSTICIA Y EL MAL QUE SE LE IMPONE AL PUEBLO: Y ESTO CONTINUARA HASTA QUE EL PUEBLO RESISTA CON PALABRAS O CON GOLPES O CON AMBOS. LOS LIMITES DE LA TIRANIA SON PRESCRITOS POR LA RESISTENCIA DE AQUELLOS QUE LA TIRANIA REPRIME."



20 DE ABRIL DE 1981

PRESIDENTE RONALD REAGAN Y JOSE LOPEZ PORTILLO:

EL COMITE PRO DERECHOS CHICANOS, A NOMBRE DEL TRIBUNAL NACIONAL CHICANO DE INMIGRACION QUE SE LLEVO A CABO EN SAN DIEGO, CALIFORNIA, EL DIA 11 DE ABRIL 1981 DESEA FORMALEMENTE PEDIR UNA CONTESTACION A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS ESPECIFICANDO CASOS DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES Y CONSTITUCIONALES DE PERSONAS DE DESCENDENCIA MEXICANA/LATINA POR EL SERVICIO DE INMIGRACION Y NATURALIZACION Y LA PATRULLA FRONTERIZA Y OTRAS AGENCIAS DE ENFORZAMIENTO LEGAL. LA DOCUMENTACION ADJUNTA PRUEBA MAS ALLA DE NINGUNA DUDA QUE ESAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS QUE HAN SIDO COMETIDAS BAJO EL NOMBRE DE LA LEY SON FRECUENTES Y COMUNES. ES NUESTRA POSICION QUE LOS CASOS EN ESTE PAQUETE REPRESENTAN SOLAMENTE LO QUE ES "UNA MERA PRUEBA" DE MALTRATOS DE IMMIGRACION. ESTOS MALTRATOS HAN INCLUIDO RECIENTMENTE:

- I.LA MUERTE DE DOS NINOS EN LA LINEA INTERNACIONAL U.S./MEXICO.
- II. NINOS SEPARADOS DE SUS PADRES FORZADAMENTE.
- III. NINOS ENCARCELADOS EN PRISIONES FEDERALES.
- IV. MUJERES VIOLADAS.
- V. LA HERIDA Y MUERIE DE DOS INDIVIDUOS QUE ESTABAN ESPOSADOS.

EL CONTINUO AUMENTO DE VIOLENCIA Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DENTRO DE LOS ULTIMOS DIEZ ANOS HAN SIDO TOTALMENTE IGNORADOS POR LOS POLITICOS DE AMBOS PAISES.

DEBIDO A ELLO, NOSOTROS EXHORTAMOS QUE ENCLUYAN EN SUS PROXIMAS PLATICAS BINACIONALES LO SIQUIENTES:

I. UN LLAMADO A QUE SE TERMINE DE INMEDIATO EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA Y VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS, CIVILES Y CONSTITUCIONALES DE LOS INDOCUMENTADOS Y TAMBIEN LOS DERECHOS DE VEINTE MILLONES DE CIUDADANOS CHICANOS/LATINOS Y RESIDENTES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS.

- II. ESTABLECER UNA COMISION BINACIONAL PARA INVESTIGAR LAS VIOLENCIAS RELACIONADAS CON ASUNTOS DE IMMIGRACION Y LAS VIOLACIONES DE DERECHOS, FORMADA POR REPRESENTANTES DE LOS E.E.U.U. Y MEXICO, Y TENER AUDIENCIAS EN LAS AREAS MAS AFECTADA POR ABUSOS MIGRATORIOS.
- III. INCLUIR LAS POSICIONES Y RECOMENDACIONES INCLUIDAS AQUI EN CUAL-OUIER DISCUSION DEL PROBLEMA DE INMIGRACION.

ES NUESTRA POSICION QUE LA INTERDEPENDENCIA SOCIAL, ECONOMICA, Y POLITICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA Y MEXICO EXIGE QUE ESTAS ACCIONES SEAN TOMADAS INMEDIATAMENTE. ES EL ANHELO DE LA COMUNIDAD CHICANA QUE LAS VIOLACIONES DE VIDAS HUMANAS, DERECHOS Y DIGNIDAD AQUI DESCRITA TERMINE Y QUE PODAMOS VER EL PRINCIPIO DE UNA TRANSFORMACION RAPIDA, JUSTA, Y HUMANA EN LOS ASUNTOS DE INMIGRACION.

GRACIAS,

HERMAN BACA, PRESIDENTE

lerman Baca

COMITE PRO DERECHOS CHICANOS (CCR)

A. RECHAZO DE SERVICIOS MEDICOS PARA CIUDADANOS AMERICANOS, PERSONAS CON RESIDENCIA PERMANENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS Y PERSONAS SIN DOCUMENTACION.

PROCESO: Jorge Olmos

FECHA: abril de 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

Jorge Olmos fue gravemente herido y llevado al Hospital de la Comunidad. Debido al estado de su herida fue trasladado al "University Hospital" donde fue necesaria la intervencion de un neuro-cirujano, al enterarse este de que Olmos no llevaba consigo identificacion, rehuso autorizar el traslado creyendo, en parte, que podia ser un "inmigrante ilegal," o ciudadano mejicano incapacitado para pagar los servicios medicos. Despues de una protesta de la Comision de Derechos Civiles y de gran presion de la comunidad el "University Hospital" camio la politica de admision en tales casos.

CASO: Maria del Carmen Ordonez y Luis Platon Ordonez

FECHA: 6 de Marzo, 1981

DESCRIPCION DEL CASO:

Maria del Carmen Ordonez y Luis Platon Ordonez son residentes de Laredo, Texas. El dia 13 enero,1980, les fue negada atencion medica en el Hospital Mercy de Laredo, Texas y fueron llevados por la fuerza a un hospital del lado mexicano. Su abogado demando a dicho Hospital Mercy y al Servicio de Ambulantes Delta por haberles negado servicio y por las practicas arbitrarias contra la familia Ordonez. La Sra. se encontraba en cinta y ya al punto de dar luz a su quinto hijo. Fueron traslados por la fuerza al Hospital Civil al lado mexicano sin autorizacion ni orden legal. Antes de llegar a este hospital, la Sra. dio luz a su hijo. La Sra. sufrio gran angus tia, mortificacion y temor por el bienestar de ella y de su hijo.

B. USO DE FUERZA MORTAL POR AGENTES POLICIACOS.

CASO: Hermanos Hanigan

FECHA: 1976

DESCRIPCION DEL CASO:

Tres trabajadores mexicanos indocumentados, Manuel García, Eleazar Ruelas, y Bernabe Herrera, fueron torturados y asaltados. Los tres fueron desnudados, amarrados, torturados, atacados, heridos por disparos de escopete y ahorcados por los hermanos Hanigan. La familia Hanigan fue acusada con violacion del Acto Hobbs de Arizona. Durante el juicio, el padre de los Hanigan murió, uno de los hermanos fue declarado cul pable y el segundo fue declarado inocente.

CASO: Jose Sinohui

FECHA: 2 de Julio, 1977

DESCRIPCION DEL CASO:

Jose Sinohui Jr. murio a causa de un tiro dis parado por el ex-oficial de la Policia del Sur de Tucson Christopher Dean, con un arma de fuego de .45 calibres. Fue herido por la espalda mientras se iba de la escena de un altercado en el cual no habia participado. Dean habia sido absuelto por un jurado de blancos de la Corte Estatal a cargo de causas de homicidio en enero de 1978. La fami lia de Sinohui solicito la intervencion del Gobier no Federal. El Tribunal de Jurados formulo una decision en agosto de 1979 en favor de la familia Sinohui, concediendoles \$150,000.00 como compen sacion de danos. El Tribunal de Jurados ademas dis puso, en favor de la familia Sinohui y contra Dean, la compensacion de \$50,000.00 por danos punitivos comoresultado de la mala conducta de Dean.

CASO: Stella Salazar

FECHA: 27 de Febrero, 1980

DESCRIPCION DEL CASO:

El 27 de febrero de 1980, se mataron dos nacionales mexicanos y fueron otros 12 heridos cuando la Patrulla Fronteriza del condado de Jim Hogg, Texas disparaon a su camion mientras huian. Los agentes de la Patrulla Fronteriza niegan haber disparado al camion. Sin embargo, un agente policiaco del condado de Jim Hogg, llamado Onofre Serna vio a un agente de la Patrulla Fronteriza sacar su arma de su vehiculo. Fotograficas tomados del camion demuenstran las perferaciones causadas por las balas. El caso se presentara a la corte acusando a la Patrulla Fronteriza de haber violado los derechos civiles de los atacados.

CASO: Gilbert Jasso

FECHA: 3 de Enero, 1980

DESCRIPCION DEL CASO:

Relatos exponen que a las 3:00 de la manana, varios policias del departamento policiaco de San Jose entraron en forma forzada y violente sin orden judicial a la residencia de la familia Lopez. Frank Lopez, 57, Tomasa Garcia, 61, y Angel y Evelyn Ramirez se encontraban dentro de la residencia conversando cuando los agentes policiacos tumbaron a los adultos, los atacaron con macanas luego fueron esposados. Frank Lopez recibio cortadas, moretes, y tres costillas rotas. Tomasa Garcia recibio una muneca rota cuando fue arojada al suelo. El caso fue presentado en corte. El caso fue ganado el 27 de febrero de 1981 por el Lic. Alejandro Contreras. Nombrados en el litigio fueron el Sgto. Robert Grant, Sgto.William Mitchell, y los oficiales Jaime saldivar, David Hendrix, Robert Pine y James Wagner.

C. ABUSO DE NINOS

PROCESO: Frank Amaro

FECHA: 1971 a 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

El Sr. Francisco Amaro, representante de de la Organizacion Nacional Mejico-Americano (MANO) describio casos en cual ninos fueron abandonados sin compania despues de que sus padres fueron deporttados de los Estados unidos de Norte America. La unidad familiar fue separada, ninos forzadamente fueron separadados de sus padres y ninguna asistencia fue contratada en localizar y reunir miembros de familia afectada.

CASO: Pedro Velazquez Gonzalez

FECHA: 4 de Septiembre, 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

Un ciudadano mexicano que trabajaba en los EE.UU. fue deportado y enviado a Guatemala por el SIN bajo la alegacion de que parecia un "inmigrante ilegal de Guatemala".

CASO: Christopher Enciso Robles

FECHA: 17 de septiembre, 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

El senor Enciso Robles fue detenido en San Onofre en el 17 de septiembre de 1979, bajo sospecha de ser persona indocumentado. Aunque Enciso Robles mostro su certificado de nacimiento y otros documentos, no fueron aceptados por la Patrulla Fronteriza y fue atacado fisicamente. La "Practica de Aparencia Racial" fue aplicada por la Patrulla Fronteriza en este caso. Los derechos civiles de Enciso Robles fueron violados a traves de tres horas de interrogacion continua, dieciseis horas de encarcelacion y el ser forzado a firmar un documento de salida voluntaria, renunciando asi todos sus derechos a acceso de un abogado, mientras se le abusaba verbalmente, causandole perjuicios emocionales.

D. INFLIGIENTO VIOLENCIA FISICA Y INNECESARIA O ABUSO SOBRE SOSPECHOSOS SIN DOCUMENTACION, CIUDADANOS AMERICANOS O CON RESIDENCIA PERMANENTE Y LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS.

CASO: Elvia Murphy de Dávalos

FECHA: 4 de Febrero, 1978

DESCRIPCION DEL CASO:

La Sra. Murphy de Davalos, acompañada por su esposo Enrique Dávalos Cerda, salieron del trabajo para pasearse en Disneylandia. En las oficinas aduanales de San Ysidro, se les entregaron una forma SW-434 por ambas personas. En la inspección aduanal de San Onofre, fueron detenidos por un agente de la Patrulla Fronter iza y les exigió su forma SW-434. Les informó que necesitaban una forma SW-434 por cada uno de ellos y que la forma SW-434 que tenían estaba incompleta. Tal agente procedió a ordenar al Sr. Dávalos que se fuera. El Sr. Dávalos resistió el orden pero, por fin, fue esforzado a cumplir con el orden. La Sra. Davalos, dirigida a un cuarto, fue ordenada quitarse su ropa. El cuarto estaba sucio y la agente también tenía las manos sucias cuando condució una inspección vaginal de la Sra. Dávalos. Más tarde, sin haberse alimentado desde su salida de Tijuana, fue deportada a Tijuana.

PROCESO: Rogelio Adolfo Mendez-Diaz

FECHA: 17 de marzo de 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

Rogelio Adolfo Mendez-Diaz testifico que Efren Reyes y Benito Rindon, estaban sentados en un camino parimentado como a cincuenta metros de la frontera de los Estados Unidos y presenciaron un incidente en que un agente de la Vigilancia de Frontera (Border Patrol) disparo contra y mato a un inmigrante mejicano e hirio a otro el 17 de marzo de 1979. Los dos hombres trataron de escapar al ser esposado juntos.

PROCESO: Emiliano Zapata Coleman, et al.

FECHA: 29 de junio de 1978

DESCRIPCION DEL CASO:

Alberto Garcia presento una queja el 29 de junio de 1978 contra el Vigilante de Frontera Donald Heidt y otros en nombre de Emiliano Zapata Coleman. La queja alegaba que el Vigilante Heidt dirigio su vehiculo contra Zapata Coleman y despues disparo contra el. Tambien acuso a la Vigilancia de Frontera por el tratamiento inhumano e ilegal de individuos de habla hispana y de la raza negra.

E. VIOLACIONES SITEMATICAS DE DERECHOS, HUMANOS, CIVILES Y CONSTITUCIONALES.

CASO: Daniel Cardona

FECHA: 8 de Septiembre, 1977

DESCRIPCION DEL CASO:

Daniel Cardona, incapacitado mentalmente y ciudadano de lo EE. UU., sin identificacion y documentos, fue parado por la policia sin causa pobable de haber cometido un crimen. No le aconsejaron de sus derechos legales, no le permitieron comunicarse con su familia, ni ser presentado ante el juez. Fue encarcelado en la ciudad de Clovis el 8 de septiembre de 1977, y el dia 9 de septiembre fue entregado al Servicio de Inmigracion y llevado a Fresno a la Patrulla Fronteriza. Despues de ser interrogado, fue llevado a Mexico forzosamente. No le permitieron regresar a los Estados Unidos hasta el 15 de enero de 1978 a cual fecha fue admitado al Centro Medico Valley para recibir tratamiento de un psiquiatra.

CASO: Jose Plancarte

FECHA: 3 de Noviembre, 1977

DESCRIPCION DEL CASO:

Jose Plancarte fue detenido interrogado por un oficial de inmigracion en el Aeropuerto Internacional de San Diego acerca de su estado legal en los Estados Unidos. Plancarte mostro su "mica" pero fue puesto en duda la validez y autentidad de la tarjeta. Plancarte fue forzado a firmar un formulario de salida involuntaria y fue deportado a Tijuana sin oprtunidad de comunicarse con su abogado o recibir audiencia. La deportacion resulto en la perdida de su empleo en los Estados Unidos.

PROCESO: Elezar Escamilla Montoya

FECHA: 19 de abril de 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

Eleazar Escamilla Montoya fue detenido y puesto en custodia por un agente de INS en Chicago, Illinois, mientras iba en camino para ver a su novia. Fue interrogado por investigadores de criminales y forzado a firmar una forma (I-274) involuntariamente, renunciando a su derecho de una audiencia de deportacion que lo escuchara. No se le dio nunca la razon de hacerle firmar la forma I-274. Un abogado de los Estados Unidos protesto contra la practica rutinaria de la INS de obligar a los mejicanos de origin a firmar formas de salida involuntariamente.

PROCESO: Abel Galvan Zavala

FECHA: 21 de julio de 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

El Senor Zavala, un residente legal de los Estado Unidos presento una queja contra la Vigilancia de Frontera (Border Patrol) en San Ysidro por el encarcelamiento ilegal, el abuso verbal y molestacion. El 21 de julio de 1979 la Vigilancia de Frontera (Border Patrol) rehuso aceptar su identificacion personal o tarjeta de identidad militar de los Estados Unidos como prueba de su residencia legal en los Estados Unidos.

PROCESO: Terry Lujan

FECHA: septiembre de 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

En la manana del 28 de septiembre de 1979, el Senor Lujan fue detenido en la estacion terminal de Las Cruces despues de preguntar a los oficiales de INS porque estaban molestando a sus empleados. Enseguida el Senor Lujan fue golpeado por dos agentes de INS y detenido por 3 horas y media. La unica excusa dada for los golpes fue que el se estaba procediendo irrespefuosamente (smart) con un oficial de INS. Fue detenido con la acusacione de que habia atentado el asalto a un agente federal.

CASO: Margarita N. Gutierrez

FECHA: 9 de febrero 1981

DESCRIPCION DEL CASO:

La Sra. Gutierrez, mientras caminaba a casa con su hijo Carlos, fue aprehendida por un agente de la patrulla fronteriza. Siguieron caminando cuando fueron detenidos fisicamente por el agente. La Sra. Gutierrez y su hijo se identificaron como cuidadanos estadounidenses pero el agente aun les dijo "mentirosos." Decidio regresar a su oficina y entregar una queja; obtuvo el nombre del agente y los placas de su vehiculo. Luego observaron el agente dirigirse hacia su hogar, lo cual se lo habian identificado, y en cualquier propiedad dentro de 25 millas de la frontera". Tambien dijo que lo habian trasladado del canada y que debian imponerse a su presencia.

F. ALLANAMIENTO INESPERADO DE COMUNIDADES Y EN LUGARES DE EMPLEO POR AGENTES DE LA PATRULLA FRONTERIZA Y AGENTES POLICIACOS.

CASO: LOS 13 DE VOUGE COACH

FECHA: abril 13 de 1977

DESCRIPCION DEL CASO:

El 13 de abril, 1977, la gerencia de la empresa Vouge Coach, constructor de vehiculos recreacionales localizado en el Valle de San Fernando, California, llamaron al INS para que se llevara a los trabajadores indocumentados. Trece de aquellos trabajadores que apelaron el orden deportivo eran los lideres del esfuerzo de establecer un sindicato en la presa. El caso ha procedido a la corte de apelaciones de trabajadores y el de ser protegido contra ser exculcado y detenido ilegalmente.

PROCESO: Juan Diaz Chaidez

FECHA: 24 de agosto de 1979

DESCRIPTION DEL CASO:

El 24 de agosto de 1979, Juan Diaz Chaidez fue detenido en su negocion en Naperville, Illinois por los agentes de INS de Chicago. Fue interogado por un investigador criminal y obligado a firmar la Forma I-274 autorizando su salida para Mejico y renunciando a su derecho a una audiencia sobre deportacion. El abogado de Diaz Chaide apelo al Distrito de Chicago INS por su practica de rutina de obligar a las personas de origen mejicano a firmar la Formal I-274, autorizando la deportacion y sin derecho a la consulta legal.

CASO: Marcos Espinosa, et. al.

FECHA: 8 noviembre 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

Todos los reclamantes son victimas de redadas conducidas ilegalmente por la policia y la migra en el condado Angelina de Texas. El 8 de noviembre de 1979, en el condado de Angelina de Texas, la migra arresto a Juan Antonio Mendoza y Arturo Mendoza sin fianza (esto en violacion del codigo legal de los EE.UU., secion 1325), y en violacion del primer, tercer, cuarto, quinto, noveno y catorce enmiendas, Estas redadas fueron conducidas porque los reclamantes aparecieron ser extranjeros y eran de decendencia latina, esto en violacion del quinto enmienda de las constituciones de texas, EE.UU. Todos los reclamantes fueron negados la proteccion de acuerdo con sus derechos civiles.

PROCESO: Chema Ramos, et al.

FECHA: 26 de diciembre de 1979 a 23 de enero de 1980

DESCRIPCION DEL CASO:

El Senor Chema Ramos, dueno de la Tienda de Descuentos y de Electronicos, declara que durante el periodo del 26 de diciembre de 1979 al 23 de enero de 1980, la Vigilancia de Frontera de Indio fue culpable de abusos poco comunes con "los individuos de aspecto mejicano" que compraban en su negocio y asistian al Teatro Mejicano. El ha documentado quince ocasiones en las cuales fueron violados los derechos civiles de algunas personas. El ha escrito a los senadores Kenney y Cranston protestando.

PROCESO: Camilo Ramos Gallegos

FECHA: 3 de enero, 1980

DESCRIPCION DEL CASO:

Aproximadamente el dia 26 de enero, 1979, un areglamento de trato colectivo fue firmado por Goldmar, Inc, y los empleados. Aproximadamente el mismo dia, el Sr. Gallegos fue empleado como agostero citrico con Goldmar, Inc. Durante el curso de redada entre la propieda de Goldmar, agentes de la Patrulla Fronteriza el dia 31 , 1979, el Sr. Gallegos fue forzosamente golpiado por la espalda con un barrote, golpeado y patiado mientras en el pavimiento. Fue transportado a la oficina de Phoenix, Arizona, entrevistado y encarcelado en Chandler City, donde fue detenido por siete diaz. No se permitio comunicarse con abogado, llamada telefonica, y fue negado asistencia medica cuando solicito Sr. Gallegos. Despues fue traslado a El Centro, California y fue libre aproximadamente el dia 9 de febrero, 1979. El Sr. Gallegos subsequientmente fue arestado de nuevo y institutaron procedimiento de deportacion contra el. Presentemente el Sr. Gallegos se encuentra encarcelado en Winslow, Arizona y solamente puede comunicarse con su abogado por llamada telefonica por cobrar, y de larga distancia. Camilo Ramos Gallegos peticiono a la corte del districto que prosumera jurisdiccion y que lo transporten a la carcel de Avondale, para falicitar comunicacion con su abogado y que conceda permiso quedarse en Avondale pendiente el resultado del juicio. El demandante se puso de acuerdo de sospender los cargos en ves de un pago de \$850.

CASO: Rafael Garcia

FECHA: 29 de Enero, 1981

DESCRIPCION DEL CASO:

Rafael Garcia, mientras trabajaba de cantinero, fue abusado por un agente de la Policia de San Diego y un agente de la Patrulla Fronteriza. Entraron a su lugar de negocio y procedieron a revisar los sanitarios y demandar la identificacion de su clientela. Ale garon que "siendo agentes federales, tenian la autoridad de hacer lo que querian ". Desde Junio 29 de 1981, cada noche, un agente de la Policia de San Dieo y un agente de la Patrulla Fronteriza, se estacionan fuera del bar y revisan la clientela que entra y sale del bar. A las once de la noche, entran y demandan indentificacion de toda la clientela dentro del bar.

CASO: MARCOS ESPINZOA Y OTROS

FECHA: MARZO 18, 1981 DESCRIPCION DEL CASO:

El dia 18 de marzo respecto al caso de Marcos Espinoza y otros, el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion, por medio de un empleado debidamente autorizado, admitio los siguientes hechos:

- 1. Que durante el mes de noviembre de 1979 los agentes del Servicio de Inmigracion y Naturalizacion entraron al condado de Angelina, Texas con el fin de identificar, arrestar y deportar a las personas que no eran residentes legales de los Estados Unidos de America.
- 2. Que durante el mes de noviembre de 1979, lo agentes del Servicio de Inmigracion y Naturalizacion entraron al condado de Nacogdoches, Texas con el proposito de identificar, arrestar y deportar personas que no eran residentes legales de los Estados Unidos de America.
- 3. Que por el 6 de noviembre de 1979, en el condado de Angelina, Texas, el Defensor, sus agentes y empleados tuvieron en custodia a personas en el condado de Angelina, Texas, por estar en este pais sin la documentación apropiada.
- 4. Que al llevar a cabo estas operaciones en el condado de Angelina, Texas en noviembre de 1979, el Defensor no obtuvo una orden de saqueo autorizandolos para entrar a las residencias.
- 5. Que al llevar a cabo estas operaciones en el condado de Nacogdoches, Texas en noviembre de 1979, el Defensor no obtuvo una orden de saqueo para entrar a las residencias.
- 6. Que al llevar a cabo sus operaciones en el condado de Angelina, Texas en noviembre de 1979, los agentes de la Defensa entraron a los negocios de comercio con el objeto de encontrar a las personas que no eran residentes legales de los Estados Unidos.

Ademas, otras admisiones fueron hechas por el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion respecto a las practicas ilegales cometidas con el proposito de hallar a personas que estan residiendo ilegalmente en los Estados Unidos.

G. EJECUCION LLEGAL DE LAS LEYES DE IMMIGRACION POR AGENCIAS POLICIACAS.

CASO: Raul Gonzalez, et.al.

FECHA: 13 de Septiembre, 1977

DESCRIPCION DEL CASO:

Los Oficiales de Policia de Peoria, Arizona, rodearon el Mercado de Saliba Park y el Mercado de las Tiendas el 13 de Septiembre, 1977 y exigieron a las personas de origen mexicano que presentaran su identificacion y prueba documenta de la legalidad de su presencia en los EE.UU. Habian ido para detener a los "inmi grantes ilegales" que estaban comprando en la tienda. Fueron arrestadas cuatro personas. El 18 de Febrero, 1978, otras siete personas fueron detenidas. las personas de origen mexicano perdieron el uso de sus derechos constitucionales de ser libres de re gistros injustificados y de arrestos y el derecho de proteccion y proceso legal, asi sufrieron la pena, la humillacion y la preocupacion mental. incidentes adicionales de arrestos ilegales de per sonas de origen mexicano por la Policia de Peoria tuvieron lugar en Febrero de 1978 en frente del Mercado de Bodine; y el 26 de Junio, 1978 en el Correo de Peoria.

CASO: Departamento de Policia de Inmigrantes sin documentacion,

en San Diego

FECHA: 29 de junio de 1978

Declaraciones parciales de la politica del Departamento de Policia de San Diego sobre los inmigrantes sin documentacion. No existe una causa probable de detencion por una ofensa criminal, el individuo (inmigrante sin documentacion) puede ser entregado a las Vigelantes de la Frontera en el local donde la detencion tiene lugar. Los oficiales deben juzgar correctamente sobre cuanto tiempo es practico esperar la llegada de una unidad de la Vigilancia de Frontera (Border Patrol) teniendo en cuenta la naturaleza de la ofensa y el impacto sobre la autoridad y fuerza del lugar, asociado con demora prolongadas.

CASO: Angel Hernandez

FECHA: 15 de mayo de 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

Sr. Hernandez, un trabajador indocumentado, fue gravemente herido cuando estaba descargando fardos de heno el dia 15 de mayo de 1979. Se cayo del camion que estaba descargando. Se lastimo la cabeza y quebro su cuello. Ahora el senor Hernandez se quedo quadraplegico de resulta de el accidente. Desde no habia dinero para pagar los tratamientos medicos del sr. Hernandez, el hospital de Albuquerque ordenaron la despedida y se comunucaron con SIN. El teniente gobernado Mondragon intrevenio y transportaron al sr. Hernandez al hospital del estado. SIN ha fechado una cita el dia 29 de julio de 1981 para la audencia de deportacion. Desde las leyes de estado de Nuevo Mexico fallaron protegerlo, Angel Hernandez no recibera compensacion por su grave herida y ademas esta esperando ordenes de deportacion.

CASO: Luis Arquer

FECHA: Septiembre, 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

Luis Arquer, un puertoriqueno y cuidadano de los Estados Unidos, fue detenido por un agente de la patrulla del oeste de Chicago mientras conducia su auto marca Chevrolet del año 1963, en Septiembre de 1979 y se le pido que presentara sus documentos de inmigracion. En septiembre de 1979, otra vez fue detenido por otro oficial de la policia del oeste de Chicago y se le exigieron de nuevo sus paples de inmigracion. Otras tres (3) veces mas el mismo incidente ocurrio mientras se dirigia a su trabajo. Dando prueba con su licen ia de manejar, se le permitio al Sr. Arquer a que continuara su camino. Como resulta de estas acciones por la policia del oeste de Chicago, el Sr. Arquer ha sufrido angustia mental, humillacion y zozobra. El abogado del Sr. Arquer protesto contra est practica rutinaria del departamento de policia del oeste de Chicago de interrogar y molestar a los latinos preguntando acerca de su estado legal de inmigracion.

CASO: Algimiro Gomez

FECHA: Septiembre de 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

Algimiro Gomez, mientras que conducia su carro Chevrolet en el Oeste de Chicago, Illinois, fue detenido por una mujer oficial de policia en Septiembre del ano 1979. La oficial le exigio su "mica". El Sr. Gomez entonces le reclamo sobre que derecho tenia en exigirle su documentacion ya que el podia demostrarle que era ciudadano estado unidence. Almiro Gomez sufrio angustia, humillacion, y verguenza. Su abogado reclamo al Departamento de Policia del Oeste de Chicago la costumbre de detener, interrogar y maltratar a los latinos cuando exigen documentos de inmigracion.

CASO: Pedro Cervantez y Juan Lozano

FECHA: 10 de Agosto, 1979 y 15 de Agosto, 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

Pedro Cervantez, ciudadano de los EE.UU., el dia 10 de Agosto, 1979 fue detenido por el Departamento de Seguridad Publico (DPS) y se le pidio que presentara su visa y su certificado de nacimiento. Cervantez informo a los oficiales que era ciudadano de los EE.UU. Le pusieron las esposas y lo llevaron a la carcel donde permanecio tres dias. A Cervantez no le llevaron nunca ante un juez, una corte, ni un magistrado, no se le informo de sus derechos de consulta legal. Juan Lozano, ciudadano de los EE.UU., el 15 de Agosto,1979, paro en la oficina del DPS en Hereford, Texas para pedir informacion, se le ordeno

mostrar el pasaporte y estuvo detenido por dos horas. Lozano fue detenido sin causa probable de infraccion de ninguna ley. Ambos, Cervantez y Lozano, sufrieron humillacion, verguenza, angustia mental y perdida de sueldo a causa de haber sido ilegalmentes arrestados y detenidos por el DPS de Texas. El abogado de Cervantez y Lozano acuso al DPS de una conducta y politica que violaba a los derechos legales de los Hispanos bajo el Cuarto, Quinto, Sexto y Decimocuarto Enmienda de la Constitucion de los EE.UU.

CASO: Alfonso Guzman Hernandez

FECHA: 24 de Julio, 1980

DESCRIPCION DEL CASO:

El Sr. Guzman Hernandez estuvo detenido envuelto en un accidente en Azusa, California el 24 de julio, 1980. Llegando la policia de Azusa arrestaron al Sr. Hernandez por violacion del Codigo Legal de EE.UU. Secion 1325. El Sr. Hernandez todavia esta encarcelado sin fianza. El Sr. Hernandez esta detenido por la Inmigracio porque es supuesto que ie "ilegal".

CASO: Jose Luis Borja vs. Jorge Teague, et.al.

FECHA: 1 de marzo de 1980

DESCRIPCION DEL CASO:

Jose Luis Borja fue detenido el 26 de dicienbre de 1979 en Denver City, Texas por un diputado al guacil del Condado de Lea, al informarse este de gue Borja habis sido testigo en un caso criminal. El senor Borja se halla detenido indefinidamente basandose en que una orden de dentencion es suficiente para retenerlo. El senor Borja alego que su detencion era ilegal porque no habia habido ninguna garantia de arresto. Las leyes de Nuevo Mexico no estipulan la detencion de testigos presenciales de actos civiles y sin que ningun certificado del juez del Distrito de Nuevo Mexico se hubiera publicado permitiendo la detencion de un testigo de fuera del estado por las autoridades en el caso de un crimen. La continuacion de la detencion del senor Borjas violalas leyes de Nuevo Mexico y las leyes federales. El requirio un decreto de habeas corpus para presentarse ante un juez del Distrito y determinar la legalidad o ilegalidad de su detencion.

CASO: Antonio Montes

FECHA: 27 de AGOSTO, 1981

DESCRIPCION DEL CASO:

Antonio Montes fue arestado el 16 de agosto de 1980 por un Sherife del condado de San Bernardino, California, por supuestamente haber conducido su auto en manera descuidada. Fue encerrado en la carcel del condado de San Bernardino. Nunguna demanda fue levantada contra el Senor Montes pero no fue puesto en libertad hasta el 22 de agosto 1980. El Sr. Montes que firmimente que fue encarcelado por motivo orden de dentencion migratoria por parte de la SIN aun siendo nacido en Buckeye, Arizona. La orden de detencion migratoria fue puesta porque empleados del Departamento de Sherife del Condado de San Bernardino creian que el Sr. Montes era trabajador ilegal. El ha exigido compensacion monetario por haber sufrido privaciones de sus derechos civiles resultando en angustia emocional.

H. OTROS CASOS.

PROCESO: FRED DREW

FECHA: 1966

DESCRIPCION DEL CASO:

Fred Drew protesto contra el adiestramiento inadecuado provisto para los agentes de la Vigilancia de Frontera y la preparacion abusiva de como tratar a los mejicanos. Los comentarios sobre la actitud y los incidentes de brutalidad hacia las personas sin documentacion fueron presentados. Los incidentes de brutalidad habian sido en la forma de abusos fisicos, tratamientos inhumanos, y violaciones.

Las quejas fueron presentadas por el Sr. Drew a INS, pero hasta la fecha, Washington no ha contestado.

CASO: Maria Elena Esquivel

FECHA: Noviembre 26, 1979

DESCRIPCION DEL CASO:

Queja levantada contra A.J. Rodriguez, Inspector de Aduana, S.Y., California insignia No. 12353 por trata abusivo, falta de conducta profesional y maltrato contra Maria Elena Esquivel.

CASO: Lorenzo Rodriguez

FECHA: 7 de Marzo, 1980

DESCRIPCION DEL CASO:

Lorenzo Rodriguez fue acusado de manejar intoxicado el 7 de Marzo,1980 y recibio una sentencia de cinco dias. A pesar de haber cumplido la sentencia, siguio detenido porque la Oficina del Aguacil perdio su dinero. Cuando apelo a su derecho de Amparo de Libertad Personal, el Sr. Rodriguez pidio que no se le detuviera en la carcel despues da haber cum plido su sentencia y que se le devolviera su dinero y que se le pusiera en libertad pendiente de la in vestigacion del Alguacil. Esto se le concedio el 11 de Marzo, 1980.

PROCESO: Alicia G. Rodriguez

FECHA: 24 de octubre de 1980

DESCRIPCION: DEL CASO:

Alicia G. Rodriguez, Contador Publico, comparecio ante de Srta. M.S. Harris, examinador de IRS, quien abusivamente la forzo firmar forma 5816, y con eso acepto pagar la pena de \$100.00 por que Srta. Rodriguez no reviso el estado de inmigracion ni la residencia de sus clientes, Zenaida y Jovita Rodriguez. Alicia Rodriguez declaro que Srta. M.S. Harris le hizo cargos neglegencia u descuidar intencional por las reglas y reglamientos y la dieron ordenes a Alicia que investiga el estado de inmigracion y residencia de sus clientes...Srta. Rodriguez esta apelando el retirado de su firma.

CASO: Roberto A. Acero

FECHA: Oct. 31, 1980

DESCRIPCION DEL CASO:

Queja levantada contra Jack A. Choppin, insignia No. 10781 y Bill Shoney, supervisor de Aduana, S.Y., CA.

Por someter a Roberto A. Acero a trato abusivo e insultante.

CASO: Antonio y Eloy Chavez

FECHA: Noviembre 28, 1980

DESCRIPCION DEL CASO:

Queja levantada contra Kenneth Altman, Inspector de Aduana, insignia No. 12344 en S.Y., CA por conducta poco profesional y abusivo en su trato de Antonio y Eloy Chavez.

CASO: Violacions Inhumanas Contra Ninos, Mujeres y Violencia en la Frontera

CASO: Violaciones Inhumanas Contra Ninos, Mujeres y Violencia en la Frontera

FECHA: 11 de abril, 1981

DESCRIPCION DEL CASO:

Herman Baca, Dirigente del Comite de Derechos Chicanos, presento testimonio sobre encarcelamiento de ninos, violaciones contra mujeres, y violencia en la frontera entre los EE.UU. y Mexico.

- a. Manolo Alberto. El 13 de junio de 1979 un nino de dieziocho meses, cuidadano norteamericano, cuando se le llevaba con rapidez a los Estados Unidos por razones medicas, se le nego entrada en la frontera por decisiones arbitrarias y precipitadas de parte de los agentes de la inmigracion. El nino murio como consequencia.
- b. Mario Canedo. En marzo de 1979, un paciente de cuatro anos, con problemas de corazon que se le estaba tratando en un hospital en los EE.UU. Se le nego visa de entrada multiple y fue demorado por el personal de la inmigracion cuando se le llevaba a un hospital de los EE.UU. en un caso de emergencia. El nino murio en la sala de espera de la oficina de inmigracion.
- c. Marta Elena Parra. El 31 de mayo de 1972, Marta Elena fue detenida y violada por un agente de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU.
- d. Reyes Y Rincon. Dos hombres con nacionalidad mexicana fueron aguiados y balaceados en la espalda mientras trataban de escapar su aprehencion en la frontera.
- e. <u>Balderas</u>. En febrero de 1979, un hombre desarmado fue balaceado en los dos brazos por la Patrulla Fronteriza.
- f. Zarate. Un joven de 16 anos de edad, sin armas, que cruzo la frontera fue seriamente herido con un tiro desde el helicoptero patrullero de la frontera de EE.UU.
- g. Ortiz. El ciudadano de descendencia puertoriquena y americano fue aprhendado sin causa aprobable y fue golpeado hasta tenerlo inconciente para forzarlo a firmar los papeles.
- h. <u>Davalos</u>. Una mujer mexicana viajando como turista con visa fue detenida, separada de su esposo, des pojada y sujeta a una busqueda de la cavidad vaginal, todo sin hechos que establecieron una causa razonable.
- i. Bustamante. Una casa de ciudadanos americanos/mexicanos fue entrada por agentes de la Patrulla Fronteriza sin ordenes legales o causa probable, terrorizando a la madre y a los ninos que estaban con ella.
- j. <u>Vasquez</u>. Un ciudadano nativo de los E.E.U.U. fue parado y detenido en el aeropuerto se San Diego, perdio su vuelo, aunque el presento su licencia de manejar, su tarjeta de negocio y otras identificaciones. La unica razon para su detencion fue que parecia ser de descendencia mexicana.

CASO: Editorial, KGTV 10 San Diego

FECHA: 9 de Marzo, 1981

DESCRIPCION DEL CASO:

Una editroial de KGTV 10 San Diego transmitida por el vice presidente de McGraw-Hill Broadcasting Company, Clayton Brace a las 5 de la tarde y a las 10 del noche en las noticias del 9 de marzo de 1981 y convocando la asistencia "de los altos oficiales" de la Digilancia o Policia del Frontera (Border Patrol), e insistiendo en que sus miembros trabajen juntamente en la frontera y traten a las personas sensata y respetuosamente. Si no lo hacen, la Vigilancia de la Frontera se rera privada de apoyo general de la comunidad que necesita para reforzar la ley.

CASO: Camara Internacional de Comercio de San Ysidro

FECHA: 23 de Febrero, 1981

DESCRIPCION DEL CASO:

Protesta en forma de una carta al Presidente Reagan, fechada el 23 de Febrero, 1981, escrita por la Camara Internacional de Comercio de San Ysidro y referente a la interferencia del gobierno que dificulta seria mente la libertad del sistema de libre demanda, a causa de la falta de respeto a la propiedad privada, y la excesiva y arbitraria reglamentacion y los represivos y abundantes sistemas que dificultan cada vez mas el dirigir o tener su propio negocio. La Camara Internacional de Comercio condena las acciones deliberadas de la Policia de San Diego, de la Patrulla Fronteriza y de las Autoridades de Inmigracion que hacen dificil el desenvolvimiento de sus negocios.

- A. DENIAL OF MEDICAL SERVICES TO UNITED STATES

 CITIZENS, PERMANENT RESIDENT ALIENS AND UNDOC
 UMENTED PERSONS.
 - Affidavits and/or Declarations
 - Formal Complaints
 - Official Documents
 - Transcripts
 - Fact Sheets
 - News Articles

ADMITTED TO MERCY

Badly Burned Child Denied Hospital Bed

Hospital emergency rooms must treat poor aliens — Page B-1

By GREG GROSS Staff Writer, The San Diego Union

A badly scalded 6-year-old boy from Tijuana was denied admittance to University Hospital yesterday because his family could not pay for his treatment.

Neighboring Mercy Hospital, at the request of University Hospital administrators, agreed to admit the child, who has burns over approximately 65 percent of his body and is said to be in poor condition.

University, the county general hospital, trouses the major burntreatment center for San Diego County. It sent a medical team to Tijuana to pick up the child and take him to Mercy, where he was placed yesterday afternoon in its intensive-care unit.

Mercy officials identified the child as Juan Gutierrez. He suffered his injuries last Sunday, they said, but the exact circumstances were not immediately known.

Mercy doctors described Juan's condition as critical and his prognosis as guarded. He had been in a Tijuana clinic since Sunday, prior to being transferred to Mercy.

University Hospital came under criticism this week when it was learned that a neurosurgeon there refused to authorize the transfer of a critically wounded Logan Heights youth from Community Hospital to University, partly in the belief that he might be an illegal alien or Mexican citizen unable to pay for his medical care.

George Fernando Olmos, 16, accidentally shot himself in the head last Sunday with a friend's pistol. Later found to have been born in University Hospital, he too was admitted by Mercy, where he remains unconscious and in critical condition.

(Continued on A-10, Col. 1)

Burned Child Refused Transfer To Hospital

(Continued from Page A-1)

Olmos was first taken by a police ambulance crew to Community Hospital of San Diego, which has no neurosurgeon on its staff. University Hospital neurosurgeon Dr. Randall Smith refused to authorize his transfer to University after learning that Olmos had no identification with him.

Mexican-American community groups have since called for Smith's dismissal and are seeking an investigation by the state Department of Medical Quality Assurance.

University Hospital officers said the decision not to authorize the transfer of Olmos violated hospital policy, and they promised a review of the incident with Smith

A University Hospital spokeswoman said yesterday that the "problem of payment" compelled University not to admit the Gutierrez boy.

"We have to be frank about it," she said. "We're completely out of clinical teaching funds (used to reimburse the hospital when patients cannot pay their bills).

"It's a \$5 million fund and it's out, it's completely gone. There was no money, we couldn't accept (him). Mercy has a lot of money.

Mercy has a lot of money.
"To me," she said, "this shows great cooperation between hospitals."

University called a number of other San Diego hospitals before calling Mercy, which agreed to accept Gutierrez, she said.

Mercy spokesman Bailey Gallison confirmed that University administrators had called Mercy's executive director, Sister M. Joanne, asking that they admit Gutierrez. Although Mercy has no special burntreatment center, there is nothing unusual in Mercy treating burn victims, Gallison said.

Racism charge leveled at University Hospital

By DARLA WELLES

Charges of "racism and blatant disregard for human life" have been leveled at University Hospital by a member of the hospital's own com-

munity advisory board.

Norma Freeman, who is also administrator of the Chicano Community Health Center, made the allega-tion following an incident Sunday night in which a neurosurgeon at the hospital refused to accept the transfer of an injured Mexican-American youth from Community Hospital.

"I realize this puts me in an unusual position since I am on the advisory board," she said. "But I can't stand by and let this go.

"In my view, this was a matter of racism and a blatant disregard for human life.'

Freeman said yesterday that she wants the incident investigated by the local Medical Quality Review Board, of which she is also a mem-

University Hospital director Sheldon S. King said he is "astounded"

by Freeman's allegations.
"That we didn't take the patient is a reality," King said. "The patient should have been brought here. That he wasn't, I'd say, was a matter of an error in physician's judgment. But to say it was a matter of racism astounds me.

"I don't see how after 13 years of community service on a totally nondiscriminatory basis, one incident can be interpreted as representing a hospital policy of discrimination. And I'm totally astounded at this

coming from Norma Freeman, who is on our advisory board and knows our policies."

The patient, George Olmos, 16, was in "very critical" condition today at Mercy Hospital, where he was taken after a sharp exchange between physicians at Community and University.

Dr. Tony Haftel of Community Hospital claims that Dr. Randy Smith of University refused the pa-tient on the grounds that the hospital was "tired of being a dumping ground for illegal aliens." Smith denies that race was an issue.

"Randy Smith is not a racist," King said. "He has told me that he was concerned about accepting re-

See RACISM, B-6

*Racism

CONTINUED FROM B-1

sponsibility for the patient during transport. He re-ferred to the situation as practicing neurosurgery by telephone."

While King denied that race was an issue in the incident, he conceded that what he termed "history" may have been a contributing factor. That is, University officials feel that other hospitals in the area sometimes transfer patients not for medical reasons, but because the patients are determined to be unable to

pay for their care.

He stressed that the hospital is not a "charity hospital," but that it delivers care to patients who have no other means of paying.

The care is provided under contractual agreement with the county and through special state funds distributed to the University of California teaching hospitals by the UC system's board of regents.

The county contract, King said, does not provide coverage for transfer patients. It is limited to emergency care, he said, and treat-ment at another hospital prior to arrival at University precludes coverage.

But the county policies, King said, do not preclude the delivery of care to pa-tients who have no means of paying for their care.

All patients brought to the hospital in need of emergency care, he said, are

And the cost for providing that treatment runs into the

millions each year, he said. He said that the hospital has provided \$5 million worth of care from the special state funds during the past fiscal year. In addition, the cost for treatment not reimbursed by Medicare and Medi-Cal programs is expected to run to shout \$2 million. And had about \$8 million. And bad debts to about \$2 million. King said the hospital does not break those figures

down according to ethnicity or nationality.

But he said that he has no

doubt that the hospital meets its responsibility for providing care to members of the minority community, regardless of ability to pay.

Figures contained in a report prepared by the hospital at the request of the community advisory board indicate the hospital's minority patient load exceeds the minority population in the community at large. IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS LAREDO DIVISION

L-81-14

MARIA CARMEN ORDONEZ and LUIS PLATON ORDONEZ and all Similarly Situated,

Plaintiffs

VS.

MERCY HOSPITAL OF LAREDO, INC., DELITA AMBULANCE SERVICE, GILBERTO VIERA, ERNESTO FLORES, and MARY ADELE FUCHS

Defendants

CIVIL ACTION NO:

I.

INTRODUCTION

1. This action is brought pursuant to the Hill-Burton Act (Title VI, Hospital Survey and Construction Act of 1964, 42 U.S.C. §§291 et. seq. and Title XVI, National Health Planning and Resources Development Act of 1974, 42 U.S.C. §300 et. seq.); the Civil Rights Act of 1871, 42 U.S.C. §§1981, 1983, and 1985(3); the Fifth and Fourteenth Amendments to the U.S. Constitution; the Alien Torts Act, 28 U.S.C. §1350; the Immigration and Nationality Act and the U.S. Constitution, Article VI, Clause 2, Article I, Section 9; and the laws of the State of Texas. Plaintiffs were denied access to the defendant hospital and taken by force from Laredo, Texas to a hospital in the Republic of Mexico.

II.

JURISDICTION

- 2. This court has jurisdiction pursuant to 28 U.S.C. §1331 (federal question); 28 U.S.C. \$1343 (civil rights); and 28 U.S.C. \$1350 (alien torts). The amount in controversy exceeds \$10,000, exclusive of costs.
- 3. Declaratory and injunctive relief is authorized by 28 U.S.C. \$\$2201 and 2202. Plaintiff further invokes this Court's pendant jurisdiction to hear State claims.

III.

PARTIES

PLAINTIFF

4. Plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ is a citizen of Mexico. On

January 13, 1980, plaintiff was a resident of Laredo, Webb County, Texas. 5. Plaintiff LUIS PLATON ORDONEZ is a citizen of the United States and is the minor child of plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ. CLASS ACTION 6. Plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ brings this cause as a class action pursuant to Rule 23(b) (2) of the Federal Rules of Civil Procedure on behalf of herself and all others similarly situated; as follows: 1. All indigent foreign born residents of Webb County, Texas eligible for Hill-Burton or emergency hospital care and denied such care because of the unlawful practices of defendants MERCY HOSPITAL, FIORES and FUCHS; 2. All foreign born persons admitted to defendant MERCY HOSPITAL for emergency care and similarly transferred without notice and informed consent to the Republic of Mexico. 7. The class is so numerous that joinder of all members is impracticable. There are questions of law and fact common to the class. The claims of the named plaintiff are typical of the claims of the class and plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ will fairly and adequately protect the interests of the class. 8. The defendants have acted or refused to act on grounds generally applicable to the class, thereby making appropriate injunctive and declaratory relief with respect to the class as a whole. DEFENDANTS 9. Defendant MERCY HOSPITAL OF LAREDO is a publicly supported hospital which serves Laredo, Webb County, Texas. 10. Defendant MARY ADELE FUCHS is a member of the Governing Board of Mercy Hospital of Laredo. She is a resident of Laredo, Webb County, Texas. 11. Defendant ERNESTO M. FIORES, JR., is the administrator of Mercy Hospital of Laredo and is responsible for managing and directing the affairs of the hospital. He is a resident of Laredo, Webb County, Texas. 12. Defendant DELITA AMBULANCE SERVICE is an ambulance company which provides ambulance service to residents of Laredo, Webb County, Texas. It is located in Laredo, Webb County, Texas. 13. Defendant GILBERTO VIERA is the owner and operator of Delta Ambulance

IV.

STATEMENT OF THE CASE

- 14. On January 13, 1980, plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ was taken by a City of Laredo Fire Department ambulance to defendant MERCY HOSPITAL OF LAREDO, hereinafter referred to as HOSPITAL. Plaintiff was in labor and was about to give birth to her fifth child.
- 15. Upon arrival at defendant HOSPITAL, plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ was examined by nurses employed by the HOSPITAL. Plaintiff's mother and aunt, Elvira Gonzalez and Horencia Guerrero, who accompanied plaintiff, were directed to the admitting office. Plaintiff's mother and aunt informed defendant HOSPITAL employees that plaintiff was indigent and an undocumented citizen of Mexico, residing in Laredo, Texas.
- 16. Despite the imminent birth of ther child, plaintiff was denied further admission to defendant HOSPITAL. Defendant HOSPITAL employees called defendant VIERA and DELTA AMBULANCE SERVICE and ordered such defendants transport plaintiff to the Hospital Civil, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico.
- 17. Without notifying plaintiff of the transfer and without her permission, plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ was carried by defendant HOSPITAL employees to defendant DELTA's ambulance and was forcibly taken from defendant HOSPITAL to the Hospital Civil by defendants DELTA and VIERA. Without lawful authority and against the consent of plaintiff ORDONEZ, defendants willfully detained plaintiff until defendants had actively and forcibly transported plaintiff from the United States. In carrying out their unlawful detention of plaintiff, defendants willfully and maliciously assaulted plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ.
- 18. During the course of the transfer and before arriving at the Hospital Civil, plaintiff delivered her child, plaintiff LUIS PLATON ORDONEZ. Plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ has suffered emotional distress, embarrassment, and fear for her physical safety and that of her child. Because of defendant's conduct, plaintiff LUIS PLATON ORDONEZ has suffered and will suffer injury in establishing and proving his United States citizenship.
- 19. Pursuant to Title VT, Hospital Survey and Construction Act of 1964 (Hill-Burton Act), 42 U.S.C. §§291 et. seq., and the National Health Planning and Resources Act of 1974, 42 U.S.C. §§300 et. seq., defendant

HOSPITAL has received federal funding from the United States Department of Health, Education and Welfare in excess of \$4,979,000. In return for such funds, defendant HOSPITAL made assurances that it would provide a reasonable level of uncompensated care to needy persons and assure that hospital services would be made available to the entire community.

- 20. Defendant MOSPITAL has received during 1979 \$85,000 from the City of Laredo, Texas. Defendant HOSPITAL, in return for such contribution has promised to provide hospital care for persons unable to pay. In addition, defendant HOSPITAL has received during 1979 \$135,000 from the County of Webb, Texas for indigent care in Webb County, Texas. Defendant HOSPITAL, FLORES and FUCHS are obligated pursuant to Article 4434a of the Texas Civil Statutes to provide hospital care and treatment in all emergency cases.
- 21. During all times mentioned herein, defendants HOSPITAL, FIORES and FUCHS have separately and in concert, acted under color of state law, custom, ordinances, usages, and regulations of the State of Texas and County of Webb. Said defendants, separately and in concert engaged in conduct to the injury of plaintiffs, depriving plaintiffs of the rights, privileges, and immunities secured plaintiffs by the Fourteenth Amendment to the U.S. Constitution and the Civil Rights Act of 1871. Furthermore, defendants conspired to detain and forcibly transport plaintiffs for the purpose of depriving plaintiffs of equal protection and due process of the laws.
- 22. Defendants have violated the intent and purposes of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. §§1101 et. seq., and the treaties of the United States, by forcibly taking plaintiffs from the United States to the Republic of Mexico.
- 23. Plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ filed an administrative complaint with the United States Department of Health and Human Services on April 8, 1980
 The Attorney General has not brought suit for compliance.

V.

CLAIMS FOR RELIEF

FIRST CLAIM

24. By forcibly detaining plaintiffs and transporting them to the Republic of Mexico without plaintiffs' consent, defendants have deprived plaintiffs of their right to due process of law.

25. This action, taken by the defendants HOSPITAL, FLORES, AND MARY ADELE FUCHS, under color of state law, deprived plaintiffs of their rights as protected by the Fifth and Fourteenth Amendments to the U.S. Constitution and the Civil Rights Act, 42 U.S.C. §1983.

SECOND CLAIM

- 26. Defendants' action was taken to deny medical care and treatment to plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ and force her from the United States solely because of her alienage. Defendants have thereby denied plaintiff her rights to equal protection of the laws.
- 27. Defendants have violated plaintiff's rights as protected by the Fourteenth Amendment to the U.S. Constitution and the Civil Rights Act, 42 U.S.C. §1981.

THIRD CLAIM

- 28. By conspiring one with the other to deny medical services and treatment to plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ and forcibly taking plaintiff to Mexico, solely because of plaintiff's alienage, defendants have deprived plaintiff of her rights to equal protection of the laws and equal privileges and immunities under the laws.
- 29. Defendants have violated plaintiffs rights as protected by the Fourteenth Amendment and the Civil Rights Act, 42 U.S.C. §1985(3).

FOURTH CLAIM FOR RELIEF

- 30. Defendants wrongfully detained plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ against her will until defendants had succeeded in transporting plaintiff to the Republic of Mexico.
- 31. Defendants have violated plaintiff's rights under the laws of the State of Texas in that she was falsely imprisoned by defendants.

FIFTH CLAIM

32. In carrying out their wrongful detention of plaintiff,
MARIA CARMEN ORDONEZ, defendants further violated plaintiff's rights as
protected by the laws of the State of Texas in that defendants assaulted
plaintiff.

SIXTH CLAIM

33. By forcibly taking plaintiffs to the Republic of Mexico, defendants

have violated the intent and purpose of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. §§1101, et. seq., and the Constitution of the United States, Article VI, Clause 2 and Article I, Section 9.

SEVENTH CLAIM

- 34. Defendants HOSPITAL, FLORES, and MARY ADELE FUCHS, were required to comply with the requirements of the Hill-Burton Act and the federal regulations promulgated thereunder. Such defendants have violated the Act and its regulations by:
 - a. Failing to provide hospital services to all persons residing in the service area;
 - b. Denying services to indigents residing in the service area because of alienage;
 - c. Denying emergency services to indigent aliens; and
 - d. Taking emergency patients to facilities in the Republic of Mexico without prior consent of the patient and a medical determination of the risk to the patient.
- 35. Plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ suffered great physical and mental injury as a result of the violations and is entitled to redress pursuant to the Hill-Burton Act.

VI.

WHEREFORE, plaintiffs respectfully pray for the following relief:

- A. That the court enter a declaratory judgment that defendants' acts, policies, and practices complained herein violate the rights of plaintiffs secured by the Civil Rights Act of 1871, 42 U.S.C. §§1981, 1983, 1985(3); the Fifth and Fourteenth Amendments to the United States Constitution; the Immigration and Nationality Act and the U.S. Constitution, Article VI, Clause 2 and Article I, Section 9; the Hill-Burton Act; and the laws of the State of Texas;
 - B. That the Court issue an injunction permanently enjoining
- 1. defendants MERCY HOSPITAL, FLORES, and FUCHS from denying hospital care to foreign born residents of Webb County, Texas;
- 2. defendants from transporting foreign born persons taken and or admitted to defendant MERCY HOSPITAL to the Republic of Mexico without notice to such persons, without their informed consent; and without a prior medical determination as to the risk to the person.

C. That plaintiff MARIA CARMEN ORDONEZ have judgment for damages in the amount of \$100,000.00;

2 34

4.1

2 WA

- D. That plaintiff LUIS PLATON ORDONEZ have judgment for damages in the amount of \$50,000.00;
- E. That plaintiffs be awarded reasonable attorneys fees pursuant to 42 U.S.C. §1988; and
 - F. That the Court grant any and all relief deemed just and appropriate.

Respectfully submitted,

LEE J. TERAN
TEXAS RUPAL LEGAL AID, INC.
1719 MATAMOROS
P.O. BOX 888
LAREDO, TEXAS 78040
512-727-5191

LINDA R. YANEZ
TEXAS RURAL LEGAL AID, INC.
1154 E. ELIZABETH, SUITE 501
BROWNSVILLE, TEXAS 78520
512-546-5558

VIIMA S, MARTINEZ
MORRIS J. BALLER
MEXICAN-AMERICAN LEGAL DEFENSE AND
EDUCATIONAL FUND
28 GEARY STREET, 6TH FLOOR
SAN FRANCISCO, CALIFOPNIA 94108

JOAQUIN G. AVILA
JOSE GARZA
NORMA V. SOLIS
MEXICAN-AMERICAN LEGAL DEFENSE AND
EDUCATIONAL FUND
201 N. ST. MARY'S STREET
517 PETROLEUM COMMERCE BUILDING
SAN ANTONIO, TEXAS 78205
512-224-5476

BY:

LEE J. TEMAN ATTORNEY FOR PLAINTIFFS

- B. USE OF DEADLY FORCE BY LAW-ENFORCEMENT OFFICIALS.
 - Affidavits and/or Declarations
 - Formal Complaints
 - Official Documents
 - Transcripts
 - Fact Sheets
 - News Articles

DEADLY FORCE

EXECUTIVE COMMITTEE

Dr Salvador Herrera
Coalition Co-Chairperson
Chairman of the Board
National Association of
Farmworker Organizations (NAFO)

Manuel A. Romero, Esq. Coalition Co-Chairperson National Co-Director La Raza Legal Alliance (LRLA)

Lydia Bracamonte Administrative Secretary International Lady's Garment Workers Union Midwest Region

Otilia Bustamante
Chairperson, Cochise County
Committee for Justice in
the Hanigan Case

Hector Campov. Esq Co-Chairperson Tucson Coalition for Justice

Raymond F. Martines Major, USAF (Ret.) President, Retired Hispanic Military Officers Association

Wesley Young, Vice President National Alliance of Postal and Federal Employees

MEMBERS

Judge Ben Aranda, President La Raza National Bar Association

Herman Baca, Chairman Committee for Chicano Rights (CCR) San Diego, California

Fr. Virgil Blum, S.L. President Catholic League for Religious and Civil Rights

Ruben Bonilla, Esq President, League of United Latin American Citizens (LULAC)

lose A Bracamonte, Esq. United Legal Workers Union of Chicago, Illinois

elipe Flores, Executive Director Centro de Inmigración Georgetown Univ. Law Center

Paul Harris, Esq National President National Lawyers Guild (NLG)

ose A. Medina, Chairperson Immigration Committee La Raza Legal Alliance (LRLA)

Alfredo C Montoya Executive Director Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA)

David Montoya
National President
National INAGE Inc.
idbert Padilla
Secretary-Treasurer
Lint-d Farm Workers Union
fary Potter, President

Catholics for Christian Political Action (CCPA)

upe Saldaña Chairman American G I Forum

or Irving Wainer
National Steering Committee
Equal Rights Congress (ERC)

COORDINATING COMMITTEE

intonio Bustamante Angie Cano Divia Cano Jamuel Delgado Janiel Haro Tandace Kattar om Kilbride Armando Lopez eticia Peña

EGAL COUNSEL

Turton Wechsler, Professor of Law American University (Wash., D.C.)

Edward Morgan, Professor of Law
 Antioch School of Law (Wash, D.C.)

Liben Sandoval, Director Civil Rights Litigation Center (San Antonio, Texas)

NATIONAL COALITION ON THE HANIGAN CASE



1332 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20005 (202) 347-2407

CONTACT:

FOR IMMEDIATE RELEASE
March 7, 1981

Antonio Bustamante (602) 884-5820 (day) 623-9461 (night)

HANIGAN SENTENCE MUST COMPORT WITH JUSTICE

Tucson, AZ--Today's press conference was called to address our concerns over the upcoming sentencing of Patrick Hanigan, who on February 23, 1981, was convicted of violating the Hobbs Act by robbing and torturing three undocumented Mexican farmworkers, Manuel Garcia, Eleazar Ruelas and Bernabe Herrera.

U.S. District Court Judge Richard Bilby will sentence Hanigan in Tucson on April 6, 1981.

Violations of the Hobbs Act carry a maximum penalty of 20 years imprisonment and a \$10,000.00 fine. However, the defendant was found guilty on three counts (one for each victim) and the maximum penalty in this case would actually be 60 years and \$30,000.00.

We have no way of knowing what kind of sentence Judge
Bilby is inclined to prescribe. Moreover, we do not deem it
appropriate to invade his judicial province by advocating a
specific term of years or fine. However, because of the
unfortunate history underlying similar brutality cases,

we feel compelled to speak out. We hope, in the name of justice, that the sentence meted out is commensurate with the extreme gravity of the atrocities committed.

No event in recent history more accurately justifies our apprehensions than the the Jose Campos Torres case of Houston, Texas. On May 5, 1977, Torres, a Vietnam veteran, was arrested for a simple disturbance in a local bar. Instead of routinely booking and holding him, six Houston police officers decided to teach Torres some "respect" for the law and sadistically beat him unconscious. Not satisfied with the brutal punishment they administered, the cowardly assailants threw their victim's body into the bayou where he drowned.

Three of the policemen were indicted for this senseless murder in state court only because one young officer who witnessed the incident refused to continue covering up for his veteran colleagues. This rookie broke the "buddy code" by turning state's witness and testifying against his fellow officers. As a result, three of Torres' killers were convicted on misdemeanor charges of criminally negligent homicide instead of the actual crime committed: first degree murder.

An all white state jury assessed a one year term of incarceration--not in the penetentiary--but in the local jail. In addition, the officers were each fined the ludicrous amount of \$1.00. Adding insult to injury, the jurors then proceeded to probate both the sentence and the fine, with the result that Torres' murderers were released without ever serving a day in jail.

The sense of outrage endured by the Hispanic community over the state jury's "sentence" defies articulation. The community demanded federal intervention, because as so many times in the past, the state proved callously unwilling to protect the human rights of Chicanos. Ruben Sandoval, a reputed San Antonio civil rights attorney, was enlisted to lead the fight, and finally in December, 1977, the Justice Department announced it would prosecute four of Torres' murderers for violating his civil rights.

Federal prosecutors succeeded in securing a conviction of three policemen. However, racism still prevailed. Ross Sterling, the presiding U.S. District Court Judge, unconscionably sentenced the three to one and ten year sentences—all of which he also probated. In other words, the convicted officers were spared having to serve any time in the penetentiary.

Not only did the federal judge endorse the bigotry of the Texas state jury, he also broke the law. The officers were convicted of a felony carrying a maximum penalty of life in prison. In such circumstances, the law requires a sentence of more than one year. Justice Department lawyers appealed the illegal sentence and ultimately prevailed upon the U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit to reverse the sentence and remand to the federal trial judge with orders to impose a new sentence. The appeals court judges expressed grave concern over Judge Sterling's lenient sentence.

Notwithstanding the Fifth Circuit's express manifestation of concern, and in one of the most shameful episodes of American criminal jurisprudence, Judge Sterling announced a new sentence of one year and ONE DAY! Given an opportunity for parole, this meant the officers would probably serve only three months or so in a minimum security, "country club" facility.

We could cite example after example of similar sentencing shams which rather than vindicate our civil rights, serve as judicial approval of the violence visited upon not only our community, but other minority groups in this country.

We wish to direct Judge Bilby's attention to the abuse of discretion for which some of his brethren are responsible. We ask that he be sensitive to the destructive racism which has shamed and tarnished an otherwise magnificent legal system.

IN RE THE MATTER OF THE KILLING OF: JOSE SINOHUI, JR.

REQUEST FOR NEW GRAND JURY

SUBMITTED TO

HONORABLE CHARLES B. RENFREW

DEPUTY ATTORNEY GENERAL

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

BY

AMERICANS FOR DEMOCRATIC ACTION

LA RAZA LEGAL ALLIANCE

LA RAZA NATIONAL BAR ASSOCIATION

MEXICAN AMERICAN LEGAL DEFENSE AND EDUCATIONAL FUND

NATIONAL BAR ASSOCIATION

NATIONAL CONFERENCE OF BLACK LAWYERS

NATIONAL JURY PROJECT

NATIONAL LAWYERS GUILD

NATIONAL WOMENS LEGAL DEFENSE FUND

THE GRAND JURY PROJECT

OCTOBER 31, 1980 WASHINGTON, D. C.

THE JOSE SINOHUI NATIONAL SUPPORT COMMITTEE

The attached is a Memorandum in support of convening a new Grand Jury in the matter of the death of JOSE SINOHUI, JR. on July 2, 1977 at the hands of then South Tucson Police Officer CHRISTOPHER DEAN. This request was discussed at a meeting between Justice Department Officials, including Judge Renfrew and the undersigned Sinohui family attorney and others representing the Justice Department, members of Congress, and groups interested in justice in this case. At that time, it was agreed by Judge Renfrew that he would make the final decision on the question of convening a new Grand Jury, and that that decision would be given top priority within the Justice Department and would be resolved upon an expedited basis.

MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES

HISTORY OF THE CASE

Jose Sinohui, Jr. was killed by a shot fired from former
South Tucson Police Officer Christopher Dean's 45 caliber weapon
on July 2, 1977. The deceased was, in accordance with police
orders, proceeding away from the scene of a disturbance in which
he had no involvement when he was shot in the back by Christopher
Dean. Dean fired seven shots in the direction of Sinohui's
vehicle, including the fatal shot, but later testified that he
was merely shooting at the tire of the vehicle. Eyewitness testimony
revealed that there was no justification for Dean's actions in
firing the shots and that, furthermore, the fatal shot was fired
at close range and was carefully aimed at Jose Sinohui's back.

Immediately after Dean was cleared by an all white state court jury on homicide charges in January of 1978, the Sinohui family requested that the Federal Government intervene to see that justice was done in this case which had become a highly visible case of police brutality in the State of Arizona, the Southwest and the nation.

It was not until July of 1979 that the Federal Government finally announced that a Grand Jury would be convened in the case to consider whether Civil Rights charges should be filed against Dean, who had been terminated from the City of South Tucson's Police Force by that time. Evidence was produced in front of the Grand Jury in the form of live testimony from eyewitnesses and experts involved in the investigation of the case. Many documents were shown to the Grand Jury. At least one expert witness, Mr. Larmour, was cross-examined by the government prosecutors involved in the proceeding. It can be assumed that the voluminous eyewitness testimony concerning the incident was contradictory since it included, presumably, Dean's testimony and that of his fellow officer, David Novotny. Since the Justice Department announced

that the purpose of the Grand Jury at the time it was convened was not to render an indictment but merely to investigate the totality of the circumstances, it is assumed that there was no attempt by the Justice Department to marshal the evidence in such a way as to explain the contradictions involved in the testimony of the numerous eyewitnesses, including Dean and Novotny and those who had no motive to falisfy who had previously gone on record as indicating there was no justification for Dean's actions. This gives rise to the question, why after the Justice Department had the case under consideration for a year and a half did it deem it appropriate to convene an investigative Grand Jury? It should be noted that it is the general practice of the United States Attorney's Office in Arizona to provide grand juries with the testimony of only one witness, usually a border patrol agent or F.B.I agent. This fact leads one to the conclusion that the Justice Department had no intention to obtain an indictment for civil rights violations in this case when it announced that the Grand Jury would "investigate" the case. This abundance of prosecutorial caution has led to a belief that the Justice Department is acting as a defense attorney in this matter rather than a vigorous prosecutor. It is well known that there are plenty of qualified defense attorneys in the United States who would be willing to represent police officers charged with Civil Rights violations. It is submitted that the Justice Department should have taken a much more vigorous role in the prosecution of this case from the very early stages.

5

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

After many months of delay in obtaining an indictment from the Grand Jury which heard the evidence in August of 1979, the civil wrongful death action which had been filed by the Sinohui family resulted in a Judgment in their favor and against Christopher Dean and the South Tucson Police Department in March of 1979. The state court judge, Judge Ben Birdsall, who tried the case, found

in favor of the Sinohui family in the amount of \$150,000.00 compensatory damages against both Dean and South Tucson, and further found in favor of the Sinohuis and against Dean in the amount of \$50,000.00 in punitive damages as a result of his extreme misconduct. Further, the judge made specific findings of fact and conclusions of law which made it clear that Dean was guilty of violating Jose Sinohui's Civil Rights when he unjustifiably shot him in the back. Notwithstanding this clear and unambiguous finding by a respected member of the Arizona judiciary, the Justice Department delayed until October 17, 1980, to come back before the Grand Jury, some fifteen months after the evidence had been presented, to close out the case. It is our understanding that witness summaries were presented to the Grand Jury at that time, and the proceedings lasted a total of four hours, which represents only a fraction of the time that was taken to present the voluminous eyewitness testimony fifteen months earlier. The proceedings which took place on October 17th came days before the final transcripts of the civil trial were completed by the court reporters who had worked that case.

2

3

5

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

It was understood by those close to the case, in light of Judge Renfrew's statements in May of 1980, that the department would not appear before the Grand Jury to close out the case until the civil transcripts had been fully considered. Thus, the appearance before the Grand Jury, only days before important evidence was readied for consideration, has perplexed the undersigned as well as others who are knowledgeable of the case. The appearance made by the Justice Department in turning its back upon relevant and important evidence, in the form of civil trial testimony from Dean, Novotny, a respected toxicologist named Ray Morano, and Sergeant Olsen, chief homicide investigator, has confirmed that the Justice Department is not interested in Civil Rights cases concerning minorities.

-3-

The civil trial testimony of Dean and Novotny revealed numerous contradictions in their prior testimony and brings out the important point that Dean and Novotny had spent hours together immediately after the shooting working on their police reports back at the South Tucson Police Station. Indeed, Novotny drove Dean back to the South Tucson Police Station immediately after the shooting. Mr. Morano has conducted thousands upon thousands of tests of blood-alcohol readings. He works with the City of Phoenix Police Department and was independent of both the Tucson Police Department crime lab and the Tucson coroner, who worked together in analyzing the occular fluid taken from the deceased after his death. Mr. Morano testified that the blood sample which he obtained from the Coroner's Office indicated that at the time of Jose Sinohui's death, there was no alcohol in his bloodstream. This finding contradicted the findings of the Tucson Police Department, a police department whose conduct had been called into question by the incident. Mr. Morano was not able to understand why the Coroner's Office sent the occular fluid to the Tucson Police Department without testing it at its own facility and was further perplexed by the failure of the Tucson Police Department and the Coroner to test the deceased's blood for its alcohol content, which is a much more common test than the occular fluid test which was administered. Mr. Morano's testimony was given pursuant to an offer of proof made by the plaintiffs after the civil judge ruled that the other parties were not given adequate notice that Mr. Morano would testify. As the state criminal trial transcripts reveal, Dean's defense includes a heavy attack on Jose Sinohui personally for being "drunk" at the time of the shooting, and his attorneys have used the tainted Tucson Police Department occular fluid evidence to convince the triers of fact that Dean's highly improbable story of self-defense and fleeing felon must be true. This highly prejudicial evidence

2

5

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

-4-

was not countered in front of the Federal Grand Jury by Mr. Morano's findings, and it is believed that his findings must be considered in order for the Federal Grand Jury to render a credible decision.

The conclusion that the Federal Grand Jury forgot relevant evidence by the time it received its briefing by United States

Attorney Michael Hawkins, is inescapable. Mr. Hawkins' attempts to summarize the testimony of the witnesses clearly prejudiced the proceedings inasmuch as the Grand Jurors had heard live eyewitness testimony previously, had been allowed to forget that testimony in the intervening fifteen month time period, and then had been confronted with less than verbatim accounts of the witness testimony.

At the time that the Sinohui case was placed before the Federal Grand Jury, the Hanigan case was set for Grand Jury consideration. In a very short period of time, in contrast to the treatment of the Sinohui case, the Justice Department obtained indictments of the Hanigan brothers. These indictments and the ensuing trial were accompanied by highly prejudicial publicity from sources including the local Tucson media, which in large part attacked hispanics for having sought indictments in the Hanigan case, and to a fairly substantial extent, the Sinohui case as well.

Further adverse publicity followed the Sinohui civil
Judgment awarded by Judge Birdsall when the punitive damages
portion of the Judgment was paid through Dean's deeding of his
home over to the Sinohuis. The local press treated this collection process as something that should give rise to great sympathy
in favor of Mr. Dean and made the story front page news. No
mention was made of the fact that Dean's insurer did not cover
the punitive damages by reason of the fact that punitive damages
arise out of the willful, wanton, extreme misconduct of a defendant.
It is our understanding that the Grand Jurors were in no way

insulated from this extremely prejudicial publicity, and the entire process was thereby tainted.

6

8

9

10

11

12

13

15

17

18

19 20

21

22

24

25

26 27

28

30

31

32

The decision to obtain the transcripts of the civil trial testimony was not made by the Justice Department until July of 1980, nine months after the first portion of the civil trial transcripts became available, and four months after the final decision was reached by Judge Birdsall in the case. It is unknown to the undersigned why the Federal Government, in a case of this magnitude, was not able to obtain all of the civil trial transcripts during the period of July, 1980, through October 17, 1980. This inability to accomplish obtainable goals has also led to the belief that Justice Department has not vigorously sought justice in this case. Then, after waiting four months for transcripts which should have been obtained immediately, the Justice Department decided to go back before the Grand Jury after a fifteen month lag, only a few days before all of the relevant civil trial transcripts were completed. Even discounting the four month delay in obtaining the transcripts, there is no reasonable explanation for the eleven month delay that preceded the decision to obtain the transcripts. While it has become a cliche to say that justice delayed is justice denied, no formulation of words is more descriptive of the history of this case when the role of the Justice Department is considered.

BASIS FOR PROSECUTION

The elements of the case for prosecution for the deprivation of Jose Sinohui's Civil Rights can be made out in a very substantial way under the facts and law relevant in this case.

Dean's defense that he shot to stop a fleeing felon is not only totally unsubstantiated by any of the credible witnesses but is not available to him even under his version of the facts. Dean testified at the civil trial that he was aware that he could only

fire upon a fleeing felon as a last resort if absolutely necessary. See, transcript of Dean's civil trial testimony at pages 98 and 99. Accord, former Arizona Revised Statutes Section 13-461 which was in effect as of the date of the subject killing and which can be found in the Appendix to former Title XIII, which is located in Volume 5(a) of the Arizona Revised Statutes, at page 716. A copy of that section is attached for your easy reference as Exhibit "A". It is clear that the state law provided that only those homicides which are "necessarily committed" can be justified under Arizona law. Dean further testified that the absolutely necessary standard was a part of his departmental regulations in existence as of the date of the killing. It seems clear that the words "absolute" and "last resort" add nothing to the word "necessary" when the words are used together. However, even if it is assumed for the sake of argument that there are two different standards which come into play depending on which word or combination of words is used, it is clear that under the circumstances of this case, all of the credible witnesses indicate that Jose Sinohui could have run former Officer Dean down if he had so desired but stopped in order to save Dean's life and therefore could not have been a fleeing felon as Dean alleged, and secondly, that the police helicopter overhead and the half dozen or more police and police vehicles were in a better position to apprehend Jose Sinohui than was Dean. Dean's killing of Jose Sinohui was neither necessary nor absolutely necessary, and certainly was not a "last resort".

1

2

5

6 7

8

9

10

11

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Jorge de la Garza, an Arizona State Corrections Officer at the Arizona State Prison, who observed the events in question, leaves no doubt that Dean's story to the effect that he never shot to kill but always shot at the tire of the vehicle was manufactured after the events. De la Garza's testimony at page 9 of the civil trial transcript indicates that Dean fired a "well

aimed shot at the back of the cab with his arm held horizontal." Later on in that transcript, de la Garza testified at page 13 that after the truck had already passed Dean, Dean took a well aimed shot at the cab and only after that did he lower his arm to shoot at the tires. This leaves the very distinct impression that Dean attempted to cover up his well aimed shot with the shots at the tires. At page 16 of de la Garza's testimony, he testifies that the truck stopped to avoid hitting Mr. Dean. At page 17, de la Garza testifies that Dean did not check the traffic before he entered the streets. At page 19 de la Garza's testimony conflicts again with Dean's when he points out that the truck made no sharp turning movements at all, whereas Dean testified that the truck turned sharply more than once in an attempt to run Dean down. At page 21, de la Garza testifies that the distance between Dean and the truck at the time he fired his well aimed shot at the cab was five to seven feet.

2

3

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

23

24

25

26

27 28

29

30

31

32

It is well settled that 42 U.S.C. §1983 is the civil counterpart of 18 U.S.C. §242. Greenwood v. Peacock, 484 U.S. 808, 16 Law. Ed. 2d 944, 86 Sup. Ct. 1800 (1966); Robinson v. Bergstrom, 579 F.2d 401 (1978 7th Cir.Ct.App. Ill.); Wegwart v. Eagle Movers, Inc., 441 F.Supp. 872 (1977 Dist.Ct. Wisc.) Judge Birdsall, in the civil case against Dean, found expressly, in his findings of fact and conclusions of law, that Dean had violated Jose Sinohui's Civil Rights under 42 U.S.C. §1983. This finding, supported by overwhelming evidence at the civil trial, was on basically the same issues which must be dealt with under 18 U.S.C. §242. In the eyes of many, the lack of diligent prosecution by the Federal Government, even in the face of Judge Birdsall's ruling directly on point, gives rise to a belief that the Justice Department is not interested in the Civil Rights of minorities. Certainly, the standard of probable cause which must be met to justify criminal prosecution is quite similar to the civil standard of preponderance of the evidence by which Judge Birdsall was bound. His finding indicates that the evidence showed that it was more probable than not that Dean violated Jose Sinohui's Civil Rights. In fact, the punitive damages which were ordered against Dean gives reason to believe that the judge was satisfied beyond any reasonable doubt that extreme misconduct had occured.

The important case of <u>Screws v. U.S.</u>, 89 Law. Ed. 1495, 65 Sup.Ct. 1031, 325 U.S. 91 (1945), has been used by some in the Justice Department as authority for the proposition that the burden of specific intent in a Federal Civil Rights case is nearly impossible to meet. The assertion is false. At 225 U.S. 105, the court states in pertinent part:

"...When they act willfully in the sense in which we use the word, they act in open defiance or in reckless disregard of a constitutional requirement which has been made specific and definite. When they are convicted for so acting, they are not punished for violating an unknowable something."

Even actions taken in reckless disregard of the rights of the victim are punishable under the Screws' standard. Here, as in the Screws case, the basic right to trial in a court of law, not a "trial by ordeal", was terminated by the actions of Christopher Dean in slaying Jose Sinohui. At page 106 the court says in pertinent part:

"...Those who decide to take the law into their own hands and act as prosecutor, jury, judge, and executioner plainly act to deprive a prisoner of the trial which due process of the law guarantees him. And such a purpose need not be expressed; it may at times be reasonably inferred from all the circumstances attendant on the act. [citation of authority]

The difficulty is that this question of intent was not submitted to the jury with the proper instructions. The court charged that petitioners acted illegally if they applied more force than was necessary to make the arrest effectual or to protect themselves from the prisoner's alleged assault. But in view of our construction of the word "willfully" the jury should have been further instructed that it was not sufficient that petitioners had a generally bad purpose. To convict it was

-9-

necessary for them to find the petitioners had the purpose to deprive the prisoner of a constitutional right, e.g. the right to be tried by a court rather than by an ordeal. And in determining whether that requisite bad purpose was present the jury would be entitled to consider all the attendant circumstances—the malice of petitioners, the weapons used in the assault, its character and duration, the provocation, if any, and the like."

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

23 24

25

26

27

28

30

31

32

Thus it is clear that the <u>Screws'</u> standard requires that all of the attendant circumstances to the act be taken into account to determine whether the requisite intent can be found. Secondly, reckless disregard of the rights of the victim to a trial in a court of law is sufficient to bring the act within the constitutionally required level of intent.

The "attendant circumstances" revealed by eyewitness testimony reveal that Officer Ford, of the Department of Public Safety, was expediting traffic and moving it along at the time Jose Sinohui's pickup truck proceeded out into the street on South 6th Avenue. See, the civil trial transcript of Robert Ford at page 14. Officer Ford testified that there were many cars proceeding on South 6th Avenue during the times he was directing traffic on that thoroughfare. This directly contradicts Dean's testimony that there was no traffic on South 6th Avenue at the time he entered the Street. As earlier indicated, Corrections Officer Jorge de la Garza testified that Dean did not even bother to look for traffic when he entered the street. Officer Ford was surprised to hear shots being fired even though he was directly across from Dean and next to the truck when Dean opened fire. As his testimony indicates at page 18 of the civil trial transcript, Ford was not in fear for his life by reason of Jose Sinohui's truck, but was in fear after the shooting started. As the passenger in the truck Mario Corrales testifies at page 26 of the civil trial transcript, after Dean started firing on the vehicle, Jose Sinohui then proceeded away from Dean and towards

the Veteran's Administration Hospital which was only a few blocks away from the scene of the shooting. Officer Daykin, in his civil trial testimony also reveals that he was surprised when Dean opened fire on the vehicle. Neither Daykin, an officer with the Tucson Police Department, nor Ford saw any justification for firing upon the vehicle.

Eyewitness Charles Holland, an employee of Tucson

Newspapers, at page 13, confirms de la Garza's testimony to the

effect that Dean did not look for oncoming traffic as he stepped

off the curb and onto the street. Holland also confirms de la

Garza's testimony as to the horizontal level of Dean's arm and

the fact that the deceased did nothing of a provocative nature

at the point it came near, and then proceeded past, defendant

Dean. See, the civil trial transcript of Charles Holland at

pages 22 and 25 respectively. Norma Munoz at page 31 of her civil

trial transcript, also testifies that when Dean was firing at

the vehicle from the back of it, he was firing with his arm and

weapon held straight and steadily held out horizontally with the

street.

There was no contention by anyone at any of the proceedings held with respect to this matter to this date that Jose Sinohui or his passenger Mario Corrales were involved as participants in any disorderly conduct at the scene of the shooting. Pursuant to police instructions at the scene, Sinohui and Corrales decided to move away from the scene and the law enforcement activities which were taking place there.

Robert Ford testified at page 19 of his civil trial transcript that at the time of the shooting, a police helicopter was overhead with searchlights focused on the people at the scene and was an available alternative which could have been used to pursue the Sinohui vehicle rather than the use of deadly force which Dean chose to use. As Norma Munoz testified at page 35 of

her civil trial transcript, as soon as the shots were fired by Dean, a number of officers immediately left the area of the shooting in pursuit of the vehicle using police vehicles which were readily available for them as a reasonable alternative to the use of deadly force chosen by Dean.

Officer Olsen, the Chief Homicide Detective dispatched to investigate the slaying of Jose Sinuhoi, found no evidence of any marijuana use by either Sinohui or his passenger Corrales, as his civil trial testimony reflects. However, the fact that a few marijuana seeds were found under the seat of the pickup truck has been used by Dean's attorneys to put the victim on trial, just as the intoxication evidence was used to put the victim on trial. Neither Olsen's civil trial testimony nor Ray Morano's civil trial testimony concerning the marijuana and alcohol intoxication issues had been reviewed by the Justice Department as of the date this case was closed out on October 17, 1980. These transcripts and all other available evidence must be reviewed by the Justice Department and the new Grand Jury at the earliest practicable date.

There can be no lag between the time that the new

Grand Jury reviews the evidence in the case and the time that it
is requested to make a decision on indictment. Vigorous prosecution must be had on this case in order to restore faith in the
system of justice in this country. The taint brought on by the
fifteen-month lag in the Grand Jury decision and the failure to
consider the civil trial transcripts which were, by all indications,
to be considered by the Department of Justice, must be removed
by the convening of a new Grand Jury and a vigorous prosecution
vindicating the Civil Rights of Jose Sinohui, Jr.

§ 13-461. Justifiable homicide by officer

Homicide is justifiable when committed by public officers and those acting by their command in their aid and assistance either:

- In obedience to any judgment of a competent court, or
 Necessarily committed:
- (a) In overcoming actual resistance to the execution of some legal process, or in the discharge of any other legal duty.
 - (b) In retaking felons who have been rescued or who have escaped.
- (c) In arresting persons charged with felony who are fleeing from justice or resisting arrest.

716

The New York Times

-NEW YORK, THURSDAY, OCTOBER 9, 1980-

Prayers Seek Action in Tucson Slaying

TUCSON, Oct. 8 — A dozen people gathered in the front yard of the modest twobedroom house of Joe and Lupe Sinohui on this city's predominantly Mexican-American South Side last Thursday evening. The group, friends and Sinohui family members and a friendly priest, celebrated mass as they had every Thursday evening for 108 weeks and vowed to continue until the Justice Department takes action in the case of a police officer who fatally shot 24-year-old Joe H. Sino-

who tatally state and the state of the state son's city limits, was acquitted on a charge of involuntary manslaughter. Since then the Sinohui family has won damages in a civil suit and the Federal Justice Department has begun an investigation, but the family and its supporters have lost faith that the Government will

come through for them.

Their reaction has been to mount an extraordinary effort to pressure the Justice Department into acting, including persuading 34 members of Congress to write letters on their behalf. And they continue

to hold the weekly prayer vigils.

Mr. Dean had responded to a call to help Tucson police quell a late-night disturbance on South Sixth Avenue on July 2, 1977. According to court testimony, Officer Dean was about to escort a prisoner across the street to a police vehicle when Mr. Sínohui drove by in a 1953 pickup. According to the testimony, this is what hap-

The truck, which passed close to Offi-cer Dean, came to a halt as directed by Mr. Dean, drifted backwards slightly, and proceeded forward again. As the truck passed closely by Officer Dean a second time, he drew his handgun and began shooting at it. After the truck had passed him, Mr. Dean fired a few more shots, one of which pierced the cab of the pickup and struck Mr, Sinohui in the back, killing him.

An Argument of Self-Defense

Five weeks later, a Pima County grand jury indicted Officer Dean on a charge of involuntary manslaughter. Testifying at his trial six months later, Mr. Dean told an eight-person all-Anglo jury that he had thought the pickup truck was aimed at him and that he had shot at it in self-de-

fense. His shots were intended for the pickup's tires, Mr. Dean said. He added that there was a problem in showing that he had been trying to stop a fleeing "willful intent" on the part of Mr. Dean.

Glon, the felony having been the attempt

One department official said that the to run him over.

"I never intended to kill anyone," he testified. His account was backed up by a fellow officer, David Novotny. Others witnesses gave varying accounts of the ruck's speed and its position in relation to Officer Dean, but most who testified said that they saw no apparent reason for Mr. Dean to fire at the vehicle. The jury found Mr. Dean not guilty.

The Sinohul family immediately peti-tioned the Justice Department to review the case for possible civil rights viola-

When the department did not respond by the following November, Mrs. Sinohui, traveled to Phoenix to meet with then-Deputy Attorney General Benjamin R. Civiletti. In June 1979, the Justice Department announced that it would begin a grand jury investigation of the shooting. Despite intermittent assurances from Washington that a decision was forthcoming, the grand jury, whose term expires at the end of 1980, has not acted.

\$200,000 Award in Civil Suit

The Sinohuis were heartened when a judge ruled in their favor in a civil suit against Mr. Dean and the City of South Tucson, awarding them \$200,000 in puniive and compensatory damages.

In that case, Judge Ben C. Birdsall of Pina County's Superior Court concluded that the shot that killed Mr. Sinchui was "willfully and intentionally aimed" and that Mr. Dean "violated the civil rights of the decedent by killing him in the performance of his duties as a police officer front-yard prayer service. "So far he without justification." The City of South Tucson has agreed to pay \$150,000, and Her husband, Joe, a mechanic who Mr. Dean has agreed to turn his house over to the Sinohui family.

Justice Department officials familiar with the case have said, however, that this country. I used to encourage boys to they consider it unlikely that Federal join the service, like when my Joe en-

investigation had been kept open largely because of fears about how Hispanics in the Southwest would react to an an-

The growing Hispanic-American civil rights movement has brought numerous allegations of police brutality in the Southwest to the attention of the Justice Department. The Sinohui case is one of the most prominent, because of the ac-tivities of sympathizers in Arizona and in Washington, where Daniel A. Haro, a graduate of the Antioch School of Law. has lobbled on Capitol Hill, convincing members of Congress that the circumstances of the case deserve close review.

A spokesman for Mr. Civiletti said today that the Justice Department "is energetically prosecuting civil rights cases concerning Hispanics, but we have to have sufficient facts to prove a civil rights violation.'

Mr. Dean, who was dismissed from the South Tucson police force as a result of the shooting, has left Tucson and cannot be reached. His attorney, James E. Quig-ley, maintains that any Federal trial would result in another acquittal. "The stories supporting Sinohui would dissolve like a puff in the wind," he said.

Sympathy or Justice?

The Sinohuis have become embittered. When I met with Civiletti he told me I didn't need his sympathy, that I needed justice," Mrs. Sinohui said after a recent

works with heavy machinery at a nearby mine, added, "When we asked for justice, we thought we'd get it. I've lost faith in charges would be brought, partly because of the difficulty in resolving the



Friends of Joe and Lupe Sinohul attend mass in their front yard of their Tucson, Ariz., home every Thursday evening to commemorate the shooting death, three years ago, of their son Joe.

November 6, 1980

The Honorable Charles B. Renfrew Deputy Attorney General U. S. Department of Justice Washington, D. C.

Dear Judge Renfrew,

We, the leaders of major civil rights organizations, religious denominations and labor unions in this nation, call upon you once again to review the status of the celebrated Jose Sinohui case.

We have recently learned of the grand jury's decision to return a no-bill on the question of Mr. Christopher Dean's indictment for the deprivation of Jose Sinohui's civil rights. After reviewing the incredible series of violation of rights which have transpired involving the Jose Sinohui case, we feel that injustice has once again prevailed over the Hispanic community.

We ask you to consider the following improprieties in this case, as we have, and ask you to join with us in seeking a just resolution of this matter.

First: The fifteen (15) months delay between the presentation of evidence before the grand jury, and a four hour summary prior to a decision being made, is both morally and legally inexcusable. This practice did not allow for an adequate familiarity of witnesses' testimony, and other detailed information vital for establishing the burden of proof-probable causenecessary for securing an indictment from a grand jury.

The delay can be attributed to the negligence of the Tucson State Court, in their slow response in meeting your request for a copy of all the transcripts. If a simple request for a transcript could only be accomplished as quickly as the taking of an Hispanic's life, there would have been no delay. We feel that the delay was based on administrative negligence in meeting a simple request.

The long delay also allowed members of the grand jury to develop a negative attitude because of events taking place in Tucson, Arizona. At this time, many people in the Tucson area were being influenced by the negative publicity and high emotions being generated by the Hanigan case.

As you can imagine, Judge Renfrew, allowing this criminal investigation to languish so incredibly long with the results ending in only a no-bill by the grand jury, can only add credence to the speculation that the Justice Department does not consider the civil rights of minority people to be of any priority.

Page 2

Second: The Sinohui case went before the grand jury without considering all of the evidence. Portions of the transcripts from the state civil suit trial for wrongful death, which contained vital testimony that may have helped the grand jury in its' deliberations, were not even evaluated. You had promised members of the Jose Sinohui national support committee that all the evidence which the support committee deemed essential to the case would be considered.

Third: The prosecutor's effort in seeking the indictment against police officer Christopher Dean does not appear to have been pursued vigorously. This brings into question the Justice Department's commitment in this case, and the commitment of the U. S. Attorney's office in Arizona. Given the apparent lack of aggressiveness in the prosecution, it may be necessary to appoint a special prosecutor.

Fourth: The grand jury which heard the case was not sufficiently representative of the racial, ethnic, and social-economic composition of the Tucson community.

The inadequate, still incomplete investigation of the circumstances surrounding the death of Jose Sinohui, has caused the surviving family and members of the community, untold pain and anguish.

It is our recommendation to you now that the Justice Department convene a new grand jury which represents a true cross section of the Tucson community, and that this new grand jury be presented with all of the evidence, including relevant civil suit transcript testimony, without delay.

We appreciate your taking the time to meet with a group of Hispanic leaders in Washington, D. C., on October 21, 1980, to discuss their concern over the Justice Department's handling of the case and to hear their recommendation that another grand jury be convened.

At that meeting, you stated that if for any reason you felt that the formation of a new grand jury was not the appropriate action to take, you would advise the group in advance and meet with them once again allowing them to present their full arguments.

We certainly hope that such a meeting will not be necessary, but are desirous of participating if it is necessary.

Page 3

The Sinohui case has now been dragged on for three years by the Justice Department. The Department's reluctance to act flies in the face of Attorney General Benjamin Civiletti's promise to make the enforcement of Hispanic American civil rights a high priority during this administration.

To avoid further suffering on the part of the Sinohui family, to insure justice, and to provide all Hispanic Americans with renewed hope that the federal government is willing to act decisively when the human and civil rights of minorities are denied, we urge strong and aggressive leadership from you regarding this important matter.

Sincerely yours,

CIVIL RIGHTS ORGANIZATIONS

Ruben Bonilla, National President

League of United Latin
American Citizens (LULAC)

Jose Cano

Chairman, The American G.I. Forum Chairman, SER Jobs for Progress

Raul Yzaguirre

President

National Council of La Raza

Vernon Jordan

Executive Director National Urban League

Carl Holman

President

National Urban Coalition

Lupe Saldana

Immediate Past President

The American G.I. Forum

Page 4

Dr. Ana Maria Perera

President
National Association
of Cuban American Women
Member Attorney General's Hispanic
Adivsory Committee

David Montoya National President National Immage, Inc.

Mary Alice Theiler
President
National Lawyers Guild

Reversed Benjamin Chavis, Jr.

Director
United Church of Christ

United Church of Christ Commission for Racial Justice Washington, DC.

Wylie Rogers
Executive Director
Equal Rights Congress

JAM P. Hdamo

Dr. John P. Adams
Director
Department of Law,
Justice and Community Relations
The United Methodist Church

Leon Shull

National Director

Americans for Democratic Action

Vilma Martinez

President, General Counsel
Mexican American Legal Defense
and Education Fund (MALDEF)

Judge Benjamin Aranda National President

National President La Raza National Bar Association

Gary Potter President Catholics for Christian

Political Action (CCPA)

Page 6

CLERGY LEADERS

Host Rev. Robert Sanchez Archbishop of Santa Fe, New Mexico

Most Rev. Patrick Flores Archbishop of San Antonio, Texas Chairperson Texas Advisory Committee to the U.S. Commission on Civil Rights

Most Rev. Thomas A. Donnellan Archbishop of Atlanta, Georgia

Most Rev. Rembert G. Weakland Archbishop of Milwaukee, Wisconsin

Most Rev. James Rausch Bishop of Phoenix, Arizona

Arxiliary Bishop of San Diego, CA.

Most Rev. Juan Arzube Auxiliary Bishop of Los Angeles, CA

Most Rev. William S. Skylstad Bishop of Yakima, Washington

Most Rev. Rene A. Valero

Auxiliary Bishop of Brooklyn, N.Y.

Most Rev. Jose Madera

Bishop of Fresno, California

Most/Rev. John J. Fitzpatrick Bishop of Brownsville, Texas

Bishop of Stockton, California

Page 7

Raymond J. Sena

Most Rev. Raymond J. Peña Bishop of El Paso, Texas

Most Rev. Francis J. Green Bishop of Tucson, Arizona

Pablo Sedillo
Executive Director
Secretariat for Hispanic Affairs
NCCB/USCC

Rev. Frank Ponce Associate Director

Secretariat for Hispanic Affairs

NCCB/USCC

Dr. Cyprian Lamar Rowe, F.M.S.

Executive Director

National Office for Black

Catholics (N.O.B.C.)

cc: President James Earl Carter

Ambassador Esteban Torres, Special Assistant to the President for Hispanic Affairs

Hon. Edward Kennedy, Chairman - Senate Judiciary Committee

Hon. Dennis DeConcini, U. S. Senator, Arizona

Hon. Benjamin Civiletti, Attorney General

Hon. Drew S. Days III, Chief Civil Rights Division

Hon. Michael Hawkins, U.S. Attorney, Arizona

Bates Butler III, First Assistant U. S. Attorney, Arizona

Page 8

LABOR UNIONS AND ORGANIZATIONS

Cesar E. Chavez

President United Farm Workers

of America, AFL-CIO

Alfredo C. Montoya Executive Director Labor Council for

Latin American Advancement

Wesley Young Vice President

The National Alliance of Postal and Federal Employees

Frank Martino

President

International Chemical

Workers Union Ernest R. Marlow

Washington Representative

for Frank Martino

CARDISS COLLINS
7TH DISTRICT, ILLINOIS

CHAIRWOMAN: CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS

COMMITTEES:
FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OPERATIONS
CHAIRWOMAN: MANPOWER AND
HOUSING SUBCOMMITTEE
SELECT COMMITTEE ON
NARCOTICS ABUSE AND CONTROL

Congress of the United States House of Representatives Washington, D.C. 20515

PLEASE SEND REPLY TO:

2438 RAYBURN OFFICE BUILDING WASHINGTON, D.C. 20515

SUITE 3880

- 230 SOUTH DEARBORN STREET
 CHICAGO, ILLINOIS 60604
 (312) 353-5754
- ☐ 3851 WEST ROOSEVELT ROAD
 CHICAGO, ILLINOIS 60624
 (312) 522-2442

November 24, 1980

The Honorable Drew Days, III Assistant Attorney General Civil Rights Division U.S. Department of Justice Washington, D.C. 20530

Dear Sir:

The case of Jose Sinohui has become a concern among minority communities throughout the nation due to the severity of the violation of civil rights involved and what seems to be the reluctance of the Justice Department to expedite the case quickly and by recommending an indictment to the grand jury.

It has been brought to my attention that the grand jury recently met after 15 months and returned a decision of No-Bill on the question of Mr. Christopher Dean's indictment for the deprivation of Jose Sinohui's civil rights. That decision, in my orinion, is not surprising. I have been informed that the U.S. Attorney for Arizona has not presented any evidence during this 15 months to the grand jury and therefore it is difficult to comprehend why the members of the grand jury took over four hours to summarize the case. Fifteen months is a long time in which to try to remember witnesses' testimonies and other detailed information vital to establishing the burden of proof-probable, cause-necessary for securing an indictment in any case.

It has also been pointed out that the final decision to go before the grand jury was made without acquiring and considering all evidence. Vital testimony that may have aided the deliberations was not reviewed. Members of the Jose Sinohui National Support Committee have stated that they were assured that portions of the state civil suit trial transcripts for wrongful death would be considered.

Allowing this criminal investigation to larguish so long with results ending in only a No-Bill by the grand jury can only add credence to the speculation that the Justice Department does not consider minority civil rights a priority.

A recent article in the "New York Times" accurately reflects the sentiment and concerns of many and outlines what could be a correct Justice Department view of reaction to showing "willful intent" on the

The Honorable Drew Days, III Page 2 November 24, 1980

part of Mr. Dean.

It is my belief that having reviewed all the circumstances surrrounding the Sinohui case, justice can best be administered through convening a new grand jury and by having that jury adequately reflect a cross-section of the Tucson community which would include Mexican, Black and Native Americans. In addition, having that jury review and consider all pertinent evidence presented in a comprehensive manner with respect to the Sinohui case should allow justice under the judiciary system.

This effort would demonstrate to all Americans that the Justice Department of our nation is truly ready and willing to afford all people equal protection under the law through the judicial process and continues its effort to uphold this country's commitment to human rights and equal justice.

As you are aware, many of my colleagues of both Houses of Congress have expressed their concern regarding the Sinohui case in recent months as have many other organizations and coalitions. I join them in urging your full consideration of this significant case and of its impact on the Hispanic and other minority communities which involved police officials' treatment of those minorities.

It is my hope that you will favorably respond to the question of convening a new grand jury in the Sinohui case. Please keep me informed of the progress of this case should any action be forthcoming.

Yours truly,

CARDISS COLLINS

Member of Congress

CC/CS/amp



Leadership Conference on Civil Rights

2027 Massachusetts Ave., N.W., Washington, D.C. 20036 202/667-1780

November 7, 1980

OFFICERS
HONORARY CHAIRMEN
A. Philip Randolph
Roy Wilkins
CHAIRMAN
Clarence M. Mitchell

SECRETARY Arnold Aronson LEGISLATIVE CHAIRPERSON

Jane O'Grady COUNSEL Joseph L. Rauh, Jr.

EXECUTIVE COMMITTEE

Bayard Rustin, Chairman

A. Philip Randolph Institute

Wiley Branton NAACP Legal Defense & Education Fund, Inc.

David Brody Anti-Defamation League of B'nei B'rith Sen. Edward W. Brooke National Low Income Housing Coalition

Jacob Clayman National Council of Sanior Citizens, Inc.

Douglas A. Fraser International Union of United Automobile Workers

Dorothy Height National Council of Negro Women Msgr. George Higgins U.S. Catholic Conference— Division of Urban Affairs

Futh J. Hinerfeld League of Women Voters of the U.S. Benjamin L. Hooks

National Association for the Advancement of Colored People

Ronald Ikejiri Japanese American Citizens League

Vernon Jordan
National Urban League
Janice Kissner
Zeta Phi Beta Sorority

Iris Mitgang
National Women's Political Caucus

Gilbert Padilla
United Farm Workers of America

Reese Robrahn
American Coalition of Citizens
with Disabilities

John Shattuck American Civil Liberties Union

Eleanor Smeal
National Organization for Women
Rev. Leon Sullivan

Opportunities Industrialization Centers
J. C. Turner
International Union of Operating Engineers

Kenneth Young

AFL-CIO

COMPLIANCE/ENFORCEMENT

COMPLIANCE/ENFORCEMENT COMMITTEE William Taylor, Chairman Center for National Policy Review

DIRECTOR
Marvin Caplan
EXECUTIVE ASSISTANT
YVONNE PRICE
SPECIAL CONSULTANT
J. Francis Pohlhaus
PUBLIC AFFAIRS DIRECTOR
Natalle P. Shear

OFFICE MANAGER Pamela Y. Wheaton Honorable Charles B. Renfrew
Deputy Attorney General

Department of Justice

Room 4111

10th and Constitution Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20530

Dear Deputy Attorney General Renfrew:

The case of Jose Sinohui is one that demands immediate attention.

I heartily concur with those who are seeking further consideration by the Department of Justice as stated in the letter sent to you on November 6 over the signatures of a number of religious, labor and civil rights leaders.

I strongly urge that a new grand jury be convened with all the evidence this time presented before it. Justice must be done.

Many persons of prominence and stature have questioned the manner in which the Department has handled the Sinohui case thus far. It is imperative that a new look at this pressing issue be carried out in such a manner as to leave no room for anyone to question the Department's fairness and committment to the enforcement of civil rights. Faith in the legal system must be restored to the poor and disenfranchised of our society.

Thank you for your consideration of this most important civil rights case.

Sincerely,

Clarence Mitchell, Jr. Chairman

cc: President Jimmy Carter

Hon. Benjamin R. Civiletti

Hon. Drew C. Days, III Hon. Daniel Rinzel

Black Leadership Forum

Chairman

Conference

1201 Connecticut Ave., N.W. Washington, D.C. 20036 November 20, 1980

Benjamin L. Hooks
Executive Director
National Association for the
Advancement of Colored People
Vice Chairman
Dr. Joseph E. Lowery
President
The Southern Christian Leadership

Secretary-Treasurer
M. Carl Holman
President
The National Urban Coalition
Julius L. Chambers, Esq.

President Legal Defense and Education Fund

Hon. Cardiss Collins
Chairwoman
Congressional Black Caucus
Hon. Woody Ethery, Jr.

National Black Caucus of Local Elected Officials

Theodore R. Hagans President National Business League Hon. Richard G. Hatcher

Hon. Richard G. Hatcher Mayor, City of Gary Dorothy I. Height National President

National President National Council of Negro Women, Inc.

Rev. Jesse L. Jackson National President Operation PUSH, Inc. Vernon E. Jordan, Jr.

President
National Urban League
Coretta Scott King

Martin Luther King, Jr. Center for Social Change

Imam Warith D. Muhammad President American Muslim Mission

Bayard Rustin
Chairman of the National Board
A. Philip Randolph Institute

Rev. Leon Suilivan
Chairman and Founder
Opportunities Industrialization
Centers of America

Eddle N. Williams
President
Joint Center for Political Studies

Honorable Judge Charles B. Renfrew Deputy Attorney General U.S. Department Of Justice Washington, D.C. 20530

Dear Deputy Attorney General Renfrew:

We have recently been made aware of the grand jury's decision to return a no-bill on the question of Mr. Christopher Dean's indictment for the deprivation of Jose Sinohui's civil rights.

We ask that you join with us and other members of major civil rights organizations, religious denominations, and labor unions in seeking a just resolution of this matter.

To avoid further suffering on the part of the Sinohui family and to provide renewed hope for minority Americans that the federal government is willing to act decisively when the civil rights of minorities have allegedly been denied, we urge strong and aggressive leadership from you regarding this important matter.

Sincerely yours,

Black Leadership Forum

Benjamin L. Hooks, Chairman Executive Director National Association for the Advancement of Colored People cc: President James Earl Carter

Honorable Edward Kennedy, Chairman- Senate Judiciary Committee

Honorable Dennis DeConcini, U.S. Senator, Arizona

Honorable Benjamin Civiletti, U.S. Attorney General

Honorable Drew S. Days III, Chief-Civil Rights Division

7.8

Deputy Attorney General Charles B. Renfrew page 2

November 20, 1980

M. Carl Holman, Executive Secretary President National Urban Coalition

Dorothy I. Height President National Council of Negro Women

Vernon E. Jordan, Jr. President National Urban League

Coretta Scott King President Martin Luther King, Jr. Center for Social Change

Eddie N. Williams President Joint Center for Political Studies

LK:1k

NAACP LEGAL DEFENSE AND EDUCATIONAL FUND, INC. 10 Columbus Circle, New York, N.Y. 10019 • (212) 586-8397

October 31, 1980

Hon. Charles B. Renfrew
Deputy Assistant Attorney General
United States Department of Justice
Washington, D.C. 20530

Re: Investigation into the shooting death of Jose Sinohui, Jr.

Dear Judge Renfrew:

I write in support of the request of the Sinohui family, of Tucson, Arizona, that a new and complete investigation be undertaken in the above noted matter. We would urge you to reconvene a grand jury on an expedited basis and present all the evidence for its consideration.

We are concerned with the continuing problem of police violence against minorities. Experience has shown that federal prosecution under 18 U.S.C. §242 is in most places the only realistic deterrent for this reprehensible conduct. Accordingly, we are disturbed by the delay and lack of aggressiveness that appears to have characterized the Justice Department's investigation into the Sinohui killing. Particularly in light of the findings in the state wrongful death suit, we urge that this case is ripe for prompt, aggressive, and effective Justice Department action.

We are sure that you share our concerns on this matter. Police violence against minorities, particularly in the South and Southwest, has been a persistent problem of significant dimension. We urge that the Department move expeditiously on this matter.

Thank you for your attention to this matter.

Sincerely,

Jack Greenberg
Director-Counsel

JG/rh

cc: Hon. Benjamin R. Civiletti
Hon. Drew S. Days, III
Daniel Renzel, Esq.
Linda Davis, Esq.
Ambassador Stephen Torrez

bcc: Daniel Haro, Esq.

justice.....1 Hispanic Beat

By Roger Langley

WASHINGTON—The feeling is growing among Hispanic leaders that the Justice Department has rubber teeth when it comes to prosecuting cases involving the violation of Hispanic civil rights.

"A pattern has developed," says Daniel Haro, a young Chicano activists who has been trying unsuccessfully to prod the Justice Department into action on a number of cases.

and they tell us they are also concerned. Later we meet again to convince them they must investigate. They agree, but the investigation drags on and on. We meet again to complain, but they explain they are working full speed, but that the case is difficult. Finally they decide to take no action. They time their announcement for a day when they have some positive civil rights news to announce so they can stick the bad news at the bottom of the good story."

Haro, a graduate of Antioch Law School, worked with other student activists to mobilize support for the Hannigan case that involved the alleged torture of undocumented aliens by Arizona ranchers. The Justice Department could find no legal grounds to prosecute the Hannigans, so the Antioch students volunteered to do the legal research. Eventually they supplied so many legal arguments that the Justice Department felt compelled to reopen the case.

"We're going to have to do the same thing again with the Jose Sinohui case," Haro said .

The Sinchui case involves the killing of a 24-year-old Mexican American. He was shot in the back while driving his pickup truck away from the scene of a riot in South Tucson. The police officer who shot Sinchui, Christopher Dean, was acquitted.

Pressure was applied by the Hispanic community and in June, 1979, the Justice Department announced that it would convene a grand jury to determine if Sinohui's civil rights had been violated.

On Oct. 17, 1980, the Justice Department announced that the grand jury returned a "no bill" and that the Sinohui case was closed. They made the announcement on the same day that the government had won an appeal in the Hannigan case.

Haro and others have since met with Deputy Attorney General Charles Renfrew, but the best they could get from him was a promise to "consider" reconvening the grand jury. However the grand jury's term expires in December and the Justice Department attorneys handling the case have announced they plan to retire at the end of the year.

Haro is convinced that the Justice Department did not try hard to win an indictment. "There was a 15-month delay between the time the evidence was presented to the grand jury and the time they voted," he said. "No one can be expected to remember details of a case this long. To refresh their memory, the U.S. Attorney, Michael Hawkins, read them the transcript for four hours! This is intolerable.

Justice.....3

*Even more serious, the Justice Department did not present all of the evidence to the grand jury. The transcript from a civil trial involving the same people has testimony concerning the police officer's intention, which is the key to this case. We had to get the transcript for them and mark the places where the important testimoney appeared. Still this vital information was not even evaluated, despite Judge Renfrew's promise that all the evidence would be considered.

"Furthermore, there were no Hispanic members of the grand jury."

Lupe Sinohui, mother of the slain young man, went to Phoenix in November, 1978, to see Attorney General Benjamin Civiletti, who was then the deputy attorney general.

Mrs. Sinohui said, "When I met with Civiletti he told me that I didn't need his sympathy, that I needed justice.

"So far he hasn't given me either."

Copyrighted 1980, Washington Writers' Syndicate



Tucson Coalition For Justice

P.O. Box 5279 Tucson, Az. 85703

EXECUTIVE COMMITTEE

Max M. Torres
Co-Chair
Sabino Lozano
Co-Chair
Kelly Greason
Secretary
Linda Martinez
Treasurer

MEMBERSHIP

Arizona Farmworkers Union Barrios Undios Checker Board for Ex-Offenders Chicano Consortium for Public Issues Cochise County Coalition on the Hanigan Case El Rio Neighborhood Center IMAGE de Tucson La Raza Legal Alliance L.U.L.A.C. M.E.Ch.A. U of A Migrant Opportunity Program (Statewide) National Coalition on the Hanigan Case Proyecto de Colores San Ignacio Yaqui Council Teatro de Pueblo Traditional Indian Alliance Tucson Lowrider Coalition Los Zapatistas Orale Grupo Juvenile

LEGAL COUNSEL

William Risner, Esq. Hector Campoy, Esq. Fernando Fajardo, Esq. Mr. Steve Neely, Esq. Pima County Attorney 111 W. Congress - Ninth Floor Tucson, AZ 85701

Dear Mr. County Attorney,

We have taken notice that criminal trial of Walter M. ''Bo'' Burris has been scheduled for March 25, 1981. The Chicano and civil rights communities are at a loss as to why over five months will be allowed to lapse between the occurrance of the crime charged and the time the case is actually adjudicated. However, we are encouraged by the fact that the prosecution will go forward in the matter of the senseless human rights abuses suffered by Manuel Hernandez-Garcia when he was chained by the neck for over 24 hours without food or water.

We sincerely hope that the state's legal apparatus does not breakdown in this instance as it did in the state criminal trials of Christopher Dean and Patrick and Thomas Hanigan. The state's performance in the latter cases constituted a mockery of justice and gross insult to our people, who have historically turned to the legal system for the vindication of civil rights.

The County Attorney's Office has a solemn duty to protect our community from blind acts of Klan-like violence. Accordingly, we urge that you and your deputies pursue this matter aggressively and to the full extent of the law. The last thing we want to see is a reenactment of the Dean-Hanigan travesties, because this will only force us into a new national campaign for Justice Department dual prosecution. Nonetheless, our Coalition together with civil rights organizations across the country stand ready to seek redress at the federal level should there be no reasonable alternative.

We would also like to impress upon you the need for a jury which truely reflects the minority population of Pima County. By this, we do not intimate that enlisting one or two token ethnic group members to serve on the panel will comport with the proper dictates of the Constitution. The jury's composition should reflect the

Mr. Steve Neely, Esq.

Page 2

percentage of all minorites in the county, because the Sixth Amendment commands a jury of the defendant's peers. Mr. Burris' peers are not only middle class, middle aged Anglo Amercians. His peers include Chicanos, Blacks, and Native and Asian Americans.

Regardless of whether it may strike a cord of indigation within you, we hope you understand that our community strongly believes the Hanigan Case was bungled at the state level by incompetent investigators and less than dedicated prosecutors. What's worse, with respect to the state prosecution of the Jose Sinohui killing, the community is convinced that the Pima County Attorney's Office virtually begged the grand jury to return a manslaughter indictment against Christopher Dean instead of the more appropriate charge of first degree murder. Given these perceptions, there exists considerable apprehension that justice will not be achieved in the trial of "Bo" Burris.

It is our hope that you can allay our justified fears. Unless the upcoming Burris trial is vigorously prosecuted, the state's legal system will in effect telegram an offical message to racists and vigilants that the law condones the continued brutalization of the poor and undocumented.

Sincerely,

Tucson Coalition for Justice

National Coalition on Hanigan

President Sanchez. Arizona Farmworkers Union

Edna Fimbres, Director Barrios Unidos

Otilia Bustamante, Chairperson Cochise County Committee for Justice

Salomon Baldenegro, Chicano Consortium for

Public Issues

Page 3

Antonio Pazos, Asst. Director El Rio Neighborhood Center

Daniel Haro, Arizona Chapter La Raza Legal Alliance Ernesto G. Escobedo, Secretary
IMAGE de Tucson

Lillian Lopez-Grant, President Arizona Chapter, L.U.L.A.C.

Jerry Baker, Member Checker Board for Ex-Offenders

Gilberto Estudillo, President University of Arizona, M.E.Ch.A. Max M. Torres, Director Proyecto de Colores

Migrant Opportunity Program

José Aponte, Director Teatro del Pueblo

Ernesto V. Quiroga Secretary San Ignacio Yaqui Council

Francisco Chavez, Representative Traditional Indian Alliance

Ruben "Rocky" Taylor, Trainer Los Zapatistas

Joe F. Borboa, Chairman Tucson Lowrider Coalition

cc: Randy Stevens, Esq. Criminal Divison Chief

> Geoffrey Cheadle, Esq. Deputy County Attorney

> Sydney Davis, Esq. Deputy County Attorney

Cecilia Cruz, Coordinator Orale Grupo Juvenile OFFICE OF

WILLIAM H KENNEDY
ABBT DISTRICT ATTORNEY
RICHARD D HUFFMAN
CHIEF DEPUTY DISTRICT ATTORNEY
WAYNE A BURGESS
CHIEF INVESTIGATOR

THE DISTRICT ATTORNEY COUNTY OF SAN DIEGO

EDWIN L. MILLER, JR. DISTRICT ATTORNEY

May 17, 1479

COUNTY COURTHOUSE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 (714) 236-2329

William B. Kolender Chief of Police San Diego Police Department 801 West Market Street San Diego, California 92101

Re: Shooting of Efren Reyes by Border Patrol Agent Daniel Cole, SDPD Case No. 79-23081

Dear Chief Kolender:

I have reviewed the reports prepared and submitted by your department with respect to this shooting. In addition, I have considered the results of interviews with the two surviving aliens apprehended by Agent Cole. Those men, Benito Rincon Hernandez and Rogelio Mendez Diaz, were interviewed by members of my staff.

Facts Disclosed by the Investigation

The reports and interviews reflect that on the night of March 17, 1979, Agent Cole apprehended three persons whom he believed to be guilty of the misdemeanor offense of illegal entry into the United States. Those persons were the decedent, of Mexico; and Rogelio Mendez Diaz, a citizen of Guatemala.

This apprehension took place a short distance from the International Border, along an embankment of the Rio Tijuana Canal, on American territory. Upon encountering the three aliens, agent Cole, who was on patrol duty alone, arrested them and attempted to take them into custody. Reyes and Rincon Hernandez to right hand. Mendez Diaz was not handcuffed. The three were of Cole, Mendez Diaz and Rincon Hernandez differ as to just how the vehicle, but the discrepancies are not critical.

At the patrol vehicle, Mendez Diaz was told to enter the back, and he did. At that juncture, a scuffle ensued between the two handcuffed men and Agent Cole. By the account of Mendez Diaz, Reyes was the more vocal of the two protesting aliens, stating that he would not enter the patrol vehicle as—ordered because he had done nothing wrong.

It is to be noted that the post mortem blood alcohol level of Reyes was .16%. This is consistent with the account of that evening given by Mendez Diaz, who related that Reyes had been drinking moderately earlier in the evening, and that the three men, Reyes most particularly, had been drinking as they sat on the American side of the border.

Mendez Diaz observed the encounter between Reyes and Rincon Hernandez on the one hand and Cole on the other from the back of the patrol vehicle. He describes this struggle as being of greater intensity and duration than do either Agent Cole or Rincon Hernandez. Further, it is his recollection that at the inception of the struggle the agent did not have the two persons still outside the vehicle restrained by a grasp upon the handcuff chain. He states that when the struggle began, Agent Cole removed his radio from his belt and spoke into it in English. This is at variance with what Cole reported, but it is more consistent with the amount of time that must have elapsed for all of the events to transpire of which we have knowledge. It may be that Agent Cole attempted radio contact with his headquarters but that the transmission was not received. I have been advised that there is but one communications channel available for those officers who were working in the area of this incident on the night in question. Further, I have been advised that persons monitoring the Border Patrol band on that night heard a transmission from Agent Cole that was not acknowledged.

As Mendez Diaz observed the struggle, he saw his opportunity to flee and he did so. As he got out of the back of the patrol vehicle, he saw Cole grasp the chain between the handcuffs, even as the agent was using the radio.

The two handcuffed men continued to push and pull in such a way as to result in the three men going over the edge and down the side of the levee in a circular motion. Neither of the handcuffed men made any move to strike or kick the agent, nor did either of them make any move to suggest that they were reaching for a concealed weapon. The agent had not, however, determined that neither of them were in possession of some weapon.

The struggle continued down the bank of the levee in the direction of the International Border. As is common, there were accumulations of persons all along the border fence that night.

William B. Kolender May 17, 1979 Page 3

Indeed, there was one such accumulation of persons within approximately thirty yards of where this struggle began.

In an attempt to subdue his prisoners, the agent took out his riot baton, but it came loose from his grip. He then with-drew his pistol and fired three times at the prisoners. One round resulted in the wounding of Rincon Hernandez. The other killed Reyes.

During his attempt to control the handcuffed men, Agent Cole became aware that the man who had been placed in the back of the patrol vehicle had gotten out, but he did not know where the man had gone or what he was doing. That man, who we now know as Mendez Diaz, reports that he ran directly to a large group of persons congregated at the border fence and joined the crowd by crawling under the fence and re-entering Mexico.

The two surviving aliens report that at the time of the shooting Reyes and Rincon Hernandez had their backs to Agent Cole. That contention is rejected on the basis of indisputable physical evidence that the shots entered both men from the front.

Criminal Liability

I will first address the question of whether the shooting was justifiable within the meaning of Penal Code section 196. Under the decisional law of this state, a state officer who has made an arrest for a misdemeanor offense would not be privileged to use deadly force in overcoming an attempt to escape by the suspected misdemeanant.

The facts of the case have been reviewed at length by the United States Attorney for this district. He advises me that it is his view that the activity in which Reyes and Rincon Hernandez were engaged at the time they were shot constitutes a chargeable felony under federal law. Further, he advised that his decision not to charge Rincon Hernandez was based on the fact that the man had already suffered substantially as a result of the confrontation with the officer. At the time of our initial discussions with the United States Attorney, a decision as to bringing federal felony charges had not yet been made.

My research fails to reveal any reported federal cases in which conduct of the type attributable to Reyes and Rincon Hernandez was found as justification for the use of deadly force. I must, however, be mindful of the manner in which federal law is understood in this district by the ranking federal legal authority in this district.

William B. Kolender May 17, 1979 Page 4

Certainly, this legal understanding on the part of federal authorities complicates an already difficult situation.

Viewed from the perspective of whether or not this shooting was justifiable as having been in defense of self, the picture is no less clouded. Had this tragic event taken place in the usual metropolitan setting to which most case law addresses itself, I would be persuaded that it would be without such justification. The situation presented here is unique.

I am informed that agents assigned to patrol duty in the vicinity of this event are subjected nightly to missiles of all kinds being thrown at them and their vehicles, to verbal abuse and continual threats. This activity is of such an intensity as to virtually constitute an ongoing riot from dark until sometime after midnight. The patrol vehicle to which the three aliens of its glass is protected by a heavy steel mesh from rocks and other objects thrown at it nightly by persons in the vicinity of stoned and had worn a plastic riot helmet with face mask that is provided officers working in this area to protect them from this kind of assault.

Agent Cole has stated that he was afraid during the struggle with Reyes and Rincon Hernandez. Under California law, one need not be in actual danger to justify a claim of self-defense. If a person is confronted by the appearance of danger, which arouses in his mind as a reasonable person the honest fear that he is about to suffer death or great bodily harm, that person may use deadly force in his own defense. Agent Cole, having been engaged in arresting three far younger men by himself and then having been thrust into a sudden confrontation with two of them, has stated that he was afraid he would be killed. The central question is whether that apprehension was reasonable on his part.

From the time sequence as reflected by the tape of the radio calls from Agent Cole, coupled with the manner in which he and Rincon Hernandez described the physical confrontation, I concluded initially that such apprehension by Agent Cole was not reasonable.

Given the added observations of Mendez Diaz with respect to the length of time consumed by and the intensity of the physical confrontation, however, I am less inclined to that conclusion. In this regard, the veracity of Mendez Diaz is important.

I recognize that some of the events related by Mendez Diaz could not have happened just as he describes them. These are the position of the two other aliens at the time of the shooting, and the distance the agent stood from the aliens as he shot.

William B. Kolender May 17, 1979 Page 5

These two items are clearly otherwise, as proven by the physical evidence and laboratory tests performed with Agent Cole's revolver. These faulty observations, however, were made by Mendez Diaz as he stood in a well lighted area and peered into a relatively unlighted area. They were made by a short person from within a crowd of persons in which he was hiding.

Other aspects of Mendez Diaz' statement persuade me that he is relating the truth as best he knows it. The crucial observations that he made were within a few feet of the incident unfolding before him and are more consistent with reason and with other known facts.

Decision as to Issuance

To issue a criminal complaint against Agent Cole for a public offense arising out of this incident, I must conclude that his act was not justifiable under color of authority and that he acted unreasonably under all of the circumstances known under the most peculiar circumstances of this incident and the combat zone atmosphere of the border canal area, has a strong argument of self-defense. This is in and of itself not determinative, but it is a factor that must be carefully weighed.

Under these unique circumstances there also seems to be an almost diametric opposition of state and federal law. To reemphasize, while the aliens apprehended by Agent Cole would be regarded as misdemeanants under state law, thereby precluding the officer's use of deadly force, it is the interpretation of the United States Attorney that federal law considers such conduct of such force. With the reasonable prospect that this case, if brought to trial, would be removed to federal court and tried under federal rules, it becomes more clear that the prospect of charging Agent Cole.

It is therefore my determination, arrived at only after long and painful reflection, that a criminal complaint will not issue in this case.

I do not personally condone the conduct, but I am bound to make my decisions in conformity with the law as I understand it to be. This letter should not be interpreted by anyone who now particular situation.

Very truly yours,

EDWIN L. MILLER, JR. District Attorney

ELM:sf

REPORT ON INVESTIGATION OF ACCIDENT INVOLVING UNDOCUMENTED ALIENS --

On Thursday, February 28, 1980, our office received a call from the Mexican Consul in Laredo, Texas, Humberto Zamora, stating that several passengers of the pickup truck that had been involved in an accident in Jim Hogg County on Wednesday night had alleged that the officers pursuing them had fired shots at their vehicle, and requesting that our office investigate this incident. This request was later reduced to writing in a letter dated February 29, 1980 (attached hereto)

Since the local Sheriff's Department was involved, we immediately requested assistance from the Texas Rangers to assist us in this investigation. Ranger Stan Guffey came to Hebbronville that same afternoon, and we examined the pickup truck, the right rear tire which had been removed by the Sheriff, and the scene of the accident. We also questioned the four officers involved, Jim Hogg County Sheriff's Deputies Jose Beltran and Onofre Serna, and U.S. Border Patrol Agents David Wherton and Robert Handy. All four officers denied firing any shots or seeing any shots fired. We received written reports from Beltran, Wharton and Handy and made copies of the information contained in the sheriff's file.

On Friday, February 29, 1980, Ranger Guffey asked us to prepare a written request for assistance directed to his Superior, and he conveyed this request personally to San Antonio (attached hereto).

We also contacted Agent John Smith of the F.B.I., in Laredo and he advised us at this time that the office of Professional Responsibility of the U.S. Immigration and Naturalization Service was conducting an internal investigation, and that up to that point in time, the F.B.I. was not conducting an investigation.

Early Friday morning District Attorney Investigator Beto Guerra and Assistant District Attorney Rodolfo Gutierrez went to the site of the accident and combed the area from the accident south toward Hebbronville, approximately & mile searching for spent shotgun cartrior of other evidence.

We were unable to find anything relevant to this case, but we did see a Texas Highway Department truck, which stopped and Santiago De Los Santos and Joel Ibanez asked us what we were looking for. We advised them, and later that afternoon, Mr. De Los Santos called us and advised us that he had found a spent shotgun cartridge on the shoulder of Highway 16 North. De Los Santos took Gutierrez to the location of the spent cartridge and it was recovered by this office and its location was marked, approximately .5 miles north of the Hebbronville city limits and 1.15 mile south of the accident site.

Investigator Guerra took a statement from Sammy Torres, Jr., an ambulance driver on the night of the accident, and Torres advised us that he had heard through another person that several witnesses had heard the shots, and gave us Jose Serna's name as one of the witnesses. A statement was taken from Jose Antonio Serna, who stated he heard the shots, and gave us the names of four other witnesses who were with him at the time. Statements were taken from Adan Serna, Jr., and Hector Dominguez, both of whom also stated they heard shots. In addition, Adan Serna took us to the location where they pulled off the road. From this location, we walked north approximately 20-30 yards and located a second spent cartridge on the east shoulder of Highway 16 North, approximately .9 mile north of the Hebbronville City limits, .35 mile north of the location of the first cartridge and .8 mile south of the accident site. The second cartridge was recovered and its location marked.

Pictures were also taken of the vehicle, the accident site and the location of the spent cartridges, all of which pictures have been marked.

On Saturday, February 29, 1980, we talked to two of the undocumented aliens who were passengers in the vehicle. Abelardo Vasque. Martinez and Jaime Baiz. Quintero, both men were in the Webb County Jai

Quintero, who claims he was lying in the bed of the truck stated that there were 7 or 8 people in the bed of the truck and that they all stayed down during the entire chase.

Martinez, who claims he was a passenger in the front seat with the driver, states that both he and the lady, who was in the back seat of the cab with her children, pleaded with the driver to stop.

Both Quintero and Martinez claim they heard 6 or 7 "explosions", which they believed to be shots.

On Saturday, we found out that the F.B.I. was conducting an investigation and had taken statements from the undocumented aliens that we talked to and from Deputies Beltran and Serna.

Also late Saturday afternoon, after returning from Laredo, Sheriff Ramirez advised me that Deputy Serna had submitted his report and had stated he saw Agent Handy stick his head and shoulders out of the window with a shotgun in his hands, and although he did not see or hear any shots, he did see Agent Handy reload the shotgun more than once.

Assistant District Attorney

Jim Hogg County, Texas

District Attorney Chief Investigato Jim Hogg County, Texas

NOMBRE: SARA DE LA CRUZ DE SALAZAR

LDAD: 36 años
ORIGEN: San Luis Potosí, S.L.F.
DOMICILIO: Carlos Díaz Gutiérrez No. 1516

Col. Independencia
San Luis Potosí, S.L.P.

SUS HIJOS: Robelio Salazar de la Cruz

4 años

Iupita Salazar de la Cruz

5 años

NCMBRE: ONESIMO HERNANDEZ ZUNIGA

LDAD: 35 años ORIGEN: Dr. Arroyo, Nuevo León DCMICILIO: Nuevo Laredo, Tamaulipas.

NOT BEE: FILEMON PENA GUTIERREZ

EDAD: 16 años

On I GEN: OhlGen: Morelia, Michoacán DOMICILLO: Santiago No. 58

San Juan, Morelia, Mich.

NOMBRE: FLAVIO HERNANDEZ ZUNIGA

EUnD: 30 años

Origen: Matchuala, S.L.P.
DCMICILIO: Priv. Moctezuma No. 4511

Col. San Rafael

Nuevo Laredo, Tamaulipas

NOMBak: Rubén Campa Castrellón

iDAD: 21 años

ORIGEA: Gómez Palacio, Dgo. DOMICILLO: Santiago Levín No. 609 Pte.

Col. Francisco Zarco Gómez Palacio, Dgo.

MARCELINO DE LA SANCHA SANCHEZ NOMBER:

EDAD: 19 años

OMIGEN: Palmar Chico, Mpio. de Amatepec, Edo. de México DOMICILIO: Palmar Chico, Mpio. de Amatepec, Edo. de México OKLGEN:

MULRTOS:

NON BACK ANSELMO RODRIGUEZ URIBE

EDAD: 59 años ORIGEA: La Presa, Moio. de Moctezuma, S.L.P. DCMICILIO: Conocido. La Presa, Moctezuma, S.L.P.

NCMBIA: Estela Salazar de la Cruz

L.D. D: 6 años

Hija de la Sra. Sara de la Cruz de Salazar

DELENIDOS:

JAIME BAEZA QUINTERO NOMBRE:

EDAD: 30 años

ORIGEN: Dolores Hidalgo, Gto. DCMICILIO: Av. Hidalgo No. 2

Dolores Hidalgo, Gto.

NOMBRE: ABELARDO VAZQUEZ MARTINEZ

EDAD: 21 años

ORIGEN: Nuevo Laredo, Tamaulipas DOMICILIOS Perú 5060 Col. Matamoros

Nuevo Laredo, Tamaulipas

NOMBRE: AURELIO MARTINEZ MARTINEZ

LDAD: 16 años

ORIGEN: La Presa, Moctezuma, SLP

DOMICILIO: Conocido

La Presa, Moctezuma, S. L.P.

HOSPITAL DE LA MERCED

NOMBRE: EFRAIN PEREZ ARCE

EDAD: 24 años

Tierra Colorada, Amatepec, Edo. de México ORIGEN:

DeMICILIO: Conocido

Amatepec, Edo. de México.

IMMICENTION AND NATURALIZATION SERVICE

Memorandum

to : Inief Fatrol Agent

Laredo, Texas

FROM : Lavid A. Wharten,

LPA Hebbronville, Texas.

subject: Accident involving undocumented alien driver.

While observing traffic at the intersection of Mwy. 16 and Mwy 285 at ap roximately 11:00R; on 2/27/80 in Hebbronville, Texas we were parked at the Millerst grocery talking to deputies Betron and Deputy Serna of the Mim Hog; Co. Sheriff's Office when they observed a Ford P/U truck run the stop sign at the intersection of hwy. 16 and Mwy 285. They advised us that they were going to stop the vehicle for the above violation and we advised them that we would wait there for them to return. A very short time later we recieved a call from Deputy Letran that he was in pursuit of the vehicle and needed our assistance.

We then proceeded in their general direction towards the south east of town and they advised us that he was eluding them in the residential district, and it this time we noticed their rad lights and attempted to help then step the vehicle. We pursuied the vehicle behind the deputies unit through several city blocks before they came cut on hwy. 265 heading north on hwy. 16. At this time the vehicle was traveling around 90-100 LPH, jumped the railroad tracks and almost losing control of the vehicle, ran the red light at the intersection of Smith St. and Galbraith St, running several vehicles off of the road. Vehicle then proceeded through town at very high speeds again running the red light at the intersection of Vicgle and Smith St. traveling north on hwy. 16.

Just north of town we observed that the Sheriff's unit was falling behind so I passed the deputies and caught up with the fleeing truck. As I attempted to pass the vehicle he tried to run me off of the road several times. The driver would pull across into the south bound traffic lame of Hwy. 16 trying to hit rw marked Border Patrol unit. As he did this several times he ran off the left hand side of the road, throuing rocks on the road and our unit, lost centrol of the vehicle started to skid and everturned several times coming to rest on the proxy hand side of the road. At this time we stoped and noticed several bodies laying on the ground so we rendered first aid and called for an ambulance. At this time all occupants were transported to Dr. Cutirrez's office and then to Laredo, Texas. There was approxametely 13 people in the vehicle of which two were dead at the scene. We thought we had the driver identified but the aliens later stated that the driver ran off in the brush with several other aliens. The antulance driver also stated he saw several people running in the brush when he arrived at the scene.

多级

Buy U.S. Savings Bonds Regular

Davida-Whereter gl.

DATE: 2/28/80

Buy U.S. Savings Bonds Regularly on the Payroll Savings Plan

STATE OF TEXAS COUNTY OF WEBB

- I, Efrain Perez Arce, being duly sworn state the following:
- My name is Efrain Perez Arce. I am not sure when I was born, but I believe I am about 25 years of age. My baptismal certificate stated I was born in June, 1957, but it is not correct. I was born in Tierra Colorada, Amatepec, Estado de Mexico, Mexico. The closest town to Tierra Colorada is Palmar Chico. My parent's names are Cosme Perez and Alejandra Arce. I am one of seven children. We live in Tierra Colorada, except two sisters who live in Acapulco and one brother, Andres Perez, who for the past four years has lived in Chicago, Illinois.
- I married Juana Benitez in 1971. She was born in about 2. 1957. We have four children; Federico, born March 3, 1974; Refugio, born Nov. 8, 1975; Esperanza, born in 1976; and Maribel, born January 1978. We live in Tierra Colorada.
- 3. On or about February 21, 1980, I left Tierra Colorada with my cousin, Marcelino de la Sanchez. We were going to Chicago to work. We got to Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico where we stayed in a hotel. I do not know the people who were to help us cross to the U.S. because my cousin Marcelino made the arrangements. On or about February 24, at night we were taken across the river. remember we crossed with Sara Salazar and her three children
- 4. We were taken to a house. We stayed at the house for 2-3 days. There were alot of people staying with us, but I do not know how many, more then 14. Different people would come to give us food and water twice a day.

- 5. On the night of the accident, some men came with about 3 trucks and told us all to get in the trucks. One man got in before us, then Marcelino got in, then I got in, then the others followed. We were all told to lie down, and not to move, or we would be left to walk by ourselves. We began traveling, but I did not look up or talk. We stopped a few times and I heard voices. No one else got in the truck that I know of.
- 6. Then, I heard a siren. We were traveling very fast. I heard what sounded like gunshots. I heard three, and then I was so scared that I do not remember if I heard any more. I remember that Marcelino said that the shot might hit the truck and the tires and we would crash. The truck began to wave from side to side. That is all I remember. I do not remember the crash or anything afterwards until I awoke in the hospital.

Executed this the 35 day of March, 1980.

Efrain Perez Arce

Subscribed and sworn to before me this the 25 day of March, 1980.

2 nances Castillo

Notary Public in and for Webb County, Texas STATE OF TEXAS I

AFFIDAVIT

- I, JAIME BAEZA QUINTERO, being first duly sworn, state the following:
- 1. My name is Jaime Baeza Quintero. I was born June 12, 1950 in Hacienda de la Venta , Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Mexico. For the past six (6) years, I have lived in Rancho San Cristobal, Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Mexico. I am married to Saleta Baeza de Baeza and we have three children: Juana, age 9; Blanca Elia, age 7; and Jaime, age 2. I usually work for Victor Manuel Carranza Vasquez who lives at Avenida Hidalgo #2, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Mexico.
- 2. Before February, 1980, I had never been to the United States. I needed work and my son needs medical help because he can not walk so I came to the United States to look for work. I do not remember the exact day I came to Laredo. I crossed the river and was taken to a house. There were many more people at the house.
- 3. On the night of the accident, we were all told to get in some pick-up trucks that came to the house at about 9:00 p.m. I was the last to get in the bed of the truck. I was up against the tail gate. We were all lying down. We rode about an hour and one-half. Then all of a sudden the truck began to go faster. I saw some flashing red lights. The truck went faster. We kept going, then I heard about six or seven explosions, like from a gun. Right after I heard the explosions, the truck turned over.
- 4. I was thrown out of the truck. Right away I got up. A lot of cars stopped and I remember a lot of people. I do not remember if anyone had a police uniform on or if anyone had a gun. No one pointed a gun at me. I was taken by ambulance to Laredo to the hospital. I was there about three (3) hours and then I was taken to the immigration office where an immigration officer asked me questions about the accident and about me and my family and how I got to the United States. Later, I was taken to jail,

and the next day I was taken to court where the judge gave me 60 days in jail.

Executed this the 8th day of april, 1980.

Jain Balza Chientero

JAIME BAEZA QUINTERO

SWORN TO AND SUBSCRIBED BEFORE ME, by the said JAIME BAEZA QUINTERO on this the 8th day of april, 1980.

FRANCES CASTILLO
NOTARY PUBLIC
WEBB COUNTY, STATE OF TEXAS

MY COMMISSION EXPIRES: 3-15-81

STATE OF TEXAS X
COUNTY OF WEBB X

AFFIDAVIT

- I, ABELARDO VASQUEZ MARTINEZ, being first duly sworn, state the following:
- 1. My name is ABELARDO VASQUEZ MARTINEZ. I was born February 15, 1960 in Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico. I live at Peru #5060, Nuevo Laredo, Mexico with my parents and brothers and sisters. I am not married.
- 2. A few days before the accident in Hebbronville, Texas, I was crossed by a coyote from Mexico to the United States.

 I and other persons were crossed near Carrizo Springs and then taken by truck to Laredo where we stayed two days in a house.
- 3. On the night of the accident, some trucks arrived at the house and we were told to get in. I was told to get in the front seat next to the driver. I did not know the driver and could not see him clearly. He was light complexioned, tall, and medium built. In the back seat of the truck were a woman and three children.
- 4. We left Laredo and drove about an hour. As we were approaching Hebbronville, we stopped at a light at a corner. There were two police cars parked near the corner. After we started again, one of the police cars began to follow us. We drove around the block and came back to the light. Then, when we got into the highway, we were going very fast
- 5. Two cars were chasing us, and I heard about eight shots, like from a gun. A few moments later the truck turned over three times and rested against a mesquite tree. I could not breathe for a few moments and an officer helped me get out of the truck. There were two patrol cars with their lights shining on the truck. Many of the people from the truck were lying on the ground and, when they tried to get up, the officers told them to stay down until the ambulance came.
- 6. I was taken to a hospital in Laredo where I was checked by a nurse and given a tetanus shot. Then I was taken to the invigration office where I was questioned about how I got to

the United States and about the accident. The next day they took me to a judge who sentenced me to 60 days.

Executed this the 10th day of Coul. 1980.

AVELARDO VASQUEZ-MARTINEZ

SWORN TO AND SUBSCRIBED BEFORE ME, by the said .

ABELARDO VASQUEZ-MARTINEZ on this the 10 th day of april.

Frances Castillo

FRANCES CASTILLO
NOTARY PUBLIC
WEBB COUNTY, STATE OF TEXAS

MY COMMISSION EXPIRES: 3-15-81

C. ABUSE OF CHILDREN.

- Affidavits and/or Declarations
 - Formal Complaints
 - Official Documents
 - Transcripts
 - Fact Sheets
 - News Articles

MEXICAN AMERICAN

COORDINATING



COUNCIL

2653 Sichel St., LOS ANGELES , CALIFORNIA 90031

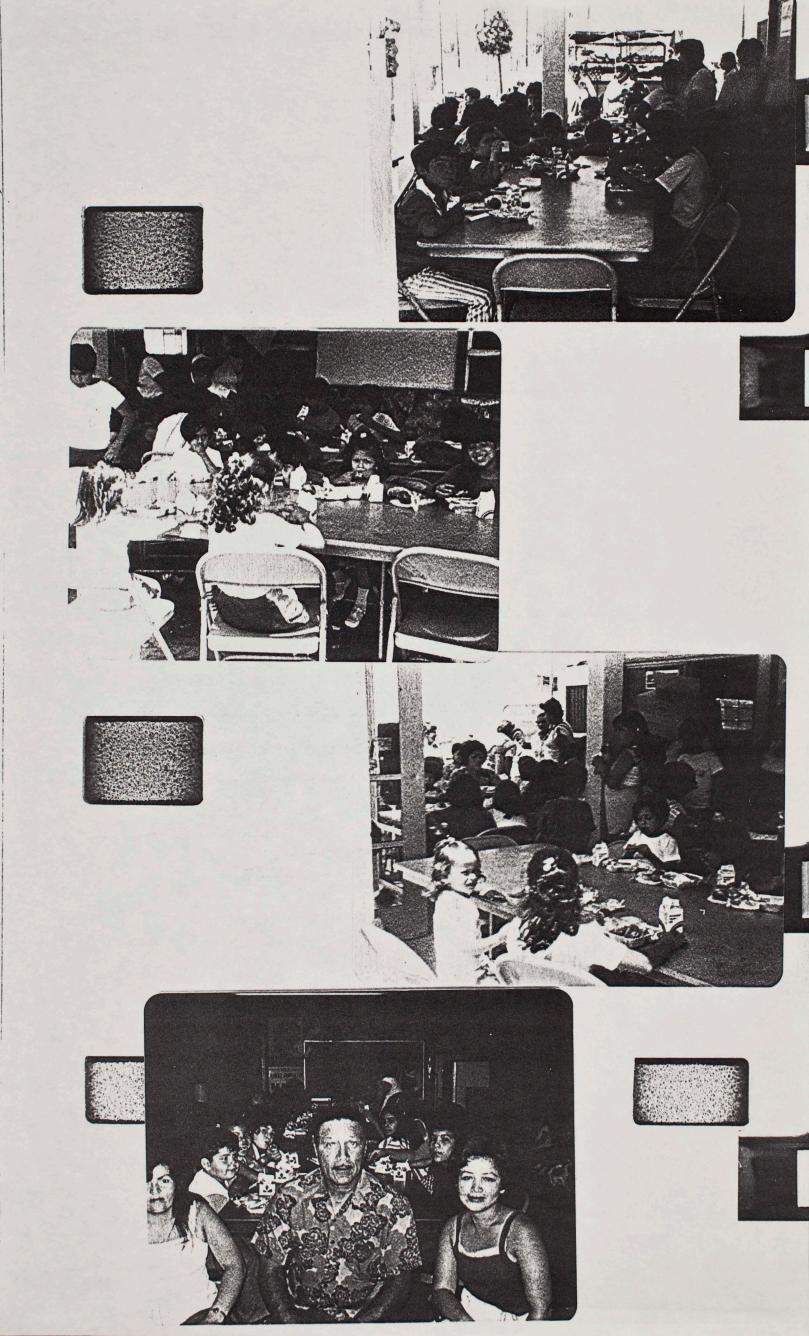
TESTIMONIO HECHO EL DIA 11 DE ABRIL DE 1981 EN LA CIUDAD DE SAN DIEGO, CALIF., ANTE EL TRIBUNAL DEL PUEBLO POR EL SR. IGNACIO ESQUIVEL.

YO IGNACIO ESQUIVEL MEXICANO DE 61 AÑOS RECIDENTE LEGAL DE ESTE PAIS, TESTIFICO QUE:

EN LOS AÑOS DE 1971 à 1979 SE LLEBARON ACABO GRANDES REDADAS
DE INDOCUMENTADOS, POR LO QUE TANTO C.A.S.A.-M.A.P.A. Y ALGUNOS MIEMBROS DE LA LOCAL 300 DE LA CONSTRUCCION, NOS DEDICAMOS A PRESTAR AYUDAA ESTAS POBRES GENTES, POR LO QUE EN EL LAPSO DE ESTE TIEMPO RECOJIMOS 280 NIÑOS QUE SE QUEDARON SIN PADRES POR HABERSELOS DEPORTADO
LA IMIGRACION. AL PRINCIPIO ACUDIMOS AL CONSULADO GENERAL DE MEXICO Y JAMAS HICIERON CASO MENOS PRESTAR AYUDA. HACE POCOS MESES BOLVIMOS AL MISMO CONSULADO DE MEXICO EN LOS ANGELES PIDIENDO AYUDA PARA LOS INDOCUMENTADOS Y NOS CONTESTO EL CONSUL GENERAL:LOS INDOCUMETADOS SON UNOS CRIMINALES QUE DEVERIAN DE ESTAR EN LA CARCEL. YO TUVE EN MI CASA 20 NIÑOS MIENTRAS SUS PADRES BOLVIAN O LOS RECOJIAN EN
TIJUANA, PORESO ES QUE AHORA NO QUEREMOS MOLESTAR AL SR.JAVIER ESCOVEDO Y CORDOVA CONSUL GENERAL, POR ANTI-MEXICANO.

LOOY FE.

INACIO ESQUIVEL E



DECLARATION OF

CHRISTOPHER ROBLES ENCISO

- I, Christopher Robles Enciso wish to state and affirm as follows:
- I am a citizen of the United States by birth. was born on the 27th day of April 1964 at Los Angeles, California.
- 2. On September 7, 1979 on or about 8:30 P.M. on my way to Downey, California abroad a Greyhound Bus, we were stopped by the U.S. Border Patrol at the San Clemente check point and Border Patrol officers boarded the bus I was traveling in and ask me what my citizenship was, I responded to him as follows:

I am an American Citizen, he then requested further Identification and I produced my birth certificate, Social Security Card and school Identifications. I was then order to get off the bus and was taken to an office there at the check point. I was continued to be interrogated by this Border official and ask me in many occasions where I was born and I repeated Los Angeles. California. He told me to tell the truth and pushed me against the wall, verbally abused his authority and threaten to beat me if I did not confess that I was not an American Citizen.

3. He continued to question me regarding place of birth of my father and mother and continued to press me to say that the birth certificate that I had was fraudulent. I was incarcerated and ilegally detained for 19 hours. I was again threaten and was told that if I did not sign a document saying that I was not an American Citizen I was going to be put in jail and was going to be beaten up by Border Patrol officials. After this treatment and abuse I decided to sign a document without any explanation as to what I was signing. I was tired scared and for 19 hours I got no food or water from these Border Patrol officers. I was taken the following day to the Chula Vista Sector and then at approximately 3:00 P.M. I was taken to the Mexican Border at the South bound entrance to Tijuana, B. C. Mexico.

I herewith affirm and declare that the foregoing is a true and correct statement of fact.

CHRISTOPHER ROBLES ENCISO 3604- 3-102 Beyer Blvd., San Ysidro, CA 92073 Date

Margarita Robles (Mother) de Huerta.

In San Ysidro, California.

United States District Court

LODGED RECEIVED

FOR THE

SOUTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA

DEC 9 1980 CLERK, U.S. DISTRICT COURT

SOUTHERN, DIETRICT OF CALIFORNIA

United States of America

v.

No. 80-0508-N-Criminal

J. GILLESPIE WOOD (1)

On this 8th day of December, 1980 came the attorney for the government and the defendant appeared in person and by counsel, Howard Frank,

IT IS ADJUDGED that the defendant upon his plea of guilty

has been convicted of the offense of deprivation of rights under color of law, in violation of 18 USC 292, as charged in count 8 of the superseding Indictment in eleven counts,

and the court having asked the defendant whether he has anything to say why judgment should not be pronounced, and no sufficient cause to the contrary being shown or appearing to the Court,

On count 8

IT IS ADJUDGED that/the defendant is guilty as charged and convicted.

It is Adjudged that on count 8 the defendant shall pay a fine unto the United States in the sum of \$1000.00 and imposition of sentence as to imprisonment only is suspended and the defendant is placed on probation for a period of three (3) years on condition that he obey all laws, Federal, State, and Municipal, that he comply with all lawful rules and regulations of the Probation Department, and that the fine be paid in such installments as the Probation Department may determine.

IT IS ORDERED that the remaining counts of the superseding Indictment and the underlying Indictment filed in this case are hereby dismissed.

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA HONORABLE LELAND C. NIELSEN, JUDGE PRESIDING UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff, Criminal No. 80-0508-N J. GILLESPIE WOOD, Defendant. REPORTER'S TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS San Diego, California Monday, October 20, 1980

1	APPEARANCES:	
3	For the Plaintiff:	M. JAMES LORENZ United States Attorney BY: DAVID C. DOYLE
5		Assistant United States Attorney United States Courthouse 940 Front Street San Diego, Ca. 92189
6	For the Defendant:	FRANK & MILCHEN
7	TOT the berendant.	BY: HOWARD B. FRANK, ESQ. 1755 Central Federal Tower
8		225 Broadway San Diego, California 92101
9		
0		
1		
.2		
3		
4		
5		
6		
7		
.8		
9		
0		

SAN DIEGO, CALIFORNIA, MONDAY, OCTOBER 20, 1980, AT 11:30 A.M.

THE CLERK: No. 12 on calendar, Case No. 80-0508-N, United States of America v. J. Gillespie Wood; arraignment and plea on superseding Indictment.

MR. FRANK: Howard Frank appearing on behalf of Mr. J. Gillespie Wood. Mr. Wood is present before the Court. We are ready to proceed.

THE CLERK: J. Gillespie Wood: that is your true name?
THE DEFENDANT: That is correct, sir.

THE CLERK: You are informed that a superseding Indictment has now been filed charging you in Counts 1 and 2 with assault on a federal officer, and in Counts 3, 4, 6, and 8, with deprivation of rights under color of law, and in Counts 5, 7, 9, 10, and 11, with assault within the maritime territorial jurisdiction.

Have you received a copy of this superseding Indictment?

MR. FRANK: We have.

THE CLERK: You are further informed that you are entitled to a trial by jury, to be represented by counsel at all stages of the proceedings before this Court, and to have witnesses summoned to testify in your behalf.

How do you now plead to the counts of this Indictment? Are you guilty or not guilty?

MR. FRANK: We would ask that a "Not Guilty" plea be entered to all counts except Count 8. Mr. Wood is prepared to enter a

plea of guilty to Count 8.

THE CLERK: How do you plead to Count 8 of this Indictment?

Are you guilty or not guilty?

THE DEFENDANT: I plead guilty.

THE CLERK: Is the reading of the Indictment waived?

MR. FRANK: So waived.

(The defendant was then sworn.)

THE COURT: Mr. Wood, you understand that this change against you, Count 8, is that on or about the 7th of September of this year, while you were an agent of the Border Patrol, that you assaulted one Christopher Robles Enciso, an inhabitant of the State of California, thereby wilfully depriving him of the rights secured and protected by the Constitution not to be deprived of liberty without due process of law, and—

What is the maximum sentence in this matter?

MR. FRANK: One year and/or a thousand dollar fine, or both.

THE COURT: -- and that you might be subject to as much as one year and/or a thousand dollar fine as a result?

THE DEFENDANT: Yes, sir.

THE COURT: Do you also understand that by entering this plea, you are giving up some of your constitutional rights? You have the right to plead not guilty, the right to be tried by a jury and at that trial, the right to the assistance of counsel, the right to confront and cross-examine all the witnesses against you here in open court, and the right not to be compelled to in-

criminate yourself, and that you are giving up all of those rights by pleading guilty?

THE DEFENDANT: That's right, sir.

THE COURT: You also understand that if you plead guilty, there won't be any trial of any kind, so that by pleading guilty, you are giving up the right to a trial?

THE DEFENDANT: I understand that, sir.

THE COURT: Have you talked this over with Mr. Frank?

THE DEFENDANT: Yes, sir, I have.

THE COURT: What is the plea bargain in this matter, Mr. Frank?

MR. FRANK: Your Honor, we anticipate that at the time of sentencing on Count 8, the plea bargain is that the government will then move to dismiss all remaining counts. In addition, Mr. Wood will be tendering his resignation as a Border Patrol Officer to the Immigration Service.

THE COURT: Is that your understanding of the agreement, Mr. Wood?

THE DEFENDANT: Yes, sir.

THE COURT: Is that yours, Mr. Doyle?

MR. DOYLE: Yes, your Honor.

THE COURT: Now, is the government going to take a position as far as sentence is concerned?

MR. DOYLE: The government will take a position but there's no bargain as to that position, your Honor.

THE COURT: Has anybody threatened you in order to get you to enter this plea, Mr. Wood?

THE DEFENDANT: No, sir.

THE COURT: Now, back on about the 7th of September 1979 at the San Clemente Checkpoint Border Patrol Station within the Southern District of California, did you, as an agent of the United States Border Patrol, Immigration and Naturalization Service of the Department of Justice, acting under color of law, wilfully assault one Christopher Robles Enciso, an inhabitant of the State of California, thereby depriving him of the rights secured and protected by the Constitution not to be deprived of liberty without due process of law?

THE DEFENDANT: Yes, sir.

THE COURT: The Court finds the plea to be free and voluntary and to have a factual basis. It is ordered entered.

How about December 8 for sentence?

MR. DOYLE: That's fine with the government.

THE COURT: I say that because the normal sentencing would be sometime late November, but I have to be out of the country for either one week or two weeks and I'm not sure I'll even be back on the 1st.

MR. FRANK: That's an agreeable date and time, your Honor.

THE COURT: Very well. December 8 at 9:00 a.m.

THE CLERK: Might the trial date of November 4th be vacated?

THE COURT: Yes, that is vacated.

MR. FRANK: I'll take Mr. Wood to the Probation Office, your Honor.

THE COURT: Very well.

(Noon recess.)

CERTIFICATE

I, DOROTHY A. M. ALBRIGHT, C.S.R., do hereby certify that I am a duly appointed and qualified official court reporter of the United States District Court for the Southern District of California.

I further certify that the foregoing is a true and correct transcription of my stenographic notes of the proceedings had in the above-entitled cause on October 20, 1980.

Dated this 28th day of January 1981 at San Diego, California.

Official Court Reported

PEDRO VALAZQUEZ GONZALE. CONSTANCIA CONSULADO MEX, # 99,31 Oct, de 1980. REPATRIADO. CALEJON LOCUTORES FRACC. LOS ALAMOS # 78
TUJUNA B.JA CAL.F METICANA, TUJUAN B. CALF. X fue deportado de los E.U.A, a la Republica de guatemala, por aberlo consu erado guatemalteco. el 24 oct, de 1980. Edificio Coahuila
The Telosco Colonia
Ex Hipiodnomo de
Devolvillo
Tomar El motro que
ba a los udios Verdes

Border Patrol says won't happen again

Classroom checked for aliens

As the result of an incident occurring recently in an adult bilingual education class in Vista, South Bay border patrolmen have been advised by their chief that there is to be no overt checking of classrooms for illegal aliens, unless undertaken by a superior officer.

Allen Gerhardt, chief patrol agent, added, "This office does not contemplate any circumstance which would justify such action."

THE MEMORANDUM, dated Aug. 3, was sent out after Ernest Azhocar of National City advised Rep. Lionel Van Deerlin (D-San Diego) of the Vista incident.

Van Deerlin made an inquiry at the Border Patrol office, which resulted in the memorandum being sent to patrolmen. Dale Swancutt, assistant to Gerhardt said the memo is a restatement of the Border Patrol policy, as stated in the Border Patrol Handbook.

Swancutt confirmed that the incident in Vista did occur and that the memo is the result of Azhocar contacting Van Deerlin. Swancutt said the border patrolmen in Vista entered the classroom in response to a complaint made in a telephone call from a citizen.

The border patrol officers were apparently told that illegal aliens were included in the class. Swancutt said border patrol officers will follow up and answer all complaints, "that is our responsibility. But the manner in which they are followed up will be strictly professional."

THE MEMO from Gerhardt states that "if responsible school officials are unwilling to present specified individuals for a private discreet hearing," the border patrol officers are to notify their chief "before any overt checking of a classroom is undertaken."

He added, "My office does not foresee any circumstances which would warrant such overt action."

Gerhardt, in his memo, said the patrolman's handbook clearly states that searches of classroom for illegal aliens are not to be carried out, "particularly in the face of announced opposition by school authorities."

Azhocar said officials of the Chicano Federation in Vista called him to complain about the incident and that he called Van Deerlin.

This week Azhocar received a copy of Gerhardt's memorandum from Van Deerlin. Azhocar, a high school trustee, is the liaison to the Mexican-American community for Assemblyman Wadie Deddeh (D-Chula Vista).

STARNEWS 8-17-73

Houbler

Encarcelan Niños Como Testigos en

Casos de Detención de "Polleros

Por Rogelio LAVENANT SIFUENTES.

NATIONAL CITY. Herman Baca, dirigente del Comité de Derechos Chicanos, acusó ayer al Fiscal Federal Michael H. Walsh y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de encarcelar niños y menores de edad, "como testigos materiales" en casos de detención de "polleros" o materiales" en casos de detención de "polleros" o traficantes de indocumentados.

En una conferencia de prensa ofrecida ayer en la avenida Highlnd 1300, el líder chicano anunció haber enviado uin telegrama al Presidente Carter, denuncindo lo anterior, y pidiéndola que ordene una investigación a fondo de esta situación. Lo mismo al Presidente de México, Lic. José López

"Los niños están siendo tratados como criminales-dijo Herman Baca a EL MEXICANO- y en la mayoría de los casos ni siquiera están conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Son sep-arados de sus madres y fichados, imprimiendo las huellas de sus pies o manos, según su edad como si fueran delincuentes"

Citó algunos casos, aunque dijo que quienes le informaron de "estos actos barbáricos e inhumanos" pidieron que no fueran revelados sus nombres "Algunos perderían sus empleos, otros no quieren sufrir represalias", comentó Baca.

'Niños, incluyendo bebés tan de corta edad como de unos 24 meses de nacidos, están siendo aprisionados en el sistema de cárcel federal. Unos están siendo detenidos en el Metropolitan Correctional Center, el Centro de Detención de El Centro, California, y en el centro de detención en San Ysidro, estos dos ultimos de la Patrulla Fronteriza", aseguró el dirigente del Comité de Derechos Chicanos.

"Conforme nuestra investigación -añadió-aparece que el arresto y aprisionamiento de los niños y sus madres, son necesarios porque ellos son necesitados como "testigo material" en casos en que se ven involucrados los contrabandistas de "legales y estos niños están recibiendo sus "records" (antecedentes) criminales aunque ellos están impotentes para prevenir las circunstancias en que son detenidos".

También dijo Herman Baca, que, según sus fuentes de información, algunos de los pequeños están con sus madres, pero otros no. Una vez que los menores no son necesitados mas como "testigos materiales" las autoridades del servicio de Inmigración y Naturalización, simplemente los echan a territorio mexicano sin hacer ningún esfuerzo para asegurarse que podrán reunirse con sus

"Lo que es más- enfatizó Baca- también nos ha sido reportado que los niños que son turnados a las autoridades mexicanas, son guardados por una semana y luego echados a la calle para que ellos mismos se defiendan.

Por último, Herman Baca manifestó también que apenas el 27 de febrero, un niño de doce meses de nacido, fue recluído (detenido) en el Centro Correcional Metropolitano (MCC) de San Diego. Estas prácticas son inhumanas, barbáricas, y una demostración de la actual política de inmigración.

Children as young as 2 are being held apart from their parents in the federal Metropolitan Correctional Center and in detention centers for undocumented aliens in San Ysidro and El Centro, Herman Baca, chairman of the Committee on Chicano Rights, said in a telegram to President Carter yesterday.

Regarding the accusations by Herman Baca that children are being imprisoned and then "tossed into Mexico," subsequently denied by federal officials, here is a true story:

The 15-year-old daughter of a friend of mine was picked up on the street by "La Migra," driven 150 miles to San Ysidro, and "tossed into

Baca said he will elaborate on the charges today during a press conference.
Federal officials here denied any knowledge of incidents described by

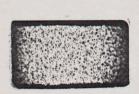
committee determined that the children are held as material witnesses in cases against smugglers of undo-"Once the children are no longer needed as 'material witnesses, the TNS (Immigration and Naturalization Service) authorities simply toss them into Mexico without making any effort to insure that the children are reunited with their parents," he cumented aliens.

said in the telegram.
"Furthermore, it has also been reported to us that children who are turned over to Mexican authorities are kept for one week and then are turned loose in the streets to fend for Mexico" at 1 a.m. Fortunately, just by chance, her schoolteacher witnessed the pickup and called the local immigration office to find out what they intended to do with the child. The teacher then called my friend who boarded the next bus for San Ysidro and managed to arrive there minutes before the immigration bus arrived.

What if the teacher had not witnessed this pickup? The child would have been abandoned — alone and penniless — on the streets of Tijuana in the middle of the night. And what about the anguish of the mother not knowing the whereabouts of her daughter?

ELIZABETH HUGHES
Coronado

man said children in some cases are held with their parents, but added that he knew of no cases where themselves," Baca said. United States Attorney Michael Walsh could not be reached for comment yesterday.
Assistant U.S. Attorney Herb Hoff-





Alien Juveniles Get Foster Homes

11-30-79 By MITCH HIMAKA Staff Writer, The San Diego Union

The U.S. marshal's office and the Catholic Community Services of the San Diego Roman Catholic Diocese begin an experimental foster homes program today for the care of undocumented alien juveniles waiting to be called as material witnesses in federal court cases.

U.S. Marshal James R. Laffoon said four youngsters will be placed with four families this morning.

Laffoon said that if this program is successful, it would combine with another program operated in conjunction with the Salvation Army to solve the problems created when San Diego County said it could no longer accommodate the federal government by accepting custody of such material witnesses.

The Salvation Army program, initiated July 9, allows mothers and young children to remain together in family life settings.

The new program will allow children in the 12 to 17 age bracket to move about more with their foster care families, even traveling reasonable distances, except to Mexico, with the families, Laffoon said.

Until the new programs were started, all material witnesses were kept in the Metropolitan Correctional Center with the men and women separated.

Laffoon said those in the new program or the Salvation Army program usually are held here two weeks or longer until the cases for which they are needed is completed.

"This eliminates the use of the MCC for juveniles held as material witnesses in alien smuggling cases and provides care for the juveniles in a family setting compatible to them at less cost to the government," Laffoon said.

He said the Salvation Army program has drawn praise from Washington officials, prompting them to look into starting similar programs in Los Angeles.

Cynthia Leyva, coordinator for the Catholic Family Service, will serve as liaison with the participating families.

Laffoon said the program also has been cleared by the Immigration and Naturalization Service.

James J. O'Keefe, INS district director, has agreed to issue each participating youngster with document identification for traveling with a family within the community or on trips.









Church group seeking foster homes for aliens

By PAT CALLOWAY

Catholic Community Services of San Diego, under contract with the U.S. marshal's office here, has launched a campaign to find foster homes for children of Mexican nationals who cross the United States-Mexico border illegally.

The Social Service arm of the Roman Catholic Diocese of San Diego, CCS will act as a screening agent in helping to identify candidates for foster par-ents and provide six-hour training programs for potential foster parents.

In addition to the CCS contract, the marshal's office also has a contract with the Salvation Army that provides temporary lodging for the Mexican mothers and their infants.

Older children will be ing with their incarcerated counterparts at the Metro-

politan Correctional Center or in the care of foster parents.

The U.S. marshal's office sought alternative lodging and foster care facilities after its contracts with Hillcrest Receiving Home and the Juvenile Hall became obsolete. Both facilities were overcrowded with illegal aliens, officials said.

Under the new contracts with CCS and the Salvation Army, juveniles will be given an opportunity to be placed in a foster home after screening and interviewing. Mothers and their infants will take lodging at the Salvation Army facility, which opened its doors Monday.

Cynthia Leyva of the Catholic Community Services Center said only "low-risk" juveniles will be given the option of remain- selected for foster care. She said the agency foresees "lots of problems because

the majority of the children are going to be frightened and some might run away."

CSS has received at least six inquiries about the foster care program and, according to Leyva, three families have been interviewed.

The agency is looking for comfortable foster homes where families are bilingual and able to cope with temporary visitors. Single individuals also will be considered as foster parents.

Laffoon said he prefers placing Mexican juveniles in homes where "the mores

of their country are respected."
"We want the mother (Mexican national) to know that her children are in good hands," said Laffoon, for the program is designed to "treat the woman (alien mother) and her children as well as the American people would want an American woman and her children treated,"

Local foster parents are asked to prepare to keep the juveniles for an average of two weeks, according to Leyva. She said foster parents caring for children under 14 years old will receive \$10 a day and \$15 for children age 15 to 17.

Laffoon said the new program will cost a maximum. of \$200,000 annually. Lasts year's program, which program vided lodging primarily at. MCC, cost about \$2.3 mi lion, he said.

The Metropolitan Corr ctional Center, built in 1974, once the only accommodal ing facility for adult aliens, is overcrowded and unprepared to deal with the growing number of women and children held there, officials say.

Many adult Mexican nationals at MCC are there as witnesses in cases against alien smugglers, and, in many cases, infants have been allowed to stay with their mothers there.

Prior to the opening of MCC, juvenile illegal aliens were transported to the Santa Barbara Juvenile Hall a program that "had them on the road all " the time and was very expensive and tiring for both officers and juveniles," Laffoon said.

Laffoon described the new foster care program as a humane effort to solve the problems of illegal aliens. He said San Diego's program is a pilot project for the United States and will be adopted by other border towns if it proves effective.



FOR IMMIDIATE PRESS RELEASE FEBRUARY 29, 1980

NATIONAL CITY, CA.

Herman Baca, Chairman of the Committee on Chicano Rights, today accused San Diego U.S. Attorney Michael Walsh and the U.S. Department of Justice of imprisoning children in the Federal Prison Sys-In a telegram (see enclosure) to President Jimmy Carter the CCR has demanded an immediate cessation of imprisoning children and has requested a full scale investigation into the matter. According to Baca "The U.S. Attorney Michael Walsh must explain his actions and show cause why he is arresting, finger-printing (or foot printing) babies as "material witness" in cases involving "illegal alien" smugglers. This inhuman practice of imprisoning mothers and their children and parentless children is further indictment of the present immigration policy. The CCR also announced that it was requesting, in a letter to President Jimmy Carter and President Jose Lopez Portillo, the formation of a bilateral committee to work out a humane solution to the victimization of children on both sides of the border.

IPMSDLB SDG 1-041029N059-001 02/28/80 ICS IPMSDLB SDG RETRIEVAL REPLY: 1-040555M059 ICS IPMSDLB SDG 02043 SANDIEGO CA 293 02-28 317P PST PMS PRESIDENT JIMMY CARTER WHITE HOUSE DC MR. PRESIDENT.

CHILDREN, INCLUDING BABIES AS YOUNG AS 24 MONTHS ARE BEING IMPRISONED IN THE FEDERAL PRISON SYSTEM. CHILDREN ARE BEING HELD AT
THE METROPOLITAN CORRECTIONAL CENTER, EL CENTRO DETENTION CENTER
AND THE SAN YSIDRO DETENTION CENTER FOR A PERIOD OF 1 DAY TO 90 DAYS.
SAN DIEGO U.S. ATTORNEY MICHAEL WALSH, ACCORDING TO OUR INVESTIGATION CLOIMS THAT THE ARREST AND IMPRISONMENT OF CHILDREN AND THEIR
MOTHERS IS NECESSARY BECAUSE THEY ARE NEEDED AS "MATERIAL WITNESS"
IN CASES INVOLVING ILLEGAL ALIEN SMUGGLERS. THESE CHILDREN ARE BEING
GIVEN CRIMINAL RECORDS EVEN THOUGH THEY ARE POWERLESS OVER THE
CIRCUMSTONCES INVOLVING THEIR ARRESTS.

OUR SOURCES INFORM US THAT SOME OF THESE CHILDREN ARE WITH THEIR MOTHERS, BUT THAT OTHERS ARE BEING IMPRISONED WITHOUT THEIR PARENTS. OUR INVESTIGATION ALSO REVEALED THAT ONCE THE CHILDREN ARE NO LONGER NEEDED AS "MATERIAL WITNESSES", THE INS AUTHORITIES SIMPLY TOSS THEM INTO MEXICO WITHOUT MAKING ANY EFFORT TO INSURE THAT THE CHILDREN ARE REUNITED WITH THEIR PARENTS. FURTHERMORE IT HAS ALSO BEEN REPORTED TO US THAT CHILDREN WHO ARE TURNED OVER TO MEXICAN AUTHORITIES ARE KEPT FOR ONE WEEK AND THEN ARE TURNED LOOSE IN THE

STREETS TO FEND FOR THEMSELVES.

JUST YESTERDAY FEB. 27, 1980 A 12 MONTH OLD BABY WAS BEING HELD AT THE METROPOLITAN CORRECTIONAL CENTER. THESE PRACTICES ARE INHUMAN, BARBARIC AND AN INDICTMENT OF THE CURRENT IMMIGRATION POLICY. IN THE NAME OF HUMAN DECENCY OUR ORGANIZATION DEMANDS THE IMMEDIATE CESSATION OF THE IMPRISONMENT OF CHILDREN AND AN END TO ALL THE DEGRADING POLICIES INVOLVED IN THIS SYSTEM. THE INSANITY OF THESE ACTIONS CRY OUT FOR AN IMMEDIATE INVESTIGATION TO DETERMINE RESPONSIBILITY FOR THESE ACTS. AS THE HIGHEST ELECTED OFFICIAL IN THE COUNTRY IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO PUT AN END TO THIS BORDER MADNESS.

THANK YOU.
HERMAN BACA
CHAIRPERSON COMMITTEE ON CHICANO RIGHTSINC

(CCR/1837 HIGHLAND AVE/NATIONAL CITY CA 92050/FN/7144748195/104/0/B AC A).
1859 EST

IPMSDLB SDG



Traducción de un telegrama Western Union, mandádo el 2/28/80 Sr. Presidente Carter:

Hay niĥos encarcelados, encluyendo bebitos de 24 meses, en el sistema Federal de Prisiones.

Hay niños presos en el Centro Correccional Metropolitano, en el centro de Detención de El Centro, California y en el centro de Detención de San Ysidro.

Estos estan presos por un dia, haste noventa (90) dias; El Licenciado representante de los Estados Unidos, el Sr. Michael Walsh dice, sigein nuestras investigaciones que, el arresto y detención es necesario, porque los niños son testigos materiales, en los casos de contrabandistas de personas sin documentación.

Nuestras informas indican que, algunos niños estan encarcelados con sus madres, pero que tambien hay niños encarcelados, sin sus padres.

Non informan tambien que cuando ya no son necesitados los niños como "testigos materiales" los oficiales del I.N.S. son liberalmente hechados a Mexico sin procurar sus familias ni padres.

Además es reportado que cuando cuales niños son entregados a las autoridades Mexicanas, que son detenidos por una semana y luego soltados a la calle.

Ayer mismo, Martes 27 de febrero, fué detinido un bebito de 12

1837 Highland Avenue, National City, CA 92050 (714) 474-8195

meses en el Centro Correccional Metropolitano. Estas practicas son inhumanos, barbaros y otra denuncia de la poliza actual de Emigración.

En el nombre de la decencia humana, nuestra oranización demanda la anulación inmediata del encarcelamiento de niños y un fin a las prácticas degradantes de este sestema.

La locura de estas acciones imploran una investigación immediata, para determinar la responsabilidad de estos actos.

Usted, cómo el oficial electado más elevado del paíz, es su responsabilidad de ponerle fin a esta situación lunática aqui en la frontera.

Gracias,

Herman Baca

William.

1095



February 28, 1980

President Jimmy Carter White House Washington, DC

Mr. President:

With all due repect, our organization wishes to inform you of a crucial issue requiring your immediate attention. The issue involves the discraceful and inhumane practice of imprisoning undocumented children in the U.S. Federal Prison system as "material Witnesses" in smuggling cases.

It is our organizations position that the victimization through imprisonment of innocent children for whatever reasons must cease immediately and that new alternatives must be developed to deal with this issue on a more humane level.

For those reasons our organization is proposing that the government of the United States and Mexico immediately begin talks on developing a bilateral commission so that solutions and responsibilities can be sought to end vicitimization of innocent children. The proposed commission should investigate the issue of the imprisonment of children in the U.S. and also the reported issue of deported children by the INS/Border Patrol being left to fend for themselves in the streets of Tijuana and other border cities.

Over the last ten years our organization has witnessed numerous violations of human, civil and constitutional rights with the unresolved immigration issue, but the issue of children being imprisoned represents a new low concerning this matter.

It is our sincere hope that the proposed bilateral commission will receive your immediate attention and that our recommendation for such a commission will become a reality leading to a positive resolvement of this degrading issue.

Sincerely,
Olyman Baca, Chairman



Febrero 28, 1980

Jose Lopez Portillo Presidente de la Republica Mexicana Plaza de la Constitucion Los Pinos, Mexico D. F.

Sr. Presidente.

Con todo respeto, nuestra organización desea comunicarle algo tocante un asunto crucial, que requiere su atención inmediato. El asunto se trata del vergonzoso e inhumano acto de encarcelar a niños. Encarcelar a hijos de personas detenidas sin documentación; estan en prisiones federales de los Estados Unidos, como testigos materiales en casos de contrabando de personas.

La posición de nuestra organización, es de que debe cesar inmediatamente esta victimación, el encarsamiento de niños inocentes por cualquier motivo, y que nuevas alternativas deberián ser resueltas, para aliviar este asunto a un nivel más humanitario.

Por estas razones nuestra organización le propone a los gobiernos de Mexico y los Estados Unidos, que comiencen con los preparativos para formar una Comisión Bilateral, para buscar mejores soluciones y responsabielidades para terminar esta victimación de niños inocentes.

La propuesta comision deberá investigar este asunto de niños encarcelados en los Estados Unidos y tambien el asunto de ninos deportados por el INS/Border Patrol y abandonados en Tijuana así como en otras ciudades fronterizas.

A travéz de estos últimos diez años, nuestra organización a sido testigo a varias violaciones a los derechos humanos, civíles y constitucionales, estos en asuntos de enmigracion aún irresoluto pero esto de niños encarcelados representa algo de lo más bajo concerniente al asunto.

Es nuestra sincera esperanza, que la propuesta comisión bilateral, reciba su inmediata atención, y que nuestra recomendación para tal comisión se convierta en una realidad, para llegar a una solución positivo a este asunto tan degradante.

Sinceramente, Nevman Baca Herman Baca, Presidente

Mexican children imprisoned in U.S.

SPECIAL TO THE PW Coalition in Defense of Im-.

migrants has denounced the mass imprisonment of Mexican minors and infants in U.S. prisons and called for a national campaign to free the children.

Of 340,000 people arrested on the U.S. side of the Mexican border in 1979, it was revealed, more than 8,000 were children.

Juan Manuel Soliz, speaking for the broad coalition of civic, community, legal and labor groups based in the large Chicano community here, told the press the jailing of these children is "a violation of the most elementary human rights of children" and was the result of the racist policies of the Dept. of Justice and the Immigration and Naturalization Service (INS).

Herman Baca, president of the California-based Commission on Chicano Rights, exposed the U.S. government policy of jailing Mexican children. They are held in gruesome federal prisons which John Celary, executive director of Federal Defenders, denounced as "unconstitutional, inhuman and atrocious."

Many are held because they or their parents are material witnesses slated to testify against "coyotes"-people who bring immigrants across the border for money—who operate illegally. But as Soliz pointed out the "coyotes" are usually out on bail within one day, while the immigrants and their children are deprived of all rights and jailed for months even though not rarged with any crime.

Children are separated from CHICAGO-The Midwest parents, finger-printed and treated like criminals by police and prison authorities. Para Rosa Rivas told the Mexican daily paper Excelsior recently she was detained as a witness against a "coyote" she had never seen, and her two children (one six, the other just a year old) were taken from her and imprisoned.

> Children are jailed in federal facilities in California at San Diego, Calexico, San Ysidro, Chula Vista and El Centro. In some cases, they have been "lost" in the federal bureaucracy and permanently separated from their families; in other cases, they are deported alone to various Mexican citiesregardless of where these children came from-and abandoned.

Soliz criticized President Carter's hypocritical posture as a defender of human rights in other countries while immigrant children are jailed hereespecially during the International Year of the Child in 1979. "Hundreds of Mexican hunger. children fleeing unemployment and unhealthy conditions try to cross into the U.S. with their families only to encounter repression and racism," Soliz charged.

The Midwest Coalition called on people in the U.S. to launch a letter campaign of protest to President Carter demanding immediate release of children in federal jails. Further, the coalition called for general, unconditional amnesty for all undocumented workers.

OBITUARIES

The San Diego Union

PAGE B-1

110th YEAR

SAN DIEGO, CALIFORNIA, SUNDAY MORNING, AUGUST 20, 1978

Alien Youngsters Who Witnessed Smuggling Wait At MCC

By BILL OTT Stoff Writer, The San Diego Union

Jose is from Durango, Mexico.

Yesterday he played volleyball on the roof of the sun drenched 12-story Metropolitan

The physical exertion of his game released some of the tension of his confinement.

By far, he was in much better condition than when he was taken into custody with his father at a remote drop house for aliens smuggled into the United States. He was hungry and dirty then.

Before being taken into custody by Border Patrol agents, Jose and his father - along with countless others - waited in Tijuana's Colonia Libertad area, hoping that the coy- are charges of U.S. Marshal James R. Lafote, or smuggler, they had paid could safely foon. Correctional Center overlooking San Diego bring them into the United States and financial refuge.

Here, perhaps, they could find work.

The dream collapsed when they were caught on this side of the border.

Jose and his father are being held in custody as material witnesses as federal prosecutors try to convict the smugglers who prey on the destitute and hopeful.

Jose is only 15.

As of yesterday, he was one of more than 20 youngsters in custody at MCC. The juveniles

"They aren't considered delinquents," Laffoon said. Nor are they charged with criminal offenses.

The youngsters, Laffoon said, are caught up in circumstances that are not of their own making. But they are material witnesses to alien smuggling.

Thus, the confinement at MCC.

The number of juveniles caught up in these

circumstances during the year of April 1. 1977, to March 31, 1978, totaled 292, Laffoon said. Of the total, 215 were males, whose total custody added up to 4,893 days. The 77 females spent a total of 1,297 days in custody.

The average time the juveniles spent in custody was about 20 days.

But there was the 17-year-old girl from Puebla, Mexico, who was in custody 86 days; a 17-year-old boy from Jalisco, 145 days; a 12year-old girl from Michocan, 22 days; a 15- to Mexico?" year-old boy from Zacatecas, 36 days.

They were in custody until the cases involving those who smuggled them in were con-

cluded. They testified as material witnesses. Then, with their parents or other relatives who brought them in, they were returned to

At the present time, Laffoon said, MCC is the best answer to holding these juveniles.

"They're here," he said. "They were taken into custody, not charged with any crime, but what do you do with them? Who do you turn them over to here until they can be returned

There is no immediate answer.

(Continued on 3-2, Col. 1)

Alien Youths At MCC Wait As Witnesses

(Continued from Page B-1)

Walter Lumpkin, MCC's warden, said: "Our mission whether the inmates are adults or juveniles - is to hold them in an environment as humane and secure as possible."

Teen-age males, he said, are segregated from male adults as much as possible. There is no verbal contact,

only visual contact at times.

As to very young children — and there have been some who are 5 or 6 years old — they are allowed to remain in custody with their mothers.

Associate Warden Lowell Kincaid said these youngsters are sometimes frightened, bewildered, and it would be more of a trauma to separate them from the parent.

Lumpkin said the youngsters, like the adults, have both dental and medical care while they are in custody. The medical care is provided by physicians' assistants, short of any major medical emergency such as appendicitis or childbirth.

The latter happened on at least one occasion. A material witness in custody was pregnant. When it came time for

her to give birth, she was taken to a local hospital. After the baby was born, and enough time passed, she was returned to custody with her baby.

What about the custody for the youngsters? They are housed in separate floors of the MCC. Each floor has 48 cells, each cell accommodating two. The cells are unlocked from 6 a muntil 11 nm., so they are free to roam. locked from 6 a.m. until 11 p.m., so they are free to roam the floor's open area. Each floor has one common television set. Each floor has exercise equipment, pool tables, pingpong, cards, checkers, dominoes.

And there is the rooftop, with two basketball courts handball, volleyball and shuffleboard. The meals are a

, balanced diet.

But, then, it is confinement, even if it is as humane as

And time hangs heavy with the young.





Inmates Plan Hunger-Work Strike Starting Monday At Prison Here

By KEN MIMMS Staff Writer, The San Diego Union

Three inmates of the Metropolitan Correctional Center in downtown San Diego say they will lead a a nonviolent "hunger and no work" strike, beginning Monday at the federal prison, to draw attention to a list of 28 grievances, it was learned yesterday.

day.

The grievances, which include a call to end separation of children of suspected illegal aliens from their parents, are included in a strike plan that includes a "code of conduct"

urging striking inmates to "refrain from any and all violence."

The strike is to begin about 6:30 a.m. Monday and will "take place in the form of no food intake (adults only), work stoppage and court stopping (not compulsory)," according to a statement issued by the trio and smuggled out of the MCC yesterday. By "court stoppage" the inmates

By "court stoppage" the inmates mean refusal to cooperate in making court appearances.

"Most of the public is not aware that children (infants to 17 years of age), are housed on the sixth floor.

We wish to . . . to exact a change to an appalling practice of separating children from their parents, most of whom are Hispanic speaking and are not able to understand what's going on," the statement said.

Asked if word of the strike had reached the MCC staff, Assistant Warden Lowell Kincaid said he was "not aware of anything of that sort."

"I have had no indication that the inmates are unhappy . . . "

Kincaid said children under 10 years of age are not separated from their parents. "And, on a periodic basis, (parents) are permitted to visit older children, who are housed in the Juvenile Unit; but I'm not sure how often our policy allows this," he said.

According to the grievance, the children do not have access to an "out of doors playground." But the roof of the MCC is used as a recreation area and "all inmates, including children, are offered time on the roof each day," Kincaid said.

In addition to their concern for the children, the strike leaders, inmates Allen M. Swarthout, Anthony R. Brinkworth and Jesus A. Cruz, demanded "(oxygen) breathing apparatus for all people in custody" and an emergency evacuation plan in the event of a fire or other life-threatening emergency.

"The MCC does not have any mattresses here that could emit toxic fumes (in the event of a fire)," he said in reference to mention in the grievance of a fire in a Tennessee jail that killed 44 persons when burning mattresses emitted cyanide fumes

The statement by the strike leaders stressed the importance of nonviolence, because "violence will only serve to alienate and deteriorate the conditions that already exist," and full participation: "A hunger strike is no good without solidarity."

The grievance list also asks: an end to "frozen TV-type" foods; availability of telephones to inmates from "wake-up to 11 p.m. to avoid altercations"; the right of inmates to seal outgoing mail and "unlimted free mailing"; daily access to the law library without delays; that inmates not be forced to work unless paid the minimum federal wage, and guaranteed time off for good behavior amounting to 15 days for each





The San Diego Union

Federal Official Denies Charge Of Imprisoning Alien Children

A federal official who initiated programs to care for the children of undocumented Hispanics being held as witnesses against smugglers yesterday denied that youngsters are being imprisoned needlessly.

U.S. Marshal James R. Laffoon said no child is being held at the

U.S. Marshal James R. Laffoon said no child is being held at the Metropolitan Correctional Center (MCC) unless it is for his own inter-

It was at Laffoon's urging that the federal government worked out programs with the Salvation Army and Catholic Community Services for temporary care of youngsters. During fiscal 1979, more than \$500,000 was earmarked for the programs, he said

said.
"Baca's all wet on this," Laffoon said, adding that he was concerned about participation in the programs because of Baca's accusations.

Laffoon's statements were in response to charges by the Committee on Chicano Rights. At a press conference yesterday, Herman Baca, president of the group, said he had sent a letter and a telegram to President Carter urging a bilateral commission to investigate "the disgraceful and inhumane practice of imprisoning undocumented children in the U.S. Federal Prison system as

material witnesses in smuggling cases."

He said children are detained at El Centro, San Ysidro and the MCC.

"It is our organization's position that the victimization through the imprisonment of innocent children for whatever reasons must cease immediately and that new alternatives must be developed to deal with this issue on a more humane level," Baca said.

Baca said that a similar letter was sent to President Jose Lopez Portillo of Mexico.

Baca said he disputes the necessity of detaining children and mothers as witnesses against smugglers where there are others who can testify against them.

Laffoon said undocumented Hispanics are held as material witnesses as long as it is determined they are needed by the defense and prosecution.

Lowell Kincaid, MCC associate warden, said fingerprints are taken of children over the age of 10 and all are photographed. He said it is part of the internal record keeping process.

Laffoon said each undocumented child who is picked up is given a medical examination at the MCC

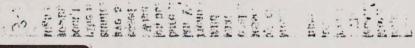
and may be required to remain there for treatment or go to a hospital for treatment.

Under a contract with the marshal's office, the Salvation Army cares for mothers and for children up to 10 years of age. Catholic Community Services is charged with finding Spanish-speaking homes for children aged 11 to 18.

Sometimes, youngsters remain in the MCC for more than a day or two because they are detained on a weekend, over a holiday, or because they have medical problems that need attention, he said.

Baca also charged that once the children are no longer needed as material witnesses, "the INS (Immigration and Naturalization Service) authorities simply toss them into Mexico without making any effort to insure that the children are reunited with their parents."

However, Clifton Rogers, INS assistant district director for deportation, said young children are not released to authorities of Mexico or other Hispanic nations unless they are with their parents or contact is made with a responsible adult who will care for them.







El Servicio de Inmigración de EU desmiente que haya niños mexicanos detenidos en la frontera

Señor director:

Junto con un cordial saludo, me permito enviarle la carta adjunta enviada por la señora Annie Gutiérrez, directora regional del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, al señor Bert Corona, en respuesta a un telegrama en el que denun ció que niños mexicanos sen detenidos en cárceles estudunidan SOS

En virtud de que la información relacionada con el telegrama del señor Corona suscitó algunos comentarios de columnistas que colaboran en su periódico, le proporcionamos el material antes mencionado, esperando que, en interés de una mejor y ina yor comprensión de los hechos, lo ponga al alcance de los lecto-

Larry J. Ikels, agregado de prensa, embajada de Estados Unidos.

A continuación, la certa de Annie Gutiérrez:

Estimado señor Corona:

Cuando llegó su telegrama del 15 de febrero, yo me encontra-ba en América Central. A mi regreso me ocupé del asunto a que se refiere, en el sentido de que se detiene a muchos niños mexicanos durante largo tiempo, en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) en San Diego, California, en calidad de testigos de cargo. Igualmente, me ocupé de aseveraciones de otras personas de que 600 niños mexicanos están en prisiones estadunidenses, como testigos de cargo.

Puedo asegurar categóricamente que ninguna de estas afirmaciones es cierta. Los procedimientos seguidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos y por el alguacil de Estados Unidos se basan firmemente en los siguientes princi-

pios y normas:

1) Aunque preferiríamos no detener a testigos de cargo, sin embargo es preciso hacerlo a fin de poder llevar a juicio a embargo es preciso hacerlo a fin de poder llevar a juicio a embargo es preciso hacerlo a extranieros al país. Los aquellos que introducen ilegalmente a extranjeros al país. Los testigos sólo son detenidos cuando ellos han sido parte de un caso de contrabando a gran escala;

Los niños no se utilizan como testigos de cargo;

3) Las mujeres que son testigos de cargo y los niños no son de-

tanidos en la cárcel durante largo tiempo;

4) Jamés se coloca a jóvenes detenidos en la misma área en que están los adultos, a no ser que se trate de niños pequeños que necesiten la atención de sus progenitores; los jóvenes y los testigos nunca están con criminales.

Bajo nuestras leyes, el acusado tiene derecho de interrogar al testigo. Por lo tanto, las cortes han decidido que cuando se detenga a una persona que introduzca ilegalmente a extranjeros al país, los testigos también sean detenidos. Con anterioridad, los abogados defensores insistían en que se retuviera a los testigos hasta que se celebrara el juicio. En los últimos meses se han hecho grandes esfuerzos con el objeto de acortar el tiempo de detención de los testigos.

Las personas más jóvenes que se aceptan como testigos deberán tener no menos de 15 o 16 años de edad, dependiendo de que dichos jóvenes tengan algo importante que declarar que sólo éllos puedan hacerlo. Esto sucede en raras ocasiones. A los jueces y abogados no les gusta presentar jóvenes en las cortes como testigos, a menos que sea absolutamente necesario. Por otra parte, la norma que sigue el Servicio de Inmigración es de no repatriar por separado a los miembros de una familia, sino que los retione con el objeto de que regresen juntos.

Durante los últimos nueve meses, se ha alojado a mujeres y niños del área de San Diego en una propiedad del Ejército de Salvación denominada la Puerta de la Buena Esperanza, o con familias particulares a través de la Agencia Católica de Servicios para

En cuanto el juez inicia el proceso se envía a las mujeres y los niños a la casa del Ejército de Salvación, que no es un lugar de encierro, ni está vigilado por la policía. El sitio cuenta con habitaciones privadas para mujeres con niños y semiprivadas para las solteras. También hay una guardería para los niños, con juguetos y televisión, y un patio de jungos.

Los jóvenes menores de 18 años, que no van acompañados de adultos de la familia, son hospedados con familias de la Agencia

Católica de Servicios para la Familia.

Empero, hay una excepción a esta regla: tratándose de jóvenes de 16 o 17 años que viven en el área de la frontera, no se les hospeda con familias estadunidenses justo al otro lado de la frontera, pues por experiencia sabemos que en esos casos prefieren volver a sus hogares. Estos jóvenes son enviados al MCC

El MCC está compuesto de varios pisos. Cada piso donde se aloja a los testigos de cargo y a los jóvenes está dividido en una amplia sala central y de descanso con cuartos individuales alrededor. La sala central, generalmente, se usa para tomar los alimentos, ver televisión, para juegos de mesa, labores creativas, lecturas, o simplemente para conversar. No hay bares. De ninguna manora estas áreas de descanso se parecen a una cárcel típica.

Por otra parte, se me ha asegurado que en el MCC se fotografía y toma huellas digitales tanto a los testigos de cargo como a los jóvenes detenidos con el único propósito de identificarles, y que ninguna información relacionada con ellos pasa la computadora que mantiene la información relativa a los crimina-

les. Por lo tanto, no se les considera como fichados.

Las aseveraciones hechas por otros de que hay 600 niños mexicanos encarcelados como testigos de cargo, son falsas del todo. El total de testigos fluctúa diariamente; sin embargo, el promedio de la última semana fue de 135 en los Condados de San Diego e Imperial. El número de niños menores de 18 años ha sido alrededor de 25 por día. Por lo general, no se ha detenido en todo el país a más de 25 testigos en cualquier día. Del total de deten-ciones efectuadas por la Patrulla Fronteriza en el área de San Ysidro (de mil 350 a mil 750 diarias), calculamos que un 3.3 por ciento son niños y jóvenes menores de 18 años.

Mo he extendido en la respuesta a su telegrama con tanto detalle, porque creo que es esencial tratar este importante asunto a la luz de los hechos. No es posible que los cargos irresponsables y la información inexacta contribuyan a comprender mejor este tema o a resolver estos problemas - objetivos que estoy segura,

todos deseamos alcanzar.

Annie Gutiérrez

N. de la R.: Carta resumida





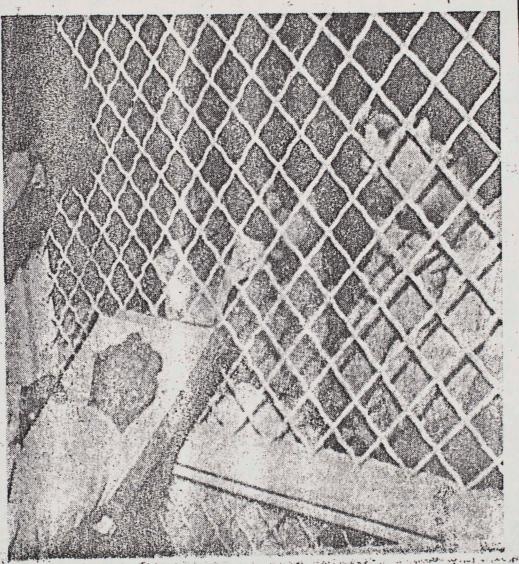
Anticonstitucional e Inhumano: Cleary

- * Tres Meses Presos Para ser Testigos de Cargo
- * De Nada se les Acusa; Sólo los usa el Fiscal
- * Figuran Millares en las Fichas Criminales

Por FERNANDO MERAZ, enviado de EXCELSIOR

SAN DIEGO, Cal., 1o. de marzo Al margen de lo dispuesto por las leyes de este pais y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más de 600 niños mexicanos están recluidos como testigos de cargo en las prisiones de San Diego, Calexico, San Isidro, El Centro y Chulavista:

De los 340,000 mexicanos ilegales capturados en 1979 por la Border Patrol en esta zona fronteriza, 8,300 eran adolescentes y niños que acompañaban a sus padres en la aventura: abandonaron casa y familia para huscar el sus-tento y ahora se hallan aqui como actores de un drama aun más cruel, que SIGUE EN LA PAG. DIECINUEVE



VARIAS JOVENES indocumentadas, menores de edad, fueron entrevistadas por el reportero Fernando Meraz, en la carcel del Condado de San Diego, California, en donde se encuentran recluidas. (Foto de Eduardo Zepeda)







Junto a Homicidas y Asaltantes, 600 Niños Mexicanos en 5 Presidios de EU

Sigue de la primera plano

Internacional del Niño". mitió integrar la primera un comité encabezado por el tratantes y el único posible claración Universal de los La detención de menores prueba documental sobre la dirigente Herman Baca, la es el de sus propias victi- Derechos del Hombre, decalidad de reos, las privo de edad es práctica común denuncia presentada el lu comisionada leueral, Alida mas. Es por eso que calidad de reos, las privo de edad es práctica común denuncia presentada el lu comisionada leueral, Alida mas. Es por eso que calidad de reos, las privo de edad es práctica común denuncia presentada el lu comisionada leueral, Alida mas. Es por eso que calidad de reos, las privo de edad es práctica común denuncia presentada el lu comisionada leueral, Alida mas. Es por eso que calidad de reos, las privo de edad es práctica común denuncia presentada el lu comisionada leueral, Alida mas. Es por eso que calidad de las patrullas del Servi nes de la semana pasada Caslow y el sacerdote cató deben permanecer a dispopor el gobierno de Carter sición de la fiscalía durante en este país, y a la Ley de de edad es práctica común denuncia presentada el lu comisionada federal, Anita mas. Es por eso que estas clarada norma obligatoria tes de regresarlos derrotados a su país, a revivir su
propia, laltrecha suerte, en
tanto que las Naciones

lización de Estados Unidos, tes de la comunidad chicasegún lo comprobó el rena al gobierno del Presimenores detenidos no son estime necesario, según exnidense, aseveró el director
sujetos de cargos criminaplicó a los enviados de EXtanto que las Naciones
investigación realizada en terada el viernes ante la
lización de Estados Unidos, tes de la comunidad chicamenores detenidos no son estime necesario, según exnidense, aseveró el director
sujetos de cargos criminaplicó a los enviados de EXdel Federal Defenders —
defensoria de oficio— del condos a las prisiones federaasistente del procurador
dos a las prisiones federaasistente del procurador
dos a las prisiones federaasistente del procurador
dado de San Diego, Michael tes de regresarlos derrota. lización de Estados Unidos, tes de la comunidad chica- En todos los casos, los todo el tiempo que la corte Libertades Civiles Estadu-

rial witnesses", o testigos gración.

les, en calidad de "mate- Walsh en asuntos de emi- John J. Cleary.

Al iniciar un proceso, la la propia Constitución de nos en contra de los indofiscalia debe presentar tes- Estados Unidos; a los artimonio en contra de los tículos 10, 11 y 12 de la De-

de cargo en los procesos que la fiscalía federal, en ca generalizada, al obligar esta zona a cargo de Mien contra de su voluntad a chael H. Walsh, abre en los ilegales detenidos a percontra de los "polleros" o manecer en prisiones inclutratantes de ilegales.

Al iniciar un proceso, la la propia Constitución de los indocumentados y por la terri-

EXCELSIOR Domingo 2 de Marzo de 1980 79.A





600 niños presos de la migra

Derechos Chicanos de San Diego, Calif., (CCR), condenó la práctica federal de detener a niños mexicanos como "testigos materiales" contra "coyotes y polleros" (fraficantes de indocumentados).

De acuerdo a Herman Baca, dirigente de CCR, los niños se encuentran detenidos en cárceles de San Diego, Caléxico, San Ysidro, El Centro y Chula Vista. Los detenidos, muchos que apenas llegan al año de edad, son fotografiados y fichados en archivos del Depto. de Justicia. El diario mexicano Excelsior calcula que la migra tiene detenidos a 600 niños mexicanos en California.

CCR envió telegramas denunciando esta vil violación de derechos humanos al

Presidente Carter y al Presidente Lopez Portillo de México, pero Baca dijo al Clarin por teléfono que "como siempre, no han contestado."



PUEBLOS
DEL MUNDO
UNIOS PARA
DERROTAR AL
IMPERIALISMO

El Gaffa

ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA (M-L)

AÑO 9, Nº 12

EL CLARIN, P.O. BOX 5597. Chicago, III. 60680-Publicado por el Partido Comunista (Marxista-Leninista)-25¢

24 DE MARZO, 1980

Kids In Prison

NEW YORK, NY-Mexican and Chicano children caught crossing the border are now being held in federal prisons. This charge, recently confirmed by the US Department of Justice, was first reported by the Committee on Chicano Rights (CCR) in San Diego.

Their information came from a number of unnamed employees working inside one California prison. Undocumented children are held for as long as 90 days and then released to foster homes while their parents

continue to serve time.

Lowell Kincaid, deputywarden of the Metropolitan Correctional Center, conceded that juveniles are held in the San Ysidro prison, located on the border, when he told LNS, "We have an obligation to house anyone held by the US Attorney. If it happens to be children, then we house them."

The new practice is part of a stepped-up effort by federal prosecutors to convict those who are paid to smuggle people across the US-Mexico border. But according to Herman Baca, chairman of CCR, "The fact is that smugglers have money and pull bail, while the 'material witnesses' must spend weeks, even months, imprisoned. We believe this inhuman practice of jailing mothers and their children, and parentless children; must be investigated: So that it is stopped." I

In a telegram sent to both President Carter and President Jose Lopez Portillo, Baca says that CCR sources also revealed that those children who are not placed in US foster homes are turned over to Mexican authorities. In Mexico, they "are kept for one week and then turned loose in the streets to fend for themselves."

Leticia Jiminez, also of CCR, said, "Imagine the anguish involved. The child is apprehended, alone, in a strange country, and because of the illegality the parents are afraid to call Immigration. So, they are breaking up families."

Jiminez also believes that photographing, fingerprinting, and in the case of one 25 monthold baby, footprinting, which Kincaid told LNS "is for purposes of identification only," could possibly damage a child's chances of crossing the border legally in years to come. Baca called the practice "barbaric."

The letter to President Carter and President Portillo seeks the formation of a bilateral committee "to work out a humane solution to the victimization of children on both sides of the border.

CCR has also called a Chicano National Immigration conference to be held late in May "to unify on solutions to the escalating border violence."

Baca added, "We feel that the issue of illegal workers is being used to inflame people and destroy any progress, economic and otherwise, made by the Chicano movement. So, we're calling for a national crusade to end the violence and the policy.

2!





- D. INFLICTING UNNECESSARY PHYSICAL VIOLENCE

 AND ABUSE ON SUSPECTED UNDOCUMENTED ALIENS,

 UNITED STATES CITIZENS AND PERMANENT RESIDENT

 ALIENS.
 - Affidavits and/or Declarations
 - Formal Complaints
 - Official Documents
 - Transcripts
 - Fact Sheets
 - News Articles

I, ELVIA MURPHY DE LAVALOS, residing at Romano #100, La Mesa, Tijuana, B.C. Mexico and employed at Empresas Fimbres, Credit Department, wish to state and affirm that on February 4th, 1978 after my husband, ENRIQUE LAVALOS CERDA, and I got out of work at approximately 9:00 p.m. we went to our home to pick up some belongings that we were to take on our trip to Disneyland. We then arrived at the San Ysidro port of entry at approximately 11:00 p.m. being refered to Secondary Inspection; in Secondary Inspection we requested a permit for both of us to go beyond the 25 mile limit. We were issued form SW-434 (one only) for both of us with the ending numbers of each of our border crossing cards by an Immigration Inspector; we then proceeded inland without any problem, at our arriving at the San Onofre Border Patrol Check Point at approximately 1:00 a.m. of February 5th, we were pulled over by a Border Patrol Officer. He requested to see our 1-186 cards with our permits, we dmonstrated him form SW-434, and the officer replied back by telling me to get out of the car alleging that one permit was missing without giving us the opportunity to speak, he also stated that there were some numbers missing from the SW-434 form. He then in a very nasty attitude ordered me out of my busband's car to go to his office and abusively told my husband to leave the area, My husband again asked him for an explanation as to why he was taking this attitude against us, he got my husband by the jacket and threaten to beat him up and to take his I-186 card. My husband did not want to leave me by myself at the mercy of this individual, he was very concerned of what was going to be my destiny with an individual like that Border Patrol Officer but he did not have any other alternative but to leave. I was then ordered by the same Border Patrol Officer to go in his office and then was told to go in a room with another Officer, where I was ordered to take my clothes off. The room was dirty, unsanitary, very poorly cared for the officer proceeded to search me touching my body with her dirty hands also thouching my sensitive parts and putting me in a very embarassing situation. I pleaded with the officer not to touch me and asked her why I was being treated like an animal and she only replied and stated "I DO NOT SPEAK SPANISH" I was then returned back with other individuals eved there without food or water until I was returned back to the Mexican

without food or water until I was returned back to the Mexican sed to the Mexican Authorities at about 7:00 a.m. in the 5th, 1978. I HEREWITH STATE AND DECLARE THAT THE FOREGOING

IS A TRUE AND CORRICT STATEMENT OF FACT.

brilen was a few to the season a

mai de la Manalon :

ELVIA MURPHY DE DAVALOS

some belongings the record and the control of the control of the state of the state

United California



Mexican-American Assn.

318 EAST SAN YSIDRO BLVD. SAN YSIDRO, CALIFORNIA 92073 (714) 428-2742

June 29, 1978

Leonel Castillo, Commissioner Immigration and Naturalization Service Washington, D.C.

Dear Mr. Castillo:

The President and the Board of Directors of the United California Mexican-American Association have authorized and instructed me to convey to you their opinions and questions regarding the shooting of Emiliano Zapata Coleman by Border Patrolman Donald Heidt.

We are informed that the facts were as follows: Heidt in the company of another Border Patrolman was drinking at a local restaurant, was apparently refused additional drinks by the restaurant, proceeded to threaten at least three people with a .357 magnum, drove his vehicle on the streets of Chula Vista, running into the car of Coleman, then shooting Coleman.

QUESTIONS: Was Heidt on duty at the time? Why was Heidt carrying a .357 magnum? On duty or off-duty, why this killer weapon? Why was he carrying it in a restaurant? When he was drinking, why? Was his fellow Border Patrolman also armed? And drinking?

Other more long-range questions: what sort of record does this man have? Had he been tested for his propensity for violence? Do you test future Border Patrolmen psychologically? For mental competence? Do you give them the polygraph examination such as the Sheriff here does to ascertain background facts, including instability? How much training has this man, and any others, in the handling of a weapon? Does he and the Service not know that the use of this weapon is deadly? That an encounter with such a weapon is usually deadly? Do Border Patrolmen on this border generally used this weapon? If so, why?

For this Association, as well as all others on this border who wish both peace and law and order, we must emphatically denounce this attack on the Spanish-speaking Black man in downtown Chula Vista by an armed officer of the United States. While we must in part hesitate to make a final judgment against the man, we must protest

Mr. Leonel Castillo June 29, 1978 Page 2 --

to the Service the actions of Mr. Heidt, since they are at least in part actions of and by the Service. Such a dangerous weapon should not be present in downtown Chula Vista. In all probability such a dangerous man should not be employed as an officer of the United States.

Many of us had hoped that this sort of violence had ceased along the border. Years back we sought and secured money judgments against the Border Patrolman Ken Cock when he was accused of having sexual relations with his prisoner (she consented), and against Border Patrolman Jon Holman who tore up Mr. Daniel Magana's apartment, together with Border Patrolman Francis, looking for illegal aliens in his books and chili peppers. In this last case there was testimony about the officers drinking before their rampage. Here again we have an apparent alcohol problem. Again our question: What is being done about this sort of activity? What is going to be done? Is it necessary for our people to be armed to protect themselves from "peace officers"?

Urgently, please look into this matter.

Sincerely,

UNITED CALIFORNIA MEXICAN-AMERICAN ASSN.

	BY:			
FREDERICK HETTER, Counsel		ALBERT	GARCIA,	President

FH:h

HEART PATIENT

Boy, 4, Dies at **Border Gates**

BY ROBERT MONTEMAYOR Times Staff Writer

To the U.S. Customs inspector at the desk, the Mexican woman with the 4-year-old boy in her arms was just another impatient person waiting to cross the international border.

For other people waiting in the Customs lobby, the woman's frantic pleas of "Emergencia! Emergencia! Boy sick!" indicated only that something was wrong. How serious it was, no one knew.

Except for Guadalupe Astorga. For her and for Mario Alberto Canedo at that point unconscious and gasping his last breaths - the moment was a nightmarish climax to a series of confusing events that ended with a terrified scream as the boy died in her

Please Turn to Page 5, Col. 1

LO. Ting 3-23-79

BOY, 4, DIES WHILE WAITING TO CROSS BORDER

Continued from First Page

People who suddenly realized the seriousness of the woman's distraught. pleadings began weeping as Mrs. Astorga cradled the boy's limp body in her arms. Moments later - just a few minutes too late - an ambulance team arrived.

The death, a border official explained, was the result of "a certain lack of communication . . . an unfortunate death that fractured emotions and brought everyone who witnessed it to their knees."

On Thursday, border authorities finally pieced together the details of the Tuesday incident.

The Canedo boy, who had a congenital heart disease, had undergone heart sugery about a month ago at San Diego's University Hospital. Doc-

tors told investigators that the boy's operation had involved "rebuilding the heart."

After recuperating to the doctors? satisfaction, the youth was released from the hospital March 14 and returned to his home in Colonia Francisco Villa, about 10 miles southwest of Tijuana.

Mrs. Astorga told police the boy had been fine until Tuesday afternoon when he began vomiting blood. The woman, who had raised the child since birth, carried the boy to a cousin's home and from there began driving to the border.

But en route to the San Ysidro port of entry, the boy began convulsing and shortly afterward lost conscious-

The time was about 5:15 p.m. and the notoriously long lines of cars at the border by this time stretched beyond the Mexican customs offices. about 200 yards south of the border crossing.

"She had to wait 20 minutes in line. just like everyone else usually waits at that time of the day," said Robert Mitton, assistant district director of the U.S. Immigration and Naturalization Service.

After finally reaching the entry gate, the panicking Mrs. Astorga quickly explained her "life-anddeath" problem to the Customs offi-

The officer, Mitton said, "recognized the problem and wrote the woman a note that indicated she had

an emergency." Mrs. Astorga was instructed to proceed to the secondary inspection area, where she bolted from her car with the boy in her arms. and ran into the Customs lobby.

However, "because of all the confusion going on, it was not made clear to the Customs agent inside the inspections building that Mrs. Astorga was experiencing an emergency."

In her limited Englis., Mrs. Astorga explained to the Custom officer at the permits desk that the boy was ill and needed immediate medical attention. She was told to wait.

San Diego police and an ambulance crew, Mitton said, had been called about 5:45 p.m., moments afer Mrs. Astorga had driven into the secondary inspection area.

"The officer (inside) was not aware it was an emergency, even though the woman was screaming,' said Mitton, whose agency investigated the death. "I think if he would have known what the circumstances were, he would have waived her through. But it was simply a matter of lack of communcation."

Consequently, Mrs. Astorga waited in the Customs lobby, pleading and sobbing in Spanish. The lobby was beginning to fill with confused murmur when Mrs. Astorga let out a blood-curdling scream, Mitton said.

A hush fell over the lobby, Mitton said, and officers who finally went to Mrs. Astorga's side, then realized what was happening.

Even the ambulance team, which police said responded "very quickly," also had its problems with confusion. "They drove into the secondary inNos Angeles Times * J Fri., Mar. 23, 1979 - Part 11

spection area and couldn't find the woman and boy," Mitton said. "No one outside knew that the woman had run into the inspections building."

By the time they reached the boy "the only thing left to do was call ine coroner." Mitton said.

"What can I say? It was not a very happy thing for us, not a pleasant thing at all. I'm sure there are a lot of people saying, 'if only I could have done this or done that, things might be different."

Ironically, the boy had been scheduled to return to University Hospital Wednesday for a checkup. The county coroner said the cause of the boy's death has not yet been determined.



PROCESS 1) Translate into Spanish 2) Type Ist draft in Spanish (3) Proofred 1st draft; retype If necessary (2 ND Draft) (4) Prostread 200 prost. this should be fine proof. (5) Write case It (in blue graphic artist
peneil) on final draft
and check of Master list (F) (USE blue graphic artist pencil because it will not show up when xeroxed /

F = Final copy - proofed of typed English, Span MASTER LIST huis Arquer Algunico Comez Jorge almos Frank Amaro Raul Gonzales, et. al. Pedro Velas Juez Gonzales
Lorenzo Rodrigues
Rogelio Adolfa Mendez Dias
Jorge Plandarte 1 F F Eliagan Escamilla-Montoya VF 10 Fred Darew 11 Ivan Diaz Chaidez 12 Terry hugan 13 Baca testimony 14 Monolo Alberto Mario Canedo Marta Elena Parra hopez Reyes & Rincon Bulleras Case Zarate Case Ortiz Lavalos Bustamente Vasquez Cilbert Hasto 15 Christopher Enaso Robles 16 Jose Sindrui Angel Hernandez 17 VE 18 Pedro Cervantes and Luan hozano Camilo Ramos Gallegos Chema Ramos et al. 20 21 Jesus Cardena For Daniel Cordene IF Jose huis Borja Alfonso Guzman Hernandez 23 VP 24

Maria Carmon & Luis Platon Ordonez JF Patrick Hanigan 26 Antonio Mentes JF 27 Marcos Espinoza et-al.
Marcos Espinoza et-al.
Marcos Espinoza admissions d'International fact
hos 13 de Vouge Coach VF 28 VF 29 VF 30 Elvia Umphy de Davalos IF 31 Stella Salazha Robert A Acero 1F 32 VF 33 Antonio and Elsy Chavez 1 F 34 Maria Elena Esquivel Rajael Carcia / F 35 1F 36. Margarita N. Gutierrez 37 Alicha G. Robigues 30 International Chamber 39 of Commerce of San Ysidro Abel Galvan Zavala San Diego Police Dept. - Policy 1F 40 211 VF Emiliano Zapata Coleman 42 Editorial KATV 10 S.D. 43 VF

I, Martha Elena Parra Lopez, residing at Circumbalacion #7, Fraccionamiento Los Alamos, Tijuana, B. Calif., Mexico; under oath to tell the true affirm and declare the following:

That on May 31, 1972, on or about 6:30 p.m. I was detained by an officer of the San Ysidro Border Patrol at 320 Sandstone Ct., Chula Vista, Calif., the officer asked me for documentation in which I stated to him that I had no papers at all. After questioning me and my companions, we were transported to the San Ysidro Border Patrol Office. Immediately after we arrived, the Border Patrol officer asked the following: He asked me if I was married, in which I answered yes, he said he thinks I have many admirors because I am good-looking, but expressing himself in obscene words. He asked me if I have children, he took my weight and height, he looked at me to see if I had any needle mark on my face or arms, he made me sign a paper and gave it to me and I was conducted to the other room where my companions were. After interrogating me, he proceeded to interrogate my two companions, then we were transported to the international border, once we were there, the officer insisted to my two companions to leave with the flow pedestrain traffic in which they stated to him that all three of us will leave or all three of us will stay. Very disturbed he told my companions to get back into the patrol car and continued in another direction without letting us get out of the patrol car at the border. We continued on the road for about 15 or 20 minutes until we reached the high mesa which is located in Brown Field, he traveled all the way to the fence where the division of Mexico and the United States is outlined. He insisted to my two companions that they immediately jump the wire fence into Mexico in which my companions refused to do so, I wanted also with them but he grabbed me by the arm and threw me in the front seat of the patrol car and he told my companions they better get going because he will do something to them and to me, in other words he (threaten) us. So they left. Once he had me on the front seat of the patrol car, he went back a few feet and then he order me to take my brassiere and panties off, I told him no and he insisted. He then got his flash-light and asked me again "take your brassiere off, I want to see if they are real and also take your panties off so that I can see if you have concealed money or documents". After a long struggle with this officer until my strenght was out, he stripped me completely and violated me, he made a statement and said "I hope you do not have any disease", he then told me to get dress and to get out of the patrol car and go to my country. I want to state that due to the sexual abuse rape, I started to bleed very badly, I called Mrs. Vera Leon the next morning and described what had heppened to me and she immediately contacted Mr. Albert R. Garcia.

I herewith affirm and declare that the foregoing is a true and correct statement of fact.

Martha Elena Parra Lopez

SUBSCRIRED AND SWORN TO BEFORE ME. This 7th day of June, 19 72 At San Ysidro, California

Mont RAn -